

Causa Rol N° 25-2011.-
Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Claudio Mesa Latorre.

Temuco, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. -

VISTOS:

ÍNDICE

I. Relación de la Sentencia.....3 - 5

II. Resumen ejecutivo.....5 - 6

III. Actuarios de tramitación y dato técnico.....6

IV. Ubicación de Doctrina.....6 - 7

V. Ubicación de Jurisprudencia..... 7

VI. Reflexiones de lesa humanidad..... 7

VII. En cuanto a la Acción Penal:

A. Declaraciones (18).....7 - 28

B. Documentos (12).....28 - 34

 Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....34

 Calificación jurídica de los hechos.....34 - 38

 Concepto de Lesa Humanidad.....38 - 40

C. Declaraciones indagatorias:

 Declaraciones indagatorias de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff.....40 - 47

 Análisis de las declaraciones de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff.....47 - 65

D. En Cuanto a las Defensas:

 Defensa del abogado Patricio Contreras Boero, en representación de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff..... 65 - 67

E. Análisis de las defensas: Consideraciones previas al análisis de la defensa:

A. Obligación de Investigar..... 67 - 82

B. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán..... 82 - 92

C. Estado de Derecho..... 92 - 96

D. Convenio de Ginebra.....	96 - 97	
F. Análisis de la defensa específica:		
Análisis de la defensa específica de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff	98- 103	
G. Acusaciones particulares		
Acusación particular de la abogada Catalina Ross Fredes , en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.....	104 - 105	
H. Adhesión a la Acusación Judicial del abogado Vladimir Alberto Riesco Bahamondes , en representación de los querellantes Juana Hortencia Asenjo Asenjo, Marianela Quiteria Rosas Asenjo, Carmen Gloria Rosas Asenjo, Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benecio Rosas Asenjo,		105
I. Reflexiones sobre lesa humanidad.....	106 - 112	
J. Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:		
Atenuante de Responsabilidad Penal.....	112	
Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual.....	112 - 115	
Agravantes de Responsabilidad Penal.....	115 - 116	
Determinación de la Pena.....	116 - 118	
Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....	118 - 125	
VIII. En cuanto a la Acción Civil:		
Demanda civil interpuesta por del abogado Vladimir Alberto Riesco Bahamondes , en representación de los querellantes Juana Hortencia Asenjo Asenjo, Marianela Quiteria Rosas Asenjo, Carmen Gloria Rosas Asenjo, Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benecio Rosas Asenjo,	125 - 127	
Contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer , en representación del Consejo de Defensa del Estado.....	127 - 134	
Análisis de la contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado.....	134 - 143	
Acreditación probatoria del daño moral.....	144 - 146	
Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....	146 - 147	
IX. Aspectos Resolutivos.....	147 - 150	

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 25-2011** del ingreso criminal de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, para investigar el delito de **Homicidio Simple de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo** y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

GUSTAVO EDUARDO SANTIBAÑEZ MANGELSDORFF, R.U.N 6.394.573-0, chileno, natural de San Fernando, casado, 73 años de edad, Subteniente en situación de retiro del Ejército de Chile, últimos domicilios conocidos en calle Circunvalación N°315, torre A D/31 comuna de Curicó u en San José N°2538, departamento N°307, comuna de Maipú, nunca antes condenado (extracto filiación y antecedentes de fs. 508 a fs. 588 Tomo II).

Se inició la causa mediante requerimiento de la Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals García de Cortazar, a objeto que se investigara el hecho y circunstancia que ocasionó la muerte de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, identidad del o los responsables, acusarlos y en definitiva condenarles a las penas pertinentes, de **fs. 1 a fs. 2 (Tomo I)**.

A **fs. 15 a fs. 18 (Tomo I)**, con fecha 04 de marzo de 2011, interpuso querella criminal Alicia Lira Matus, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, por los delitos de homicidio y asociación ilícita cometidos en la persona de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, en contra de los agentes del Estado, y en contra de todos los que aparezcan responsables, aplicando el máximo de la pena legal, con costas.

A **fs. 119 a fs. 129 (Tomo I)**, con fecha 02 de enero de 2013, interpuso querella criminal Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, por su intervención en el homicidio calificado, en grado de consumado, cometido en perjuicio de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A **fs. 876 a fs. 884 (Tomo III)** con fecha 20 de agosto de 2019, interpuso querella criminal Vladimir Alberto Riesco Bahamondes, en representación de doña Juana Hortencia Asenjo Asenjo, de Mariela Quiteria Rosas Asenjo, de Carmen Gloria Rosas Asenjo, de Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benecio Rosas Asenjo, en contra de quienes resulten responsables del delito de homicidio calificado cometido el día 13 de septiembre de 1973 en

contra del hijo y hermano de sus representados Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, hecho ocurrido en la comuna de Osorno, en calidad de autores, cómplice o encubridores, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley.

A **fs. 505 a fs. 507 (Tomo II)**, con fecha 03 de octubre de 2016, se sometió a proceso a **GUSTAVO EDUARDO SANTIBÁÑEZ MANGELSDORFF**, como autor del delito de homicidio simple cometido en la persona de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, perpetrado en la ciudad de Osorno, entre el 12 y 13 de septiembre de 1973, sometiéndolo a prisión preventiva.

A **fs. 1.001 (Tomo III)**, con fecha **02 de marzo de 2021**, **se declaró cerrado el sumario.**

A **fs. 1.008 a fs. 1.010 (Tomo IV)**, con fecha 19 de marzo de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **GUSTAVO EDUARDO SANTIBÁÑEZ MANGELSDORFF**, como autor del delito de homicidio simple de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, perpetrado en la ciudad de Osorno, entre el 12 y 13 de septiembre de 1973.

A **fs. 1.027 a fs. 1.031 (Tomo IV)**, la abogada Catalina Ross Fredes, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, interpuso **acusación particular** en contra de Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, como autor de delito de homicidio simple, en carácter de lesa humanidad, previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en perjuicio de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, delito perpetrado en la comuna de Osorno, en septiembre de 1973, solicitando se le condene en definitiva e imponga una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, más las sanciones accesorias legales, con costas.

A **fs. 1.077 a fs. 1.097 (Tomo IV)**, el abogado Vladimir Alberto Riesco Bahamondes, en representación de las querellantes Juana Hortencia Asenjo Asenjo, Marianela Quiteria Rosas Asenjo, Carmen Gloria Rosas Asenjo, Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benecio Rosas Asenjo, en lo principal de su escrito **se adhiere a la acusación Fiscal**, mediante la cual se acusa a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, como autor del homicidio cometido por agentes del Estado el día 12 de septiembre de 1973 en contra de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. Al primer otrosí deduce **demanda civil de indemnización** de perjuicios en representación de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, Marianela Quiteria Rosas Asenjo, Carmen Gloria Rosas Asenjo, Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benecio Rosas Asenjo, en contra del Fisco de Chile, representado por Álvaro Saez Willer, abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Temuco; solicitando se le condene a pagar la suma total de 2.000.000.000.- (dos mil

millones de pesos) (a razón de \$400.000.000.- cuatrocientos millones de pesos para cada uno de sus representados), por concepto de daño moral, con reajustes e intereses desde la notificación de la demanda, y hasta el efectivo pago de las sumas que en definitiva el Tribunal determine, con costas.

A **fs. 1.115 a fs. 1.141 (Tomo IV)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Saez Willer en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil** deducida por el abogado Vladimir Riesco Bahamondes, en representación de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, Marianela Quiteria Rosas Asenjo, Carmen Gloria Rosas Asenjo, Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benecio Rosas Asenjo, solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas (excepción improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los actores y por haber sido ya reparados en la forma que se expresará. Excepción de prescripción extintiva), y negar lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de la sumas demandadas por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su computo, e improcedencia de condena en costas.

A **fs. 1.152 a fs. 1.157 (Tomo IV)**, el abogado Patricio Contreras Boero, en representación de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff, en lo principal de su escrito contesta acusación. Al primer otrosí medios de prueba. Al segundo otrosí beneficios en el caso que señala.

A **fs. 1.161 (Tomo IV)**, con fecha 06 de junio de 2022, se recibió la **causa a prueba**.

A **fs. 1.193 (Tomo IV)**, con fecha 23 de septiembre de 2022, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A **fs. 1.194 (Tomo IV)**, con fecha 23 de septiembre de 2022, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A **fs. 1.195 (Tomo IV)**, se dictaron medidas para mejor resolver.

A **fs. 1.234 (Tomo IV)**, con fecha 19 de diciembre de 2022 se trajeron los **autos para fallo**.

II. RESUMEN EJECUTIVO

- **ACCIÓN PENAL 1° al 29°:**

1°) y 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones (18) y Documentos (12); **3°)** Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; **4°) y 5°)** Calificación jurídica de los hechos; **6°) y 7°)** Concepto de Lesa Humanidad; **8°)** Declaración Indagatoria de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff; **9°) y 10°)** Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; **11°)**

Defensa del Abogado Patricio Contreras Boero en representación de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangeldorff, 12° y 13°) Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa: A. Obligación de investigar. B. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. C. Estado de Derecho. D. Convenio de Ginebra; 14°) Análisis de Defensa Específica del Acusado Gustavo Eduardo Santibáñez Mangeldorff; 15°) Acusación Particular de la abogada Catalina Ross Fredes; 16°) Análisis de la acusación particular; 17°) Adhesión a la Acusación del abogado Vladimir Riesco Bahamondes en representación de los querellantes; 18) Análisis de la adhesión a la acusación; 19°) Reflexiones sobre lesa humanidad; Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal: 20°) Atenuante de Responsabilidad Penal; 21°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; 22°) y 23°) Agravantes de Responsabilidad Penal; 24°), 25°) y 26°) Determinación de la pena; 27°), 28°) y 29°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.

- **EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 30° al 35°:**

30°) Demanda Civil interpuestas por el abogado Vladimir Riesco Bahamondes, en representación de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, Marianela Quiteria Rosas Asenjo, Carmen Gloria Rosas Asenjo, Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benecio Rosas Asenjo; 31°) Contestaciones de las Demandas Civiles por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado; 32°) Análisis de la contestaciones de las demandas civiles efectuadas por el Fisco de Chile; 33°) Acreditación probatoria del daño moral; 34) Montos; 35°) reajustes e intereses de las sumas demandadas.

III. ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- a. Fecha de inicio de la causa: 24 de mayo de 2011
- b. Actuario de Tramitación Sumario: Tamara Chihuailaf Fuentealba
- c. Actuario de Tramitación Plenario: Paulina Montealegre Carrillo, Pablo Lazcano Cárdenas, y Yessica Sobarzo Tragol.
- d. Tomos:4
 - Tomo I de fs.1 a fs. 360
 - Tomo II de fs. 361 a 672;
 - Tomo III de fs. 672 bis a 1.007;
 - Tomo IV de fs. 1.008 en adelante;
 - Custodia 1
- e. Fojas 150
- f. Considerandos 35

IV. UBICACIÓN DE DOCTRINA:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 6°), 7°), 12°), 21°), 28°), y 32°) (autores se citados en esta sentencia por orden

alfabético: Cristi, Renato; Díaz Labrano, Roberto Ruiz; Fernández Neira, Karinna; García Pino, Gonzalo; Guzmán Brito, Alejandro; Haro Reyes, Dante Jaime; López Goldaracena, Óscar; Lorenzetti, Ricardo; Marshall Barberán, Pablo; Nash Rojas, Claudio; Nogueira, Humberto; Rawls, John; Roxin, Claus; Taruffo, Michele; Vergara Blanco, Alejandro; Villar Borda, Luis; Vilhena Vieira, Oscar; Zaffaroni, Eugenio Raúl).

V. UBICACIÓN DE JURISPRUDENCIA:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 5°), 12°), 13°), 14°), 19°), 21°), 28°), y 32°).

VI. REFLEXIONES DE LESA HUMANIDAD:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 6°), 7°) y 19°).

CONSIDERANDO:

VII. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

1°) Que a **fs. 1.008 a fs. 1.010 (Tomo IV)**, con fecha 19 de marzo de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff**, como autor del delito de homicidio simple, en la persona de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, perpetrado en la comuna de Osorno, entre el día 12 y 13 de septiembre de 1973, en su carácter de lesa humanidad.

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del ilícito penal señalado, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de fs. 1.008 a fs. 1.010 (que corren de fs. **1** a fs. **1.010**), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES (18):

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Juana Hortencia Asenjo Asenjo. | 11. José Agustín Mora Barrera. |
| 2. Juan Mario Arancibia López. | 12. O'Higgins Caupolicán Bravo Sandoval. |
| 3. Osvaldo Rogel Andrade. | 13. Mario Enrique Arias Coronado |
| 4. Ana del Carmen Hidalgo Hidalgo. | 14. Ramiro Labayru Martínez. |
| 5. Delicia del Carmen Rauque Arcos. | 15. Adrián Moisés Soto Alarcón. |
| 6. Nibaldo Cumican Cuicui. | 16. Alejandra Carola Rosas Asenjo. |
| 7. Fernando Díaz Balboa. | 17. Carmen Gloria Rosas Asenjo. |
| 8. Luis Benecio Rosas Asenjo. | 18. Marianela Quiteria Rosas Asenjo. |
| 9. Dagoberto Moraga Rojas | |
| 10. José Héctor Carmona Cárdenas | |

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1. JUANA HORTENCIA ASENJO ASENJO, (de 35 años a la fecha de los hechos). Quien declara a fs. 10 (Tomo I); a fs. 36 (Tomo I); a fs. 151 (Tomo I) y a fs. 945 bis a fs. 946 (Tomo III).

En declaración extrajudicial, de fecha 04 de septiembre de 1990, que rola a **fs.10 (Tomo I)**, ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación soslaya que su hijo salió de su casa, siendo aproximadamente las dieciocho horas, con destino a una reunión del Partido Socialista. Estando en la reunión, por conversaciones que ha tenido con un compañero de su hijo, de nombre Adrián Soto, llegaron los militares e ingresan violentamente al lugar. Una vez que ingresan su hijo sale del lugar, pero no alcanza a dar unos cuantos pasos cuando los militares le disparan, queda gravemente herido. Los militares lo llevan en el furgón en que se movilizaban al hospital de Osorno, centro asistencial en donde muere el mismo día. En cuanto a la identidad de los involucrados la desconoce. Indica que el certificado de defunción no señala la causal de su muerte, sin embargo, tanto ella como su marido, vieron el cuerpo y les consta que la bala ingreso por la espalda y salió en el pecho.

En declaración extrajudicial, sin indicación de fecha rolante a **fs. 36 (Tomo I)**, (cuya copia se encuentra a fs. 151 Tomo I), decanta que el día 11 de septiembre de 1973, entre las 17:30 a las 18 horas, Reinaldo salió de su hogar en dirección desconocida, ya que no informó a sus padres donde se dirigía, solo dijo "que tenía que hacer unas diligencias". Como no llegó ese día, el padre don Luis Rosas, fue donde sus suegros en Rahue Alto a preguntar por él, ahí le informaron que había pasado a saludarlos el día 11 en la tarde. Posteriormente, el padre fue

hacer averiguaciones a la Primera Comisaría de Osorno, al Hospital de Osorno, donde trabajaba una hermana del Padre, quien le informó que Reinaldo estaba en la morgue, no lo podía creer y fue a ver, lo reconoció, hizo los tramites y se lo entregaron. El padre le dice que tenía un proyectil en la espalda y salió por el pecho. Fue enterrado en el cementerio de Osorno. Por indagaciones posteriores supieron que Reinaldo estaba en una reunión y una vecina del lugar dio aviso a los militares, quienes rodearon el lugar, el niño arrancó y al saltar un cerco recibió las balas. Sostiene que la persona que habría “matado” a Reinaldo, es un militar de la población Bellavista de Rahue, Osorno, a quien le apodan “El Chocolito”. Que hay un testigo, Adrián Soto, que actualmente se encuentra fuera del país.

En declaración extrajudicial, de fecha mayo del 2011, que rola a **fs. 28 (Tomo I)**, soflama que Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, era su hijo, quien tenía 17 años de edad al momento de fallecer. Que Reinaldo Patricio era presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombre de Osorno. El día 12 de septiembre de 1973, en horas de la mañana. Reinaldo salió de su casa, indicando que participaría en una reunión convocada por el Partido Socialista, la que se realizaría en una casa ubicada en el sector de Rahue Alto, de la misma ciudad, desconociendo la dirección exacta. Esa noche Reinaldo Patricio, no regresó a dormir a casa, por lo que al día siguiente, en horas de la mañana tanto ella como su esposo Luis Rosas Ruiz, actualmente fallecido, comenzaron a buscarlo en distintos lugares, sin resultados. Finalmente, el cuerpo sin vida de su hijo fue encontrado en la morgue del hospital de Osorno; haciendo presente que al reconocer el cadáver de su hijo, pudo constatar que el cuerpo tenía una herida en la espalda, dándole la impresión que dicha lesión era una bala que salió por el pecho. Agregando haberse enterado que su hijo Reinaldo, efectivamente había sido herido de bala por los militares, cuando intentaba huir del lugar del lugar, donde se encontraba participando en la reunión del Partido Socialista, junto a otras personas, de las cuales desconoce sus identidades; no obstante Reinaldo no se encontraba armado. Que no realizó gestiones para determinar las identidades de los militares que “mataron a su hijo”.

En declaración judicial, de fecha 29 de junio de 2020, que rola de **fs. 945 Bis a fs. 946 (Tomo III)**, se le lee declaración de fs. 10, se lee el pie de página de la misma donde de manera manuscrita se deja constancia que la señora Eliana Amelia Paredes Fonseca, fue testigo de la detención de Mario Fernández Acum, sabe que en la detención de Reinaldo Rosas estaba a cargo de la patrulla de Mario Arancibia López, quien era un cabo que se alojaba en la casa de la señora Paredes y el mismo se lo relató. La testigo sostiene que ese antecedente lo aportó la señora Eliana se lo contó. Ratificando su declaraciones

de fs. 10 y de fs. 25. Consultada si fue al hospital con su marido y vio el cuerpo, responde que su marido fue ella no y que una cuñada que trabajaba en el hospital, se juntó con su marido y pudo ver el cuerpo y el proyectil. Se le lee declaración de fs. 151, el cual ratifica, suma que ese año su hijo iba a licenciarse de cuarto medio. Tiempo después el liceo hizo un homenaje envíalo posteriormente la Licencia de cuarto medio de su hijo. No recordando fecha exacta. Recordando que su casa era vigilada todos los días, que estuvieron vigilados por muchísimo tiempo por lo que tenían temor de salir de la misma, sobretodo sus hijas tenían mucho miedo a los carabineros y a los militares. Que la autoridad no dio ninguna justificación. No sabe si esto fue comunicado por radio, en un bando o si salió en un diario, que en ese tiempo era muy difícil porque no habían medio para comunicarse, las noticias que le llegaban y les preguntaba la gente si era él que había muerto. Que era imposible poner un aviso. La hermana de su marido se llamada Ana Inocencia Rosas Ruiz. Se le pregunta si tiene conocimiento de la persona de Flor Ángel Varas, dice que era muy amiga de su hijo y la mamá de ella era amiga con ellos también.

A.2. JUAN MARIO ARANCIBIA LÓPEZ (de 23 años a la fecha de los hechos). Quien declara a fs. 59 a fs. 60 (Tomo I); de fs. 329 a fs. 330 (Tomo I) y de fs. 352 a fs. 356 (Tomo I).

En declaración judicial, de fecha 27 de abril de 2012, que rola de **fs. 59 a fs. 60 (Tomo I)**, proclama que en el año 1973 en el mes de septiembre se desempeñaba como cabo segundo y le correspondía realizar funciones en el regimiento reforzado Arauco, con asiento en la ciudad de Osorno, que a la fecha tenía 23 años de edad. En lo pertinente aduce que él era conductor del vehículo militar, patrulla militar compuesta por un oficial y seis soldados, y se dirigieron al sector de Rahue Alto, porque habían recibido información que en el lugar se desarrollaba una reunión del MIR, le parece que esto ocurrió entre el 11 y 12 de septiembre de 1973. En estas circunstancias, cuando llegaron al lugar, se bajaron los soldados con el oficial y él se quedó cuidando el vehículo, esto ocurrió entre las 8 y 10 de la noche, ellos ingresaron a un pasaje que estaba muy oscuro y al parecer quienes estaban reunidos supieron que había llegado un patrulla militar y huyen del lugar, el deponente dice que se encontraba a aproximadamente a 80 metros de distancia, la luz estaba cortada, que no los alcanzaban a ver. En ese momento escuchó un solo disparo, al rato después llega la patrulla con el herido, como esta oscuro no miró a la persona y enseguida recibió la orden de dirigirse de inmediato al hospital. Un soldado hizo el disparo cuando las personas huían del lugar, se disparó un arma que identificó como un fusil, no sabe quién disparó nunca preguntó. A cargo de esa patrulla estaba un subteniente de apellido italiano,

pero no recuerda ni el nombre ni el apellido. Nunca fue interrogado en algún Juzgado Militar sobre estos hechos. En cuanto a los miembros de la patrulla, a los soldados, los conocía sólo de vista, no puede decir algún nombre específico de quienes iban en la patrulla, llegaron al regimiento y después las patrullas eran formadas por otros integrantes, pero él siempre fue conductor, tenía licencia de conducir clase A, le parece que la sacó en la municipalidad de Osorno o de San Antonio, que es donde hicieron el curso de conductores de vehículos. Aduce que él no le disparó a Reinaldo Rosas, que no portaba fusil, portaba pistola. Añade que los soldados que formaban la patrulla fueron los que lo guiaron al lugar, ya que ellos conocían la zona. En cuanto al relato de quien habría disparado a Reinaldo, un militar que vivía en la población Bellavista de Rahue de Osorno, a quien le apodaban "El chocolito" versión de fs. 36, eso no le consta, pero puede ser. Que conoce a la señora Eliana Amelia Paredes Fonseca, era la cónyuge del cabo Bruno Villalobos, quien era mayor que él, unos diez años y trabajaba en el ejército de planta.

En declaración judicial, de fecha 12 de diciembre de 2014, rolante de **fs. 329 a fs. 330 (Tomo I)**, aquilata que ratifica la declaración prestada ante el Tribunal, sin poder agregar ningún nuevo dato a la misma. Exhibida la nómina de las personas que integraban el Regimiento de Ingenieros Reforzados Arauco de la ciudad Osorno el año 1973, señala que cuando declaró el año 2012 hizo referencia a un señor de apellido raro o italiano que no recordaba, sin embargo, ahora al ver el listado piensa que el único que podría ser es el subteniente Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, quien se desempeñaba en material de guerra, por lo que no se relacionaba con ellos- el resto de la tropa- directamente sino en otro lugar. A los demás los recuerda como compañeros más cercanos. Por lo señalado, asegura que este señor Santibáñez era quien iba como jefe de la patrulla y fue él quien se bajó con los soldados y entró al pasaje donde se reunían los adherentes al MIR. A la pregunta cómo traían al detenido que había sido herido, responde que dos personas lo traían por los brazos y otro dos por los pies. Sostiene que solo lo vio cuando llegó el personal con el detenido a dejarlo en la camioneta militar (un vehículo americano del ejército), pero dice que es posible que éste haya sido arrastrado momentos antes. Adiciona que no sabe si en ese grupo había alguien apodado "El chocolito". Afirmando que en grupo que integraba la patrulla que trasladó en ese operativo, que eran todos militares para él eran desconocidos, por lo cual no puede aportar apodos. Que las órdenes de disparar se daban en el cuartel, en forma previa a los operativos. Todos salían sabiendo que podrían disparar y también que podrían ser atacados. Que a todo el personal se le entregó munición de guerra y era para ser utilizado.

En declaración judicial, de fecha 30 de agosto de 2004, que rola a **fs. 352 a fs. 356 (Tomo I)**, decanta su carrera funcionaria y en lo pertinente sostiene que en septiembre de 1973 formaban parte del Servicio de Inteligencia Militar de Osorno del regimiento Arauco, los funcionarios Valdebenito, Finche, Romero y Rocha, y le suena un oficial Pérez a cargo de esa labor. Que después del 11 de septiembre el regimiento Arauco se movilizó completamente y se produjeron patrullajes y allanamientos. No recuerda haber participado en la detención de alguien y tampoco vio detenidos en el regimiento y menos en otro lugar. El 11 de septiembre estaba asignado a la primera compañía, a cargo de un camión para transporte de personas, un jeep y una camioneta tres cuartos. Soflame que el regimiento Arauco tenía toda clase de vehículos y maquinarias los que detalla. En lo referente a la muerte de un joven que era dirigente del liceo de hombres de Osorno, dice que una noche, entre las 20:00 y las 21:00 horas, al parecer el mismo día 11 de septiembre, un subteniente que había llegado al parecer a principios de 1973, de apellido italiano o alemán, de pelo rubio, recibió la orden de la comandancia en el sentido de allanar un domicilio en Rahue Alto, en el cual se habían reunido presumiblemente extremistas, por lo que junto a cuatro soldados rasos se embarcaron en una camioneta que personalmente condujo, guiado por los mismos soldados. Al llegar al lugar, el subteniente y los cuatro soldados se adentraron a la población mientras él se quedó al cuidado del vehículo y al cabo de unos cinco minutos escuchó un disparo de fusil. De ahí pasaron unos quince minutos más y llegaron los soldados con el cadáver de una persona de sexo masculino, un joven de unos 20 años más o menos, al parecer moreno, a quien le vio sangre y un hoyo en el pecho. Escuchó de los soldados que las personas de la casa habían arrancado y que el joven muerto había caído herido de muerte en un sitio aledaño a la casa. Que ningún civil se acercó donde ellos y además estaba oscuro y no andaba nadie. Que él no se metió a la casa, pero los soldados no llegaron con armamento que no fuera el que portaban sino que solamente con el cadáver. El cuerpo tenía un solo disparo. No recuerda si trajeron o no documentación. Se explicó la muerte de la persona porque supone que al llegar a la casa él arrancó y ante eso alguno de los soldados le disparó. No recuerda que el subteniente hubiera hecho algún comentario y enseguida se dirigieron al hospital ubicado en calle Los Carrera, donde fue recibido por los médicos, dice que él pensaba que esa persona estaba fallecida. No recuerda los nombres u apodos de los soldados que participaron en ese operativo, pero eran soldados conscriptos, es decir, los que hacen el servicio militar. Consultado dice que en la escuela de ingenieros conoció a Bruno Villalobos, quien estaba un curso más adelantado que él, persona que fue dada de baja en 1973 “por sus inclinaciones

de izquierda, según se rumoreo”, quien era tambor mayor e instructor, con antigüedad de su curso. Quienes veían esas materias era los del servicio de inteligencia militar. También conoció a su esposa Eliana. Solía ir a su casa pues en esa época era soltero y él los recibía a él y a sus otros colegas. Que es efectivo que también recibió a su futura esposa y a su hermana, quien había ido a verlo y tuvieron la mala suerte de que el “11 las pillaré allá”. Dice que no tomaba pensión en la casa de él y en ésta vivía el matrimonio y una niña de 12 años, pero no recuerda por qué estaba allí. Se le pregunta por otros hechos. Cimentando que en el regimiento Arauco estaban el capitán Héctor Orrego Vidal, el teniente Nelson Haase Bassay, uno de apellido Ramírez que era segundo comandante y otro que no recuerda.

A.3. OSVALDO ROGEL ANDRADE (de 44 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 15 de febrero del 2013, que rola a **fs. 168 a fs. 169 (Tomo I)**, explana que no recuerda fecha exacta fue en el año 1973 días después del golpe de Estado, vio por la ventana del living de su casa, en horas de la tarde, vio a un joven a quien no conocía, que venía arrancando por calle Oruro por calle Río Beni, siendo perseguido por tres militares, doblando por calle Cochabamba hacia El Salvador y en la esquina le dieron alcance los militares y le dispararon, pues escuchó, al parecer dos disparos; luego llegó una camioneta del ejército, lo subieron muerto y se lo llevaron. Al cabo de unas horas, él y algunos vecinos fueron al lugar donde había sido muerto el joven, donde aún había un charco de sangre. Recordando entre los vecinos que salieron a mirar a Martín Pérez y Huenun. Desconociendo quienes eran los militares que mataron al joven. Reitera que no conocía al joven, pero por comentarios, al parecer estaba en una reunión en una casa y de allí había arrancado, desconociendo información del lugar e ignora con que otras personas estaba reunido este joven.

A.4. ANA DEL CARMEN HIDALGO HIDALGO (de 31 años a la época de los hechos). Quien declara a fs. 170 a fs. 171 (Tomo I) y a fs. 708 a fs. 709 (Tomo III).

En declaración extrajudicial, de fecha 15 de febrero de 2015, que rola a **fs. 170 a fs. 171 (Tomo I)**, esgrime que no recuerda fecha exacta de cuando sucedió, pero fue en 1973, después del golpe de Estado, un día en la tarde se encontraba en su casa cuando de pronto escuchó unos balazos, como ráfaga. Al ver por la ventana vio que unos dos o tres militares le dispararon a un joven desconocido, el cual quedó tirado casi al frente de la casa, ya que ese joven venía arrancando desde las casas que están por el lado de atrás. Después supo que

venía desde la casa de la familia Juan Barrera y su señora Socorro de quien no recuerda apellido (ambos fallecidos). La casa de la familia Barrera colinda por la parte de atrás con la de la familia Fernando Díaz. Este joven que mataron venía de la casa de don Fernando, saltó el cerco de la casa de don Juan Barrera y frente a esa casa lo mataron. Después de que le dispararon a este joven, llegó un camión de los militares y entre unos cuatro de ellos lo agarraron y lo echaron al camión. Por comentarios supo que eran dos los jóvenes que venían arrancando, pero uno logró hacerlo, mientras el otro “fue el chico que murió”. Desconoce quiénes eran los militares que mataron a este joven, tampoco se enteró después.

En declaración judicial, de 07 de noviembre de 2017, rolante de **fs. 708 a fs. 709 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 165 a fs. 166 (la que consta a fs. 170 a fs. 171), prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile. Decantando que no conocía al joven que falleció. Ese día sintió una ráfaga de balazos, pero no recuerda con precisión el número de militares que le dispararon, pero deben haber sido cerca de dos. Tampoco recuerda un militar de tez morena. Que vio el cuerpo caer, “deben haberle disparado por la espalda”. Sabe que el joven venía escapando en compañía de otro joven, desconoce a ciencia cierta desde que casa venían corriendo, asume que deben haber estado en una reunión en la casa de Díaz, saltando el cerco para escapar. Los jóvenes andaban en el camión, luego que el cuerpo cae lo recogieron entre al menos cuatro y lo subieron de vuelta al camión. Que solo vio militares en el lugar. En cuanto a la manzana 3 de la población, dice habían más testigos aparte de su fallecido marido y ella, recuerda a la familia Barrera (fallecidos), la familia Paredes, la familia de Fernando Díaz y Teresa Báez podrían aportar antecedentes. Dice no conocer a ningún uniformado apodado “El chocolito”, que no recibió visita de militares en su casa con posterioridad a lo ocurrido. Afirmando que el regimiento N°4 de Arauco era el único que existía en Osorno en esa época, por lo que el camión que estaba en la población debe haber salido de ahí. Menciona que los hechos ocurrieron cerca de las cuatro de la tarde, pero no le es posible recordar como andaba vestida la víctima. Solo vio a través del visillo de la ventana lo que aconteció, nunca lo conversaron con vecinos, pero es un hecho difícil de olvidar.

A.5. DELICIA DEL CARMEN RAUQUE ARCOS (de 29 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial**, de fecha 15 de febrero de 2015, que rola de **fs. 172 a fs. 173 (Tomo I)**, funda que recuerda bien el caso, pero no recuerda fecha exacta, pero fue un día en la tarde, después del golpe de militar, ella se encontraba afuera de su casa a eso de las 18:30 horas más o menos, cuando a unos 20 metros vio a un joven que estaba parado en la calle, se notaba

que venía arrancando y justo frente a la casa paró un camión de los militares, donde se bajaron “dos milicos”, los cuales le dispararon a este joven, fueron como cuatro disparos, pudiendo ver que el chico dio como una vuelta y cayó al suelo, quedando tirado justo donde está ahora el portón del templo Mormón. Después de que le dispararon lo subieron al mismo camión que se estacionó frente a la casa, pero ahí ya estaban como siete militares. Por comentarios supo después que un vecino de apellido Hurtado, conocido como “Chamel Hurtado”, quien era dueño de un negocio que estaba en la esquina de calle Cochabamba con Río Beni, había llamado a los militares. Además por comentarios supo que el joven muerto había salido por la parte de atrás de la casa de Díaz, saliendo por la casa colindante que da a esta calle Cochabamba, pues la casa de Díaz queda ubicada por calle Oruro. Que no pudo reconocer a ninguno de los militares que le dispararon al joven, ya que andaban vestidos iguales.

A.6. NIBALDO CUMICAN CUICUI (de 26 años a la época de los hechos). Quien declara a fs. 226 a fs. 227 (Tomo I) y a fs. 245 a fs. 246 (Tomo I).

En declaración extrajudicial, de fecha 05 de agosto de 2013, que rola de **fs. 226 a fs. 227 (Tomo I)**, adosa que efectivamente después del golpe militar él se encontraba viviendo con su madre en el domicilio ubicado en la población Carlos Ibáñez, en calle Oruro, no recuerda la numeración exacta, tampoco recuerda la fecha, pero ese día se reunieron en casa de su madre un grupo de jóvenes, la mayoría socialistas, en total eran 12 jóvenes, los cuales empezaron a llegar a eso de las seis de la tarde, la idea de esa reunión era ponerse de acuerdo o ver la posibilidad de tomarse la Comisaria de Carabineros de Rahue o la de Ovejería, pero a eso de las diez u once de la noche llegaron los militares en un camión y se fueron directamente para su casa. Ahí él alcanzó avisarles a los compañeros, los cuales arrancaron en diferentes direcciones, pero lamentablemente Reinaldo no alcanzó a arrancar, ya que su chaqueta se le enredo en los alambres de un cerco. A él se lo llevaron detenido, lo subieron al camión donde también echaron el cuerpo de Reinaldo, los trasladaron al regimiento Arauco de Osorno, donde permaneció sólo un momento porque después lo llevaron a la primera Comisaría de Carabineros de Osorno. No recuerda los nombres de los compañeros que llegaron ese día a la casa de su mamá. Recordando que esa noche junto a los militares llegó un carabinero de apellido Meneses, era sargento por lo que recuerda, a este lo conocía porque le había hecho unas pegadas de carpintería en la Comisaría de Rahue Alto. Respecto a los militares no conocía a ninguno, en su mayoría eran jóvenes y solo tres eran de más edad y tenían grado.

En declaración judicial, de fecha 25 de octubre de 2013, que rola de **fs. 245 a fs. 246 (Tomo I)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 221 a fs. 221 (que consta a fs. 226 a fs. 227) e invoca que debe aclarar que el día de los hechos a eso de las 22:30 horas en circunstancias que se encontraba en la casa de su madre acompañado de un grupo de compañeros del Partido Socialista, salió al portón a fumar un cigarrillo, en ese momento vio acercarse un camión blindado que colocó en frente del portón de la casa, cerró el portón con candado por dentro y avisó a sus compañeros que se fueran, en ese momento ingresaron los militares y carabineros quienes saltaron el portón, estaba acordonada la manzana completa. Asegura que carabineros y militares andaban en un mismo camión. Todos sus compañeros arrancaron y escuchó un balazo cuando mataron a su compañero Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. El balazo vino de la calle de atrás. El disparo vino de un soldado, no de carabineros. En cuanto a las edades de los militares y carabineros puede decir que todos eran jóvenes, el de más edad era el sargento de carabineros Meneses. Que fue quien llamó a la unidad militar para que no lo bajaran al regimiento, sino que lo llevaran a la primera comisaría del centro. Sostiene que había militares al interior de su casa, que él también estaba en el lugar cuando escuchó un solo disparo. Preguntado dice que había luz eléctrica cuando ocurrieron los hechos, que no hubo corte de luz. Recordando que la persona que conducía el camión, era joven, moreno y de bigotes. Agrega que a él lo subieron al camión detenido y luego pasaron a buscar el cuerpo del “finado” Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, que no hubo otros detenidos, ya que todos los demás lograron escapar. Sabe que Meneses está fallecido. Refiere que el funcionario Montiel que menciona Fernando Díaz, no estaba en la patrulla cuando falleció Patricio Rosas. Este funcionario estaba en la patrulla cuando detuvieron a Fernando Díaz. No conoce a la persona apoda “El chocolito”. Precisa que la patrulla estaba integrada por los militares y un solo carabinero que era el sargento Meneses, que actualmente se encuentra fallecido.

A.7. FERNANDO DÍAZ BALBOA (de 29 años a la época de los hechos). Quien declara a fs. 224 a fs. 225 (Tomo I) y de fs. 247 a fs. 248 (Tomo I).

En declaración extrajudicial, de fecha 05 de agosto de 2013, que rola de **fs. 224 a fs. 225 (Tomo I)**, adopta que el 12 de septiembre de 1973, vivía en su casa ubicada en calle Oruro N°1773, población Carlos Ibáñez del Campo, en Rahue Alto, comuna de Osorno, propiedad en la que habían dos casas, la principal estaba adelante donde él vivía con su esposa María Teresa Baez Mancilla y sus tres hijos, todos menores de edad en ese tiempo, mientras en la segunda vivienda ubicada en la parte posterior del mismo terreno vivía su madre

Ida Elisa Balboa (fallecida). Que él estaba en su casa acostado cuando escuchó que llegó gente a la casa de su madre, esto como a las nueve de la noche de ese día y al cabo de dos horas, entre las diez treinta y las once horas de la noche, entraron destruyendo las puertas un grupo de carabineros y militares, entre los que recuerda al sargento Montiel y otro de apellido Meneses, no recuerda sus nombres, pero uno de ellos el de apellido Montiel era del destacamento de Rahue Alto, mientras que Meneses, por comentarios supo que era del destacamento del sector de Ovejería. Recuerda que los militares lo sacaron de la cama e inmediatamente lo subieron al jeep de los militares y luego lo trasladaron al regimiento Arauco de Osorno donde estuvo dos días detenido. Al momento que llegaron los militares escuchó varios disparos y supo que había un grupo de jóvenes que arrancaron, entre ellos fue detenido su hermano Nibaldo Cumican Cuicui, éste fue detenido, pero en calle Cochabamba fue muerto Reinaldo Rosas, quien era uno de los jóvenes que había arrancado desde la casa de su mamá. Desconoce la identidad de las otras personas que estaban en la casa de su mamá, lo único que sabía es que eran jóvenes y conocido de su hermano. Que al conversar con Nibaldo, supo que este había llegado a la casa de su madre acompañado de un grupo de amigos, pero desconoce cuál fue el motivo, si andaban arrancando o si estaban haciendo alguna reunión, sólo que al llegar los militares los jóvenes huyeron hacia la parte posterior de la casa, saliendo a calle Cochabamba donde fue ultimado uno de ellos, es decir, Reinaldo Rosas. Respecto a las identidades de los carabineros solo recuerda los apellidos Montiel y Meneses, al primero lo conocía de vista, pero desconoce mayores antecedentes de sus identidades.

En declaración judicial, de fecha 25 de octubre de 2013, rolante de **fs. 247 a fs. 248 (Tomo I)**, ratifica declaración extrajudicial que rola a fs. 220 (que consta a fs. 224 a fs. 225), excepto, que el día en que ocurrieron los hechos lo iban a tomar detenido, pero al final no se lo llevaron porque su señora se desmayó. Advierte que en la fecha en que ocurrieron los hechos él se desempeñaba en una panadería, por lo mismo se acostaba temprano para poder salir a trabajar a las 0:45 horas, se demoraba como una hora caminando y pasaba todos los días a pie frente a la comisaría de manera que los carabineros lo ubicaban, en la patrulla estaba un carabinero de apellido Meneses, quien sabía donde él trabajaba y piensa que por este motivo no se lo llevaron. Dice que escuchó un disparo. Preguntado dice que había luz eléctrica. Dice que después de ocurrido los hechos se comentaban que a cargo de la patrulla andaba un militar de apellido Uribe. Aclara que no identifica el apellido Uribe con el apodo "El chocolito".

A.8. LUIS BENECIO ROSAS ASENJO (de 10 años a la época de los hechos). **En declaración judicial**, de fecha 11 de diciembre de 2014, que rola a **fs. 326 a fs. 327 (Tomo I)**, alega que es hermano de la víctima Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. Recuerda que su hermano era presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres y presidente de la juventud socialista, que estuvo estudiando el 10 de septiembre de 1973 hasta tarde, lo que siempre hacía pues era una persona muy ilustrada, le gustaba leer mucho y se estaba preparando para dar la prueba de aptitud académica, pues quería estudiar ciencias políticas, para llegar a ser presidente de Chile, como él decía a sus cortos 17 años. En esa época vivían con sus padres en la ciudad de Osorno. El día 11 de septiembre y luego del golpe militar, su hermano llegó alterado a la casa y le pidió que le ayudara a quemar en la chimenea muchísimos documentos que tenía, tales como libros de política o de reuniones de él y de sus compañeros socialistas, llegaron a pensar que tanto humo alertaría a los militares. Esa noche no durmieron, pues pensaban que allanarían la casa, pero nada pasó. Al día siguiente su hermano quiso salir, pues deseaba organizar a sus compañeros y hacer frente a lo que él consideraba una situación anormal causada por los militares. Su madre ante la decisión le rogó de rodillas, pero Reinaldo no le hizo caso y salió de la casa, sin regresar. Al día siguiente, junto a sus padres fueron a la casa de sus abuelos maternos Enrique Asenjo Márquez, quien les dijo que había visto a Reinaldo, pero solo había pasado a saludar. Por ello continuaron la búsqueda, hasta finalmente llegar a una comisaría, donde le recomendaron en ir al hospital, porque sabían que ahí había algunos occisos. Al llegar, efectivamente encontraron el cadáver de Reinaldo a quien vio personalmente impactándose el estado en que se encontraba, pues tenía una herida en la espalda producto de un balazo que le atravesó el cuerpo y, además, sus rodilla y ropa rotas que impresionaban como si lo hubieran arrastrado por terrenos duros y por un largo trecho. Afirma que él tenía 10 años cuando vio muerto a Reinaldo. El cuerpo de su hermano les fue entregado al día siguiente, es decir, el 13 de septiembre de 1973, fueron sus funerales en el cementerio general de Osorno. Aclara que durante estos años ha logrado recabar poca información sobre el fallecimiento de su hermano, logrando averiguar por comentarios de las personas que regularmente visitaban la tumba de Reinaldo cuando se conmemoraba su muerte, que este fue herido por una bala disparada por un militar que apodaban “Chocolito”, que no averiguo si esto es cierto o no, porque su madre le prometió no inmiscuirse más, ya que tenía miedo que le ocurriera lo mismo que a Reinaldo. Señala que sus padres nunca superaron la muerte de su hermano y cada año, en el mes de septiembre su madre sufre, su

depresión no ha acabado y todos los días en un espacio de cinco años la acompañó al cementerio a ver la tumba de Reinaldo.

A.9. DAGOBERTO MORAGA ROJAS (de 21 años a la época de los hechos). Quien declara a fs. 456 a fs. 458 (Tomo II) y a fs. 671 a fs. 672 (Tomo II).

En declaración extrajudicial, de fecha 14 de abril de 2016, que rola a **fs. 456 a fs. 458 (Tomo II)**, no aporta antecedentes a estos hechos.

En declaración judicial, de fecha 24 de mayo de 2017, que rola a **fs. 671 a fs. 672 (Tomo II)**, se le pregunta por otros hechos, y luego proclama en lo pertinente que ratifica su declaración extrajudicial de fs. 453 a fs. 454 (que consta a fs. 456 a fs. 458) indicando que nunca tuvo que realizar detención durante todo el tiempo que presto servicios en el regimiento de Arauco, desconociendo si algún colega habría practicado detenciones. Que a la unidad de ingenieros sí le correspondía salir a hacer patrullajes y detenciones, pero no le consta ello. Que escucho el apodo “El chocolito”, pero nunca tuvo contacto directo con él, y supo que él estaba fallecido, no recuerda quien se lo dijo. Se le lee en lo pertinente declaración de fs. 36 y señala que no conoce los hechos.

A.10. JOSÉ HÉCTOR CARMONA CÁRDENAS (de 31 años de edad a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial**, de fecha 29 de abril de 2016, que rola a **fs. 464 a fs. 465 (Tomo II)**, soslaya en lo pertinente que cumplió funciones en el regimiento de Ingenieros N°4 Arauco de Osorno hasta mediados de septiembre de 1973, luego de lo cual se fue en comisión de servicios a Valdivia. En el regimiento Arauco de Osorno cumplía funciones con el grado de cabo segundo, dentro de las funciones que le tocó cumplir desde el 11 de septiembre de 1973 y hasta que se fue en comisión de servicios de Valdivia, estaban las de patrullar en el día y guardia de noche en la población militar de Osorno, la cual quedaba en Bellavista, otra en Rahue Alto y la ultima en Rahue 2. Cuando le tocaba salir a patrullar, su función era de conductor de la patrulla, la cual estaba a cargo por lo general de un suboficial o un oficial, estos no eran los mismos siempre, ya que como era conductor, le cambiaban de vehículo según la disponibilidad, pero dentro de los que recuerda está el suboficial Romero, el capitán José Labra Roja, quien era comandante de compañía, siendo estos con los que trabajó, ya que en ocasiones salió solo, a cargo de dos o tres soldados, quienes lo acompañaban más que nada como guardaespaldas. Como estaba acuartelado todo en el regimiento, las ordenes la entregaba la ayudantía, no sabe quiénes específicamente, pero estaba el ayudante teniente Héctor Orrego Vidal y su plana mayor, cuyos nombre no recuerda, pero ellos entregaban la orden al

capitán José Labra Rojas directamente y a su vez él los mandaba a ellos, diciendo que tenía que hacer y donde, sin tener mayor idea de qué pasaba, ya que las misiones secretas o allanamientos los hacían personas especializado del ejército, vestido de civil con quienes no tenía contacto, ellos se entendían directamente con los jefes. En lo que atañe dice que no le tocó participar en un patrullaje donde se diera muerte a una persona, tampoco ubico a un civil de nombre Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, recalcando que no participó en ningún tipo de patrullajes donde se detuviera o diera muerte a alguna persona. Suma que estando ya en la planta del ejército, antes de 1973, un compañero de curso llamado José Puga Pascua lo apodó "Chocolito", ya que era el más moreno de todo el grupo, apodo que continuaron diciendo durante toda su carrera militar. Que mientras trabajó en Osorno vivió en la población Bellavista, en Rahue Bajo, en una casa de esquina de la población militar.

A.11. JOSÉ AGUSTÍN MORA BARRERA (de 29 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial**, de fecha 02 de enero de 2018, que rola a **fs. 743 a fs. 744 (Tomo III)**, decanta en lo pertinente que para septiembre de 1973, se encontraba prestando funciones en el regimiento Arauco, con el grado de cabo primero como instructor. No recuerda el nombre de los oficiales que integraban su compañía. Luego del golpe de Estado debieron salir a realizar patrullajes por las poblaciones. En esa época tuvo que desempeñarse como conductor de un vehículo, el cual iba a cargo de un oficial y otro soldado, los cuales iban rotando. De los patrullajes señala que no le correspondió realizar detenciones. Que al interior del regimiento hubo personas detenidas, pero no permanecían en las dependencias, sino estas personas, según escuchó eran enviados al cuartel de la Policía de Investigaciones. Que había un cabo segundo Juan Ricardo Miranda Soto, que trabajaba como enlace en el cuartel policial. Respecto a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, dice que era un oficial de material de guerra. Desconociendo si esta persona realizó trabajo operativo o no, pero en esa época todos debían salir a patrullar. Respecto a la víctima de autos no tiene antecedentes.

A.12. O'HIGGINS CAUPOLICAN BRAVO SANDOVAL (de 22 años de edad a la época de los hechos). Quien declara a fs. 745 a fs. 746 (Tomo III) y de fs. 908 a fs. 910 (Tomo III).

En declaración extrajudicial, de fecha 03 de noviembre de 2018, que rola a **fs. 745 a fs. 746 (Tomo III)**, (copia de la cual se encuentra a fs. 905 a fs. 906 Tomo III), conjetura que en febrero de 1973 fue trasladado al regimiento

Arauco, en la ciudad de Osorno, que el día del golpe de Estado, se enteraron de esos hechos, durante la formación diaria, disponiendo el comandante del regimiento un despliegue tipo candado el cual implicaba que se controlaran los accesos a la ciudad. Recuerda que a él lo enviaron junto con una patrulla a custodiar el puente Rahue. Que luego se constituyeron patrullas, para el control de toque de queda y protección de instalaciones de utilidad pública como puentes, torre de agua, de electricidad, de comunicaciones permitieran el normal abastecimiento a los ciudadanos. Que la gente que era detenida en control de toque, que era muy poca en general, eran entregadas a carabineros. En el regimiento no habían lugares de detención. Respecto a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, dice que era compañero de promoción, llegaron en el mismo periodo, era oficial de servicio de material de guerra y cumplía idénticas labores en control de toque de queda que él. Respecto a los hechos investigados supo que Gustavo se había visto involucrado en problemas, luego de leer el informe Rettig. En la época solo tomo conocimiento que la patrulla comandada por Gustavo, había tenido problemas, no sabían de qué tipo, pero puede decir que él estaba muy afectado. Que Gustavo no era instructor de armas, era de servicios, se le asignó una patrulla, por lo que no conocía al personal bajo su mando. En relación a la víctima no tiene antecedentes.

En declaración judicial, de fecha 13 de enero de 2020, que rola a **fs. 908 a fs. 910 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola a fs. 745 (copia de la cual se encuentra a fs. 905 a fs. 906 Tomo III), espeta que ingreso a la escuela militar en el año 1966 o 1967, no recuerda con exactitud. Su primera destinación fue el regimiento Arauco de Osorno. Para septiembre de 1973, se encontraba cumpliendo funciones en el regimiento Arauco. Detalla la organización del mismo. Recordando en lo pertinente a su compañero de curso Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, Jorge Schmit Gumusio, Hugo Díaz Valverde, Teniente Cossio, teniente Fernández, teniente Álvarez, teniente Pérez, subteniente Labayru y el ayudante de regimiento Walker. Que él se desempeñaba como comandante de la tercera sección de soldados conscriptos compañía Cañal Bajo, en la formación integral de soldados conscriptos del arma de ingenieros. Sus funciones eran de competencia de la instrucción del arma de ingenieros, construcción de campos minados. Que a primera hora de la mañana recibían la instrucción de control de accesos principales a la ciudad de Osorno. Posteriormente organizados en patrullas de control de toque de queda y en el caso, si hubiese habido detenidos por infracción de toque de queda, ser derivados a carabineros. También tuvo misiones de resguardo a instalaciones de utilidad pública. Participó en patrullajes de control de toque de queda. Los detenidos por este motivo eran

llevados a carabineros. Que nunca tuvo una detención en donde tuviese que disparar a alguna persona para lograr su detención. Sostiene que el regimiento nunca tuvo detenidos en su interior ya que no existía lugar de detención al interior del regimiento Arauco. Que conoce a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, quien es su compañero de promoción de la escuela militar y llegaron juntos al regimiento Arauco, a fines de enero o los primeros días de febrero del año 1973, y de José Héctor Carmona Cárdenas, a quien conoció en el regimiento Arauco, en su función de operador de equipos de ingenieros. Reitera que no posee antecedentes de la víctima Reinaldo Rosas Asenjo.

A.13. MARIO ENRIQUE ARIAS CORONADO (de 29 años a la época de los hechos). Quien declara a fs. 747 a fs. 748 (Tomo III) y a fs. 798 a fs. 799 (Tomo III).

En declaración extrajudicial, de fecha 08 de enero de 2017, que rola a **fs. 747 a fs. 748 (Tomo III)**, difunde en lo atinente que en septiembre de 1973, tenía el grado de cabo segundo, se mantenía en la cuarta sección y su función principal era la reparación de caminos. Posterior al golpe de Estado, cambiaron sus funciones, les correspondió realizar patrullajes, guardias y custodia de infraestructura de la ciudad. Que los miembros de las patrullas iban rotando. Los patrullajes los organizaban en la oficina de vice comandante. No recuerda que haya salido algo anormal durante las veces que salió a patrullar. Respecto a Gustavo Santibáñez, era un oficial joven, como había otros en el regimiento, desconociendo a que sección pertenecía. Que José Carmona, “Chocolito”, era un operador de maquinaria, con quien entró prácticamente junto a la institución. No tuvo conocimiento que alguna patrulla haya estado involucrada en un procedimiento que terminase con la muerte de una persona. Respecto a Eduardo Rosas Asenjo, no tiene antecedentes.

En declaración judicial, de fecha 04 de julio de 2018, que rola de **fs. 798 a fs. 799 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fecha 08 de enero de 2018 (la cual se encuentra a fs. 747 a fs. 748 Tomo III), delibera que respecto de la víctima Reinaldo Rosas Asenjo, no recuerda este caso, “es un caso relevante y un hecho así lo recordaría”. Reitera que en septiembre de 1973 se encontraba en el regimiento Arauco, que era conductor y operador de maquina pesada. Que estuvieron, acuartelado en grado uno, pero no recuerda cuanto tiempo. Que en los primeros tiempos tuvieron que hacer patrullajes, que no le correspondió participar en detenciones. El nombre del ex oficial del regimiento Arauco Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, no lo recuerda. Tampoco recuerda con que oficiales salían en los patrullajes, que no preguntaban nada, agregando que

en ese tiempo llegaban muchos oficiales de afuera. Comunica la estructura del regimiento. Recordando a sus compañeros Orlando Epple, José Valdebenito “chocolito”, todos eran operadores y conductores. En cuanto a la cantidad de personas que salían en los patrullajes esto dependía si salían en un camión o en una camioneta $\frac{3}{4}$ si salían en camión eran unos 12 más o menos, también salían cabos segundos quienes tenían que ver con los soldados. Estos patrullaje siempre salían a cargo de un oficial. Los grupos eran rotativos. Usaban dos tipos de armamento, el fusil americano, que llegó en el pacto de ayuda militar, eran unos largos y otro corto. Los oficiales usaban pistola y ellos como conductores usaban fusiles. Se le consulta por otras cosas.

A.14. RAMIRO LABAYRU MARTINEZ (de 21 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial**, de fecha 26 de enero de 2018, que rola a fs. **766 a fs. 767 (Tomo III)**, adopta en lo pertinente que, el 11 de septiembre de 1973, se encontraba trabajando en el regimiento Arauco N°4 de Osorno, se desempeñaba como instructor de la especialidad de ingenieros y soldados conscriptos, a cargo de la segunda compañía. En relación a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, solo lo recuerda ya que pertenecía a la dotación de unidad de servicios, la que mayormente le correspondió salir a terreno. Por José Héctor Carmona Cárdenas, alias el “El chocolito”, (fallecido) no lo conoce. En relación a Reinaldo Rosas Asenjo, no tiene antecedentes.

A.15. ADRIAN MOISÉS SOTO ALARCÓN (de 20 años a la época de los hechos). Quien declara a fs. 790 a fs. 791 (Tomo III) y a fs. 792 a fs. 793 (Tomo III).

En declaración judicial, de fecha 10 de julio de 2018, rolante de fs. **790 a fs. 791 (Tomo III)**, ratifica declaración extrajudicial de 11 de julio de 2018 (la cual consta a fs. 792 a fs. 793 Tomo III), aduce que no recuerda el nombre de los dueños de casa, ellos no eran miembros activos ni de la parte orgánica del partido, pero si colaboraban. Él era secretario regional de la juventud y Reinaldo era vicesecretario. Que la hora en que ocurrieron los hechos fue a las 20:30 horas, lo recuerda muy nítidamente, había alumbrado eléctrico pero tenue, no dificultaba en ningún caso la posibilidad de distinguir a los militares con su casco de guerra y su fusil en la mano derecha. Que cuando dio la alerta de aviso, Reinaldo quedo un poco atrapado en el rincón del lugar donde estaban sentados. Refiere que el únicamente vio militares integrando la patrulla, no puede precisar si había patrullaje mixto, con carabineros. Observó dos vehículos militares en el callejón, pero al parecer había más, esto lo presume por los ruidos de los motores. No vio

cuando le dispararon a Reinaldo, pero escuchó las dos detonaciones muy cerca, y eso fueron los únicos dos disparos que se escucharon. Tampoco pudo ver el cuerpo de Reinaldo. Desconoce absolutamente si es que la patrulla militar traslado el cuerpo de Reinaldo o personal de Servicio Médico Legal. Por testimonios de sus compañeros supo que Reinaldo falleció en hospital de Osorno. Entre sus compañeros estaba el primo de Reinaldo (fallecido). El militar que él vio no podría decir si era de piel morena o no, pero si era un hombre maduro, no era un conscripto. No conoce el nombre de Gustavo Santibáñez Mangelsdorff. Que nunca tuvo contacto con algún miembro de la familia de Reinaldo. Sostiene que es efectivo que pudieran haberle disparado a Reinaldo cuando estaba saltando el cerco o cuando corría hacia el cerco. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración extrajudicial rolante a fs. 221 frente a lo cual el deponente señala: que “me suena el nombre de Nibaldo Cumicán Cuicui”, pero no lo asocia al equipo orgánico, tampoco recuerda que se hayan reunido en su casa, el habla de que estaba su madre, sin embargo, ese día no habían personas mayores en la reunión. Por otro lado diere con lo declarado por Nibaldo, en cuanto al número de personas que estaban reunidas y la hora en que ocurrieron los hechos, por cuanto la cocina era muy pequeña para que cupieran doce personas y además era una misión suicida reunirse tal cantidad de personas a esa hora teniendo toque de queda. Que el objetivo de la reunión era contactar con la dirección provincial del partido, pero en ningún caso planificar la toma de la comisaria de Carabineros de Rahue o la de Ovejería. Recalca que ellos no tenían armas, y el objetivo era contactar con la dirección provincial del partido para ver que se podía hacer.

En declaración extrajudicial, sin fecha, rolante de **fs. 792 a fs. 793 (Tomo III)**, precisa que la noche del 13 de septiembre de 1973, a eso de las 19:00 horas, con toque de queda vigente se escabulló a la casa de seguridad ubicada en cercanías de la escuela Canadá, en Rahue Alto. Los dueños de casa eran una pareja joven. Que eran dirigentes de la juventud socialistas, y precisa el objetivo de la reunión. Que a la cita llegaron sólo Reinaldo Rosas y él. Que las casas de la población ocupaban unos sitios pequeños, especificando los mismos y detallando la estructura y distribución de la casa donde se reunieron. Que alrededor de las 20:30 horas mientras escuchaban la radio y los bandos militares el silencio se vio interrumpido por el ruido de vehículos motorizados que avanzaban en el vecindario. Que en su caso estaba sentado más cerca de la puerta salió a ver, y al mirar por sobre la tapia trasera pudo apreciar dos jeep del ejército. Dio la voz de alarma presintiendo lo peor, escucharon como se detenían en la boca de la calle del callejón que daba al frontis de la casa. Salió a dar otra mirada, esta vez por el frontis. La iluminación era débil, pero pudo ver a un

soldado de mediana estatura y de complexión corpulenta, que avanzaba en su dirección. Más tarde llegó a la conclusión que tenía que ser un oficial o suboficial. Portaba un casco de guerra y botas de campaña sobre el pantalón del uniforme. Llevaba el fusil en su mano derecha. Relata que él corrió hacia la puerta de la cocina, a dar la voz de alarma. “Nos vamos chico que viene por nosotros, dije desde la puerta”. Comunica que Reinaldo estaba sentado en el rincón supone que se demoró una fracción de segundos en alcanzar la puerta de salida. Este vestía un “pullover” celeste, en su caso llevaba uno negro. Que ambos estaba desarmados, corrieron hacia la tapia trasera, cuando estaba sobre la tapia escuchó dos disparos de fusil que cortaron la vida de Reinaldo, que no escucho la caída del cuerpo ni lamento. En su caso corrió en la oscuridad escabulléndose entre las matas. Después de unos 15 minutos escucho el andar de los motores de los vehículos, en aquel momento escucho un golpe seco proveniente de la dirección de los vehículos, se imaginó que podría haber sido el cuerpo de “Chico Rosas” herido de muerte depositado sobre una carrocería de una camioneta o camión que formaría parte de la patrulla. Como pudo logro llegar a la casa de un compañero de partido quien lo cobijo. Al día siguiente llegó Ramiro Asenjo, también dirigente y primo de Reinaldo, y este fue quien le entregó la fatídica noticia. Sostiene que los hechos demuestran que la patrulla militar fue con certeza en busca de ellos.

A. 16. ALEJANDRA CAROLA ROSAS ASENJO (nacida en 1974).

En declaración judicial, de fecha 29 de julio de 2020, rolante de **fs. 939 a fs. 940 (Tomo III)**, adosa que a la fecha de los hechos ella no había nacido, pero recuerda que su mamá vestía siempre de negro. Que en su casa había mucha tristeza, que ella no lograba comprender por su corta edad. Que todos los años conmemoran para el 11 o 12 de septiembre en el liceo donde él fue presidente del centro de alumnos, también en el lugar cerca de donde lo mataron. En cuanto a cómo acontecieron los hechos, dice que a él lo asesinaron de un forma cobarde, por la espalda, estaba en una reunión, no sabe si sería dentro del toque de queda, pero una reunión como a las 8 o 9 de la noche, cree que al terminar la reunión, al salir para irse a su casa lo pilló una patrulla, él arranco, porque es obvio tenerle miedo, más en esos años y donde huyo le dispararon, cree que ahí falleció. Que sus padres no realizaron ninguna denuncia. Pregunta por Flor Ángel Varas, dice que la ha escuchado como amiga de su familia. Y Ana María Rosas Ruiz, es hermana de su padre, no sabe si aún vive, pero ella era paramédico en el hospital base de Osorno.

A.17. CARMEN GLORIA ROSAS ASENJO (12 años a la época de los hechos). **En declaración judicial**, de fecha 29 de julio de 2020, que rola a **fs. 941 a fs. 942 (Tomo III)**, espeta que en ese momento ella tenía 12 años, recuerda vagamente a situación general, pero expresará lo que vivió en aquel entonces. Sus hermanos el 11 de septiembre salió de la casa, cree que alrededor de las 6 o 7 de la tarde para juntarse con amigos para tener una reunión. Empezó a atardecer, oscurecer, sus papas hablaban y estaba desesperados porque su hermano no llegaba. Hasta muy tarde estuvieron en vigilia, que nadie durmió porque él no llegaba. Al día siguiente según les contó su tía, que llegó un joven, un niño, porque su hermano tenía 17 años llegó al hospital. Su tía, paramédico en ese entonces, le avisaron que había llegado un joven mal herido supuestamente, ella lo fue a reconocer y él ya estaba fallecido. Le dispararon en Rahue Alto en un sector, como a un par de kilómetros de su residencia, él estaba en una reunión. Supone que un vecino dio aviso que habían unos jóvenes que harían desorden y por eso llegó una patrulla militar, él se asustó y saltó una pandereta según lo que le relatan los vecinos del sector y le dispararon por la espalda con salida de proyectil. Todos los años el 12 de septiembre se conmemora en el sector de Rahue Alto donde fue ejecutado. Que todo eso los marcó hasta el día de hoy, su madre en aquel entonces casi enloqueció, le dio depresión, estaba embarazada. Preguntada como se llama su tía paramédico, dice que Ana Inocencia Rozas Ruiz. Que en ese entonces sus padres no hicieron denuncia, porque no quisieron profundizar, por la represión que había no se iba a conseguir nada. Consultada por Flor Ángel Varas, la recuerda era amiga de su hermano, está en España. Desconoce el papel de ella en lo sucedido con su hermano. Que con respecto a los militares, sus papas comentaban que a su papá lo seguían hasta el trabajo, la casa la merodeaban día y noche, patrullas militares y carabineros. Afirma que su hermano era presidente del Partido Socialista de Osorno, a través del círculo interno se comenzó a rumorear que llegó gente a la casa, su mamá dice que preguntando por su hermano y si es que este llegó a la casa, porque se habían enterado que había sido ejecutado un joven.

A.18. MARIANELA QUITERIA ROSAS ASENJO (de 13 a la época de los hechos). **En declaración judicial**, de fecha 29 de julio de 2020, que rola de **fs. 943 a fs. 944 (Tomo III)**, barbulla que el 11 de septiembre de 1973, tenía 13 años de edad, estaba en la casa cuando empezó a salir en las noticias lo del golpe de Estado. Estaban con su hermano Reinaldo, toda la familia reunida, no sabe qué pasaría, debió ser un día de semana, cree que no tuvieron clases, no recuerda muy bien, pero reitera que estaban en casa todos los hermanos, su padre y

madre. Que durante ese día todo se revolucionó, todos estaban asustados, Reinaldo se puso nervioso, él era presidente por segundo año del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres. Él era una persona, un joven de 17 años, muy culto, muy documentado, que incluso le empezó a decir a ellos lo que podría pasar después del golpe. Él estaba nervioso, y después durante el día andaban compañeros del liceo. Salió de la casa, durante la tarde no llegó, todos y sus papás inquieto porque no aparecía, ya que se veían las patrullas militares. Anocheció y más nerviosos, amanecieron en vela hasta el día siguiente, el 13 en la mañana, unos amigos de él fueron a la casa a preguntar por Reinaldo, ellos pensaron que estos ya sabían que su hermano estaba muerto. Hasta que después llega otra niña llamada Flor Ángel Varas, la hija de unos conocidos de la familia quien les trae la noticia a la casa, que le habían disparado a su hermano por la espalda y estaba muerto. Desconoce cómo tomó conocimiento Flor Varas. Que ellos tenían una tía que trabajaba en el hospital y ella el 11 de septiembre se encontraba haciendo turno de noche y según les comentó que llegaron con un niño, crespito, moreno, que llegó fallecido al hospital y entonces les dio que lo fue a reconocer y era su sobrino. La tía se llama Ana María Rosas. Que su madre al recibir la noticia casi enloqueció, eran una familia de cuatro hermanos, su padre profesor normalista, nunca le había ocurrido un episodio de muerte de familiares. No les había tocado un hecho tan violento como ese. Que quedó complicada la situación, sus padres fueron a reconocerlo, llegó su cadáver a la casa, se veló en la casa y de ahí empezó la complicación, sobre todo de su madre que cayó en depresión, ella era dueña de casa, una madre súper, que tenía su casa bien atendida, a sus hijos bien cuidados, y de ahí como que se desentendió de todas sus labores. Que desde ese día vistió un luto casi por cinco o seis años. Desde el día que murió Reinaldo, se apagó la radio, la televisión y lo único para lo que tenían permiso era para ir al colegio, en el día estaban atemorizados porque rondaban los camiones militares, algunos vehículos extraños que recuerda miraban por la ventana asustados. Los vecinos les decían que eran de la CNI, lo que no pueden confirmar. Su padre en ese tiempo trabajaba en la cárcel de Osorno, se iba caminando a su lugar de trabajo, él también decía que lo seguían, prosigue narrando lo acontecido en su círculo cercano luego de lo acontecido con su hermano Reinaldo. Que sus padres no realizaron denuncia, que por las amistades de su hermano fueron tomando conocimiento de cómo ocurrieron los hechos. Consultada relata que ese día su hermano salió a reunirse con unos compañeros en una casa de García Hurtado, que un sector de Rahue Alto, y ahí se daba un tema que los vecinos se veían con todo el mundo casi como enemigos, cree que alguien denunció, supone que llamaron a carabineros o

militares, que había una reunión de subversivos o algo así y ahí es donde llegaron las patrullas, su hermano se asustó, arrancó y le dispararon por la espalda. Eso es lo que lograron construir de lo que sucedió ese día. Respecto a la patrulla, comenta que le dijeron que fueron de carabineros, tenía un sobrenombre incluso el carabinero. No quisieron profundizar en esas cosas porque ya han transcurrido los años, el dolor está y es volver abrir heridas. Pero saben que al final fue un carabinero le parece que disparo. Se le pregunta otras cosas.

B. DOCUMENTOS (12)

- | | |
|---|---|
| 1. Certificado defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. | 7. Informe individual del caso para la Comisión. |
| 2. Informe del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. | 8. Informe autopsia del Servicio Médico Legal. |
| 3. Informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. | 9. Certificado de nacimiento del Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. |
| 4. Reservados del Estados Mayor General del Ejército | 10. Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. |
| 5. Copia fiel del acta de inscripción de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. | 11. Reservado del Jefe del Estado Mayor General del Ejército. |
| 6. Informes remitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación. | 12. Ordenes de investigar de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos de la Policía de Investigaciones de Chile. |

B.1. A fs. 5 y fs. 43 (Tomo I), certificado de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, consigan causa de muerte “hemorragia aguda por rotula visceral”.

B.2. A fs. 8 a fs. 14 (Tomo I), informe del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que contiene:

- a) **A fs. 10 (Tomo I),** declaración de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, de fecha 4 de septiembre de 1990, quien sucintamente dice que su hijo salió de la casa, siendo aproximadamente las 18:00 horas, con destino a una reunión del Partido Socialista. Estando en la reunión, por conversaciones que ha tenido con Adrian Soto, llegaron los militares e ingresaron violentamente al lugar. Una vez que los militares ingresan, su hijo sale del lugar, pero no alcanza a dar unos pasos cuando los militares le disparan, queda gravemente herido. Los militares lo llevan en el furgón en que se movilizaban al hospital de Osorno, donde muere. Desconoce las identidades de los militares involucrados. Agrega que tanto ella

como su marido vieron el cuerpo y les consta que la bala ingreso por la espalda y salió por el pecho.

- b) A **fs. 12 fs. 14 (Tomo I)**, informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a fs. 13 soslaya “Osorno. El 13 de septiembre de 1973 es muerto Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, 17 años, militante socialista, presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno. La víctima se encontraba en una reunión el día señalado en una casa de la ciudad de Osorno, cuando irrumpió una patrulla militar con la intención de detener a los participantes. Reinaldo Rosas intentó huir y los militares le dispararon, dejándolo herido de muerte. Trasladado al hospital de Osorno, falleció el mismo día 13. La Comisión se formó la convicción de que Reinaldo Rosas fue víctima de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado (...) que es un hecho comprobado que se le disparó cuando intentó eludir su detención. Que está comprobado que no existió una resistencia armada a la acción militar. Que no aparece que la fuerza ejercida por los miembros de la patrulla al disparar a matar a un menor desarmado, haya sido la adecuada frente a la situación, y que parece razonable pensar que la fuga del afectado pudo ser evitada sin necesidad de recurrir a la vía que se utilizó”.

B.3. A fs. 36 a fs. 37 (Tomo I), informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el que a fs. **36** se acompaña declaración extrajudicial de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, detallada en la letra A).

B.4. A fs. 250 a fs. 251 (Tomo I), reservado del Estado Mayor General del Ejército N°1595/36, en el cual se remite la nómina de oficiales, sub oficiales y clases, al mes de septiembre de 1973. En el cual en su hoja N°1 se señala dotación del Regimiento de Ingenieros N°4 Arauco, a septiembre de 1973 se consigna subteniente **Santibáñez Mangelsdorff, Gustavo**.

B.5. A fs. 45 (Tomo I), copia fiel del acta de inscripción de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, prescribe causa de la defunción hemorragia aguda por rotura viseral. En el apartado de comprobación de la defunción a través de certificado médico resolución del Juzgado Militar de Osorno.

B.6. informes remitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación:

- a) A **fs. 67 (Tomo I)**, antecedentes familiares de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, Se consigna padres Luis Venicio Rosas Ruíz (fallecido) y Juana Hortencia

Asenjo Asenjo, hermanos Alejandra Carola Rosas Asenjo; Carmen Gloria Rosas Asenjo; Luis Benicio Rosas Asenjo y Marianela Quiteria Rosas Asenjo.

- b) **A fs. 967 a fs. 968 (Tomo III)**, copia del certificado médico de defunción, documento fundante de la inscripción de defunción N°534, del año 1973. En el cual se individualiza a Reinaldo Rosas Asenjo, ocupación estudiante, edad 17 años, soltero; entre otros antecedentes no legibles.

B.7. A fs. 109 a fs. 118 (Tomo I), informe individual del caso para la Comisión, que se detalla:

- a) A. fs. 109 certificado de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo.
- b) A fs. 110 a fs. 111, declaración ante la Comisión de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, de fecha 04 de septiembre de 1990.
- c) A fs. 112, identificación y antecedentes de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, fecha de nacimiento 04 de agosto de 1956, 17 años de edad, soltero, militancia política Partido Socialista, Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombre de Osorno, estudiante. Detenido el día 12 de septiembre de 1973, organismo responsable militares, lugar de los hechos Osorno, fecha de la muerte 13 de septiembre de 1973.
- d) A fs. 113 a fs. 114, en cuanto a la descripción pormenorizada de los hechos se concluye que: “La víctima era presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno. El día 13 de septiembre de 1973, alrededor de las 18:00 sale de su domicilio para asistir a una reunión. En esa reunión habrían sido detenidos por militares y se le habría disparado, causándole la muerte. El cadáver es entregado a los familiares quienes tiene oportunidad de constatar que fue herido de bala y el proyectil entró por la espalda y salió por el pecho”. En antecedente relevante: “Eliana Amelia Paredes Fonseca, declara en el juicio seguido por presunta desgracia de Mario Fernández Acum, lo siguiente: que es esposa de militar...que tenía un pensionista en ese momento, de nombre Mario Arancibia López, también militar... he sabido que Arancibia fue miembro de los organismos de seguridad y oriundo de Quillota. Mario Arancibia López tuvo participación en otros hechos, nos contó que había participado en el grupo que había dado muerte a Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, en todo caso él no lo había asesinado, sino que un militar cuyo nombre no dio”.
- e) A fs. 115 a fs. 118 resumen del caso.

B.8. A fs. 136 a fs. 137 (Tomo I), ordinario 76/2013 del Servicio Médico Legal, en que se adjunta informe de autopsia proceso s/n, del 13 de septiembre de 1973, peritaje realizado por el médico legista Dr. Guido Poblete Poblete, el que

señala: “De acuerdo a oficio s/n he procedido a practicar la autopsia a Reinaldo Rosas Asenjo, de 17 años de edad. Examen externo, en el dorso nivel de cuarta vertebra en el lado izquierdo se observa orificio de borde nítidos que corresponden a entrada de proyectil. En la región pectoral del lado izquierdo a nivel de la tercera espacio inter costal se observa un orificio de 5 cms., de diámetro con los bordes la... destrucción del cuarto artíglalo y tegumentos. Examen interno, gran hemotorax izquierdo, se constata destrucción del segmento auricular y estallido del ventrículo izquierdo de vísceras cardíaca”. Concluye como causa de muerte la hemorragia aguda por rotura visceral. Acto de tercero: si; instrumento empleado: arma de fuego.

B.9. A fs. 139 (Tomo I), certificado de nacimiento del Reinaldo Patricio Rosas Asenjo.

B.10. A fs. 153 a fs. 159 (Tomo I), informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el que consta:

- a) A fs. 155 a fs. 156, certificado de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo.
- b) A fs. 157 antecedentes: Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, estudiante, Partido Socialista, Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno, dirigente, ejecutado en fecha 12 de septiembre de 1973, 22-23 horas aproximadamente, lugar población García Hurtado... calle Cochabamba. Relato del caso: “salió de su casa a las 17 horas del día 11 de septiembre 1973, posteriormente los padres supieron que el cuerpo de Reinaldo estaba en la morgue del hospital, ahí supieron que el niño habría sido baleado”.
- c) A fs. 158 a fs. 159, declaración ante la Comisión de Juana Hortencia Asenjo Asenjo.

B.11. A fs. 969 a fs.977 (Tomo III), reservado N° 1595/ 7319, del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, que contiene hoja de vida de fecha 01 de agosto de 1972 a 30 de junio de 1974 y fotografía (1972 -1975) del subteniente Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff.

B.12. Ordenes de investigar debidamente diligenciada por la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se detalla:

- a) A fs. 26 a fs. 29 (Tomo I), informe policial N°1802/702, de fecha 06 de mayo de 2011, que contiene identificación de la víctima.

- b) A fs. 48 a fs. 51 (Tomo I), informe policial N°861/702, de fecha 28 de octubre de 2011, que contiene ubicación e identidad completa de los requeridos Juan Mario Arancibia López y Eliana Amelia Paredes Fonseca.
- c) A fs. 74 a fs. 75 (Tomo I), informe policial N°452/702 de fecha 22 de junio de 2012, que sustenta individualización Bruno Arturo Villalobos Vera.
- d) A fs. 141 a fs. 142 (Tomo I), informe policial N°40, de fecha 15 de enero de 2013, que contiene orden de citación.
- e) A fs. 161 a fs. 162 (Tomo I), informe policial N°106/702, de fecha 20 de febrero de 2013, que sujeta la identidad de Adrián Moisés Soto Alarcón.
- f) A fs. 164 a fs. 173 (Tomo I), informe policial N°147/702 de fecha 01 de marzo de 2013, agrega declaraciones extrajudiciales de Osvaldo Rojel Andrade, de Ana del Carmen Hidalgo Hidalgo y de Delicia del Carmen Reuque Arcos.
- g) A fs. 177 a fs. 186 (Tomo I), informe policial N°190/702, de fecha 22 de marzo de 2013, que identifica a los familiares de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, suscribe declaraciones extrajudicial de Osvaldo Rojel Andrade, Ana del Carmen Hidalgo Hidalgo y de Delicia del Carmen Reuque Arcos. Una macro localización del sitio del suceso, fotografía digital donde se indica la calle Cochabamba, fotografías de la vista de la calle Cochabamba desde el río Beni, vista general de la calle Cochabamba desde calle El Salvador, vista particular del lugar desde donde escapo la víctima, antes de ser interceptada y ultimada por militares (conforme al testimonio de vecinos del sector) y vista particular del lugar donde habría fallecido la víctima desde el Angulo contrario.
- h) A fs. 219 a fs. 227 (Tomo I), informe policial N°545/1002 de fecha 21 de agosto de 2013, que contiene declaraciones extrajudiciales de Fernando Díaz Balboa y de Nibaldo Cumican Cuicui.
- i) A fs. 235 a fs. 236 (Tomo I), informe policial N°612/1002 de fecha 12 de septiembre de 2013.
- j) A fs. 255 a fs. 256 (Tomo I), informe policial N°76/702 de fecha 13 de febrero de 2014,.
- k) A fs. 335 a fs. 340 (Tomo I), informe policial N°7378/12089, de fecha 12 de diciembre de 2014, que contiene declaraciones extrajudiciales de Christoph Georg Paul Willeke Floel y de Felipe Cossio Urrutia.
- l) A fs. 361 a fs. 366 (Tomo II), informe policial N°251/702 de fecha 24 de abril de 2015, que contiene declaración extrajudicial de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff.
- m) A fs. 371 a fs. 376 (Tomo II), informe policial N°2887/702, de fecha 01 de junio de 2015, que contiene declaración extrajudicial de Felipe Cossio Urrutia.

- n) A fs. 380 a fs. 388 (Tomo II), informe policial N°509/702 de fecha 31 de agosto de 2015, que contiene declaración extrajudicial de Juan Alvarado López.
- o) A fs. 393 a fs. 401 (Tomo II), informe policial N°78/702 de fecha 23 de noviembre de 2015, sujeta declaración extrajudicial de René Sergio Navarro Martínez, de Celso Díaz Vargas y de Sergio Hernández Guzmán.
- p) A fs. 409 a fs. 417 (Tomo II), informe policial N°371/702 de fecha 20 de enero de 2016, que contiene declaración de Gustavo Santibáñez Mangelsdorff.
- q) A fs. 417 a fs. 420 (Tomo II), informe policial N°389/702 de fecha 05 de febrero de 2015.
- r) A fs. 449 a fs. 450 (Tomo II), informe policial N°1349 de fecha 07 de marzo de 2016.
- s) A fs. 453 a fs. 458 (Tomo II), informe policial N°313/702 de fecha 18 abril de 2016, que sujeta declaración extrajudicial de Dagoberto Sigifredo Moraga Rojas.
- t) A fs. 461 a fs. 466 (Tomo II), informe policial N°351/702 de fecha 02 de mayo de 2016, aporta declaración extrajudicial de José Héctor Carmona Cárdenas.
- u) A fs. 469 a fs. 476 (Tomo II), informe policial N°430/702 de fecha 01 de junio de 2016, adjunta declaración extrajudicial Nelson Telésforo Uribe Casas.
- v) A fs. 497 a fs. 501 (Tomo II), informe policial N°762/702 de fecha 24 de septiembre de 2016, anexa declaración extrajudicial de Miguel Ángel Uribe Aubel.
- w) A fs. 716 a fs. 718 (Tomo III), informe policial N°0138/702 de fecha 05 de enero de 2018, contiene ubicación de Adrián Soto Alarcón.
- x) A fs. 721 a fs. 767 (Tomo III), informe policial N°1237/702, de fecha 15 de marzo de 2018, adjunta declaraciones extrajudiciales de Héctor Barrios Jaramillo, de Luis Raúl Núñez Elgueta, de Pedro René Fernández Neira, de José Agustín Mora Barrera, de O'Higgins Caupolicán Bravo Sandoval, Mario Enrique Arias Coronado, de Orlando Eppele Soto, de Eselia Guarda García, de José Benedicto Arriagada Soto, de Guillermo Salvador Concha Araya, de Jesús Heriberto Saavedra Gómez, de Caupolicán Antonio Marchant Ormeño, de Juan Eduardo Rivera Jaramillo, de Oscar Millahueque Araneda, de Pedro Hernán Romero Godoy, y de Ramiro Labayru Martínez.
- y) A fs. 948 (Tomo III), informe policial N°5861/702 de fecha 20 de noviembre de 2020.

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que

por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- Que el día 12 de septiembre del año 1973, en horas de la noche y vigente el toque de queda, personal militar del Regimiento N°4 "Arauco" tomó conocimiento de una supuesta reunión partidista al interior de la Población García Hurtado, ubicada en el sector de Rahue Alto de la ciudad de Osorno, por lo cual se ordenó al personal de turno con tenida de guerra, porten sus fusiles Mausser y se dirijan al lugar en una patrulla comandada por el Teniente Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff, quién ordena a sus hombres detener a las personas reunidas y, en caso de fuga, dispararles.

B.- Que al percatarse de la patrulla militar, los desconocidos inician su huida sin ejercer violencia contra los militares, siendo reprimido ese escape mediante disparos, uno de los cuales hiere por la espalda a Reinaldo Patricio Rosas Asenjo de tan solo 17 años. La bala utilizada, una de guerra de calibre punto 762 atravesó el cuerpo del joven abriéndole un orificio en la región pectoral de 5 cm. de diámetro que le causó la muerte producto de una hemorragia aguda por rotura visceral. No recibió atención médica oportuna y su muerte se certificó con fecha 13 de septiembre del año mencionado.

C.- Que posteriormente, el jefe de la patrulla informa radialmente de lo ocurrido a sus superiores y, sin realizar ningún procedimiento en orden a determinar si efectivamente existía una reunión clandestina verbigracia ubicar y revisar la casa donde se desarrollaba la supuesta reunión o perseguir a los demás desconocidos, dejan el cuerpo sin vida de Rosas Asenjo en la calle y regresan al Regimiento.

4°) Calificación. Que los hechos reseñados en esta etapa procesal son constitutivos del delito de **homicidio simple**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **Reinaldo Rosas Asenjo**, previsto y sancionado en artículo 391 N°2 del Código Penal , vigente a la época de los hechos.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Illma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excma. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitruftuén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitruftuén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

V. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

W. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

X. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

Y. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Z. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo

Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

A.1 Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3 Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4 Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5 Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6 Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9 Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida porel homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

LL.12 Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas Cifuentes, sentencia de 30 de marzo de 2019. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena. Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad.** 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo**

Lorenzetti, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, “Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad” **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7º) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de

vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michele Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).-

C. DECLARACIÓN INDAGATORIA

8°) Que prestando declaración indagatoria de **GUSTAVO SANTIBÁÑEZ MANGELSDORFF**, (de años de edad a la época de los hechos) declara a fs. 365 a fs. 366 (Tomo II); a fs. 413 a fs. 414 (Tomo II); a fs. 485 a fs. 495 (Tomo II); a fs. 539 (Tomo II) y de fs. 686 a fs. 691 (Tomo III).

En declaración extrajudicial, de fecha 11 de abril de 2015, que rola a **fs. 365 a fs. 366 (Tomo II)**, ante la Policía de Investigaciones, preciso que no

recuerda el año que ingreso al Ejército de Chile, sin embargo, aproximadamente en el mes de diciembre del año 1972, estando egresado de la escuela Militar, fue destinado al Regimiento de Ingenieros N°4 de Osorno, con el grado de subteniente, quedándose aproximadamente cinco o seis años en esa ciudad, por lo que el pronunciamiento militar lo pasó prestando funciones en el regimiento antes señalado en la comuna de Osorno. Asimismo, se retiró voluntariamente del Ejército de Chile como el año 1978. Una vez ocurrido el pronunciamiento militar, es decir, desde el 11 de septiembre de 1973, dentro de sus funciones le tocó comandar patrullajes en turnos rotativos, esto con el fin de prestar cooperación o salir a patrullar en las calles de Osorno, conforme a las instrucciones de la superioridad. Fue así que en un turno de noche, no recuerda la fecha exacta, pero sí que estaban de toque de queda, fue instruido por un superior, no recuerda su nombre en este momento, pero fue un comandante de la guarnición, quien ordenó acudir junto a la patrulla militar que tenía a cargo ese día, lo anterior por cuanto estas iban rotando todos los días, por lo que no siempre eran los mismos militares o soldados que las componían. Recuerda que esa noche le ordenaron ir al sector de Rahue Alto, que de alguna forma se había puesto en alerta a la superioridad que había o se efectuaba una reunión clandestina de varias personas y como era de noche, además de que no se podía hacer reuniones en esa época, partió con la patrulla militar a su cargo, la cual correspondía a una camioneta con quince soldados conscriptos, todos armados con fusiles Mauser. Recuerda que como el vehículo en el que se transportaban en ese tiempo metía ruido, es que antes de bajarse en la casa donde estaba efectuando la reunión, las personas que estaban adentro los escucharon y salieron arrancando a sitios aledaños, uno de los cuales recuerda claramente que saltó la cerca, entonces estando en ese momento como a treinta metros de esta persona, unos cinco o seis soldados conscriptos le dispararon con fusiles Mauser que todos portaban. Asimismo, recuerda que cuando llegaron, como todo fue muy rápido, se bajó con la intención de poder detener a algunos de los que estaban reunidos, quedando en la línea de tiro cuando los soldados dispararon. Asimismo, dice que él no dio la instrucción de disparar, éstas estaban dadas de antemano por la superioridad. Que una vez que se constató el fallecimiento de esa persona, no está seguro de qué pasó, lo que sí puede decir que no se llevó en la patrulla en la que él iba porque estaba llena, por lo que se llamó al regimiento dando las novedades de lo que había pasado, quienes llegaron al lugar y seguramente ellos trasladaron al fallecido, quien posiblemente posteriormente fue trasladado por ellos hasta un cuartel de carabineros o de la PDI. No recuerda nombre de los soldados conscriptos que tripulaban la patrulla a su cargo durante la noche, sólo puede recordar a uno de

apellido Scaff, (fallecido), esto lo supo por cuanto hace tiempo atrás se encontró en Santiago con un soldado conscripto del regimiento que lo reconoció, no sabe su nombre, pero este le hizo el comentario de que Scaff había fallecido. Tampoco recuerda un soldado conscripto apodado “Chocolito”.

En declaración extrajudicial, de fecha 11 de enero de 2016, rolante de **fs. 413 a fs. 414 (Tomo II)**, ante la Policía de Investigaciones, espeta que referente a la siguiente frase “no di la instrucción de disparar, estas estaban dadas de antemano por la superioridad”, expuesta en la declaración policial ante oficiales de la Brigada de Homicidios de Valdivia, el día 11 de abril del año 2015, desea aclarar lo siguiente: lo único que puede señalar en este momento es que fue ordenada indudablemente por un bando, el cual era dado a conocer y transmitido por un superior, específicamente por el comandante de guarnición del Regimiento de Ingenieros N°4 de Arauco, de la ciudad de Osorno, el cual por el transcurso de los años no recuerda sus nombres. El día del fallecimiento de la víctima de autos, la orden inmediata era detenerlos sin inconveniente al momento de proceder, ya sea escape, resistencia de cualquier tipo o enfrentamiento, era proteger “nuestras vidas y defendernos por medio de la utilización de nuestras armas de servicio”. Una vez verificado el fallecimiento del individuo, dio aviso vía radial a la unidad, no recuerda quien recibió el comunicado, lo anterior tenía finalidad interiorizar de manera inmediata y oportuna de lo ocurrido al comandante de guarnición y su vez éste diera cuenta a las autoridades competentes. Referente a la apertura de algún expediente administrativo por lo sucedido, nunca supo absolutamente nada, nunca se le interrogó, ni confeccionó alguna minuta informativa, ni menos fue citado a la Fiscalía Militar de la ciudad, nunca supo más del incidente. Hace presente que se encuentra dispuesto a cooperar en todo lo necesario en la referida investigación.

En declaración judicial, de fecha 30 de agosto de 2016, que rola a **fs. 485 a fs. 495 (Tomo II)**, preguntado comunica que el 11 de septiembre de 1973 era funcionario del ejército, con el grado de teniente, para ese tiempo llevaba dos años de antigüedad, estaba en el Regimiento N°4 Arauco de Osorno, sus funciones era mantenimiento de material de guerra. Preguntado dice que todos hacían labores de patrullajes más que nada, por una orden que llamaban de la gobernación en esos años, tenían que hacer labores de guardia. Su jefe era el comandante Abarca o Labarca. Consultado quien daba la cuenta diaria, dice que el comandante, pero había otros mandos medios, los comandantes de batallón. A la pregunta de quién recibía instrucciones, relata que un comandante de batallón era un señor Orrego, otro era un señor Rosales. Consultado, si habitualmente recibía órdenes de ellos, expresa indudablemente, tanto así como del comandante del regimiento, que las ordenes eran directas. Recuerda que los

hechos fue un aviso de emergencia en la noche. Que él estaba a cargo de una patrulla, tenían que salir en esos instantes y se produjo un tiroteo en una casa en Rahue Alto y, el apellido tenía entendido que era el mismo que él tiene. Los alertaron a ellos, los hicieron equiparse y salir de inmediato el comandante de guarnición que había ahí. No tiene idea quien estaba ahí, sinceramente. Él mencionó el comandante de guarnición, pero había mandos medios. Que les comunicaban por radio en la guardia del regimiento. Les daban una localización de acuerdo a unos organismos que tenían internamente el regimiento y que eran de inteligencia militar y que veían situaciones afuera de reuniones o de posibles sublevaciones. Les avisan, que se estaba desarrollando una reunión en Rahue. Preguntado si él en su calidad de teniente llama a una serie de funcionarios, de soldados, sostiene que no, que eso estaba nominado por unas órdenes de la guarnición, estaba detallado. Había turnos, no siempre eran los mismos, era rotativo. Preguntado si él salió con la patrulla que le tocó esa noche, responde que: precisamente. Que eso fue pasada la medianoche, como la una o dos de la mañana. Que en esas circunstancias tenían que estar alerta, en pie, vestidos. Se fueron en una camioneta americana. Interrogado con cuánta gente fue, dice que si mal no recuerda se fue con 15, que estaba con tenida de combate y fusil de guerra. Sondeado si es con camuflaje, responde sí. Que atrás de la camioneta entraban siete por el lado, más el conductor y el oficial que era él. Recuerda solo a un soldado con el que fue amigo de apellido Scaff. No recuerda a ninguno, ni siquiera de la patrulla, porque recuerda a unos funcionarios de mantenimiento, pero no había ninguno de ellos esa noche con él. Que llegaron a Rahue Alto, recordando que los vehículos no eran muy apropiados para movimiento estratégico y menos en la noche. Antes que llegaran se había dispersado la mayor parte de los concurrentes a la reunión que supuestamente era donde se dirigían ellos a detener esas personas y ahí se produjo un tiroteo por los soldados de la patrulla y los tipos que iban huyendo. No hubo disparos cruzados. Consultado si vio gente que salió de esa reunión o presume, aduce que, no, “nosotros vimos, precisamente por eso uno de los soldados alcanzó a este muchacho” que acaba de mencionar y fue el único que falleció esa noche. Examinado si ellos llegan y se estacionan, acota que, no, que no alcanzaron a estacionarse. La patrulla se bajó sobre marcha porque los tipos salieron huyendo. Que lamentablemente no había mucha experticia ni preparación. Que de partida llegaron mal, en un vehículo inapropiado, que sonaba a kilómetros de distancia. Que las personas salieron corriendo hacia los patios posteriores y saltando las cercas. Justamente lo alcanzó el disparo cuando estaba saltando las cercas. Aclarado si el conductor también se baja, afirma que no, para eso iban los soldados con el oficial que iba a cargo, en

este caso él. Contrainterrogado si el conductor se baja, dice que el recuerda no. Que solo había luz del alumbrado público. Que se veía relativamente. Indagado cuantas personas vio huyendo, responde que vio unas cuatro o cinco personas saltando, no puede decir si eran adultos o jóvenes, no sabe si eran jóvenes o no. Lo que sí sabe que “el chico” que cayó era un muchacho. Interrogado el por qué le dispararon a esta persona, manifiesta que la orden era esa, supuestamente estaban en reuniones de confabulación. Consultados si ellos iban a matarlos porque estaban en reunión, arguye que no, que ellos iban a detener a gente, nada más y en el supuesto caso que se presentase como sucedió, que se dieron a la fuga, tenían que disparar. Esa era la instrucción. Preguntado, en caso de escape había que disparar de inmediato, sostiene “lógico”, que las órdenes venían de la guarnición de ese momento. No sabe si era Abarca o estaba en Valdivia en esos años...escudriñado por qué iba a cargo de un teniente la patrulla, cuál era su función, aduce que él era quien iba a cargo del personal y al mando de la patrulla, mando jerárquico. Examinado que instrucción dio a sus subalternos, responde que en esa misión específicamente ninguna, aparte que tenían que concurrir y tomar detenidos y en el caso que huyeran tenían la orden de disparar. Analizado si ratifica las órdenes que tenían de sus superiores, señala, sí. Examinado, por sus subalternos sabían que tenían que disparar por instrucción, dice “yo no era el que disponía esas órdenes”. Preguntado, si como jefe de patrulla ratificó esas instrucciones, afirma que obviamente. Indagado que hacen sus soldados cuando salen arrancando las personas, corren detrás ellos, se ponen en fila para disparar, qué hacen, sostiene que no, los soldados salen de la camioneta, se dispersaron tratando de cerrarle el paso, haciendo el acercamiento y fue ahí que se produjeron los disparos cuando empezaron a huir. A la pregunta a quienes detuvieron, responde: en esa oportunidad no se detuvo a nadie, fue el único joven que cayó saltando arriba de la cerca y le alcanzó un tiro de un soldado. A la pregunta si hicieron alguna alerta para que esta persona se detuviera, hicieron algún disparo al aire o directamente al cuerpo, afínca que, no, se le gritó y todo el asunto, pero hubo obediencia. No se amilanaron ni absolutamente nada y los soldados inmediatamente empezaron a disparar. Interrogado si gritan deténgase y al no hacerlos disparan los soldados; dice, que así es. Que él estaba con la patrulla. A la pregunta, con los subalternos, responde precisamente y concurriendo hacia la casa, que llevaban fusiles Mauser, con bala de guerra calibre 762. Que el cuerpo no quedó herido, quedó traspasado por la bala. Que ésta tiene un alcance de 3000 metros y fue alcanzado a unos 50 metros, “así que imagínese”. Que la bala paso de lado a lado. A la pregunta, si se acercó para confirmar si tenía signos vitales, revela que precisamente, no tenía signos vitales, “lo despachó inmediatamente”.

Fue justo en el corazón, que le salió por el corazón, que ya estaba fallecido cuando lo vio. La bala lo traspasó y más encima le paso por encima del sistema circulatorio, “le voló el corazón, lo tenía fuera, se lo saco de cuajo”. A la pregunta por la salida del proyectil si era grande, si se veía hacia fuera, responde que sí. Afirma que el boquerón es tan grande, es tan impresionante que para qué iban a estar examinándolo, estaba “totalmente liquidado”. A la pregunta qué hacen con él, contesta que, ellos se retiran y se supone que el SML lo recogía, porque mandaron a recogerlo, no sabe si lo llevaron a investigaciones o a carabineros, eso no lo tiene claro. No sabe dónde lo iban a remitir. Que él se comunica con la unidad con el regimiento, con el comandante de guardia del regimiento de quien no recuerda nombre, que lo cambiaban todos los días. A la pregunta, si el quién da la instrucción de irse y dejar el cuerpo ahí o decide irse sabiendo que después vendría alguien, responde, que él no podía tomar determinaciones por su cuenta, se comunicó el asunto y de la unidad disponían que se iba hacer. Ellos habían cumplido su misión y se retiraban de nuevo al cuartel. No sabe si el hecho fue investigado por la Justicia Militar, porque después no tuvo absolutamente ninguna información referente a eso y tal cual manifestó anteriormente ni siquiera el apellido del fallecido lo sabía hasta que se le interrogó en investigaciones tiempo atrás en un verano, como hace uno o dos años atrás. No sabía de quien se trataba e incluso tenía la plena convicción de que tenía el apellido de él. Que la familia nunca tomó contacto con él, lo que es tan difícil, sobre todo en provincia. Eran todos conocidos. Lo que llegó a suceder en una noche determinada era muy difícil de ocultar una cosa así, y a él, por la línea de mando nunca se le informó nada, los tramites, cómo había quedado, absolutamente nada. A la pregunta, qué el propósito era detener en primera instancia y disparar en segunda instancia. Responde que, ellos no salían a ver gente como en los campos. La primera orden era detenerlos, cuando llegaban “allá repito el acercamiento fue totalmente inapropiado y los tipos cuando nosotros íbamos llegando ya iban huyendo”. A la pregunta, si se hizo algún procedimiento en la casa con los dueños, luego de los hechos, responde “buena pregunta porque no se hizo nada”. Ese no era el objetivo en realidad, pero en cuanto a la casa no se hizo nada, no se perició, no se hizo nada. A la pregunta cuál fue el motivo para esa omisión, responde que les comunicaron y les dieron la orden de regresar al cuartel, pero no se revisó absolutamente nada. Que la acción era negligente, la diligencia como se quiera llamar, la verdad no se hizo nada en forma posterior. Y tampoco fue objetado ni mencionado en algún informe ni nada, cuál fue el fin. Comunica que vive solo, que se retiró por razones políticas en 1978, se fue porque quiso, por razones políticas, en el fondo porque quiso, pero también un poco obligado. Que no se le ocurrió

llevar el cuerpo en la camioneta, la orden era que no lo retiraran de ahí, porque se le llevó a la unidad, en ningún momento fue al regimiento. A la pregunta cuando dice que un soldado alcanzó a este joven. Eso significa que empezaron a correr detrás de los distintos desconocidos sus soldados, iban uno detrás de otro o dos detrás de algún desconocido, proclama que, no se dispersaron, se movió en forma de abanico tratando de alcanzar la propiedad, la casa donde se efectuaba la reunión y sólo alcanzaron a llegar al antejardín y “los tipos huyendo por la parte posterior de la propiedad”. Interrogado por qué se dispara a matar, dice que el soldado disparó apuntándole al tiempo después de hacer los disparos de advertencia. Contrainterrogado en cuanto a que había dicho que no se hizo disparo de advertencia, que previamente dijo que se hizo un grito de alerta y después dispararon, responde que bueno, precisamente los gritos de alerta son de advertencia, o sea se le advirtió y se les conminó a que se detuvieran y ahí empezaron a disparar los soldados y comenzó la balacera y uno de esos tiros alcanzó a este muchacho. Que él no disparó, porque concurría con pistola a este asunto y la pistola era más de defensa personal. Preguntado porque declaró en investigaciones que solo cinco o seis soldados conscriptos dispararon, por qué no lo hicieron los catorce o quince, arguye que no, los que llegaron en la primera línea y lograron trasponer a ésta, de hecho se produjo en desbande. Que todo fue muy rápido, inclusive no todos se habían alcanzado a bajar. No alcanzaron ni siquiera a ubicarse y hacer un acercamiento como corresponde. No existía la táctica ni las instrucciones. Si se pone a pensar ahora no lo habría hecho jamás de esa forma.

En declaración judicial, de fecha 27 de diciembre de 2016, **que rola a fs. 539 (Tomo II)**, exclama que ratifica la declaración que rola a fs. 585 y siguientes (la que consta a fs. 485 y siguientes). Precisa que en esos años estaba como comandante del ejército don Lizardo Abarca, le seguía el ayudante con grado de mayor Rosales. Posteriormente estaba otro mayor de apellido Orrego, comandante de batallón. Luego le seguía una cantidad de capitanes, no recuerda número que eran los comandantes de compañía. El comandante de la compañía era Carlos Vergara González, después venían los tenientes, que eran el brazo derecho de los comandantes de compañía y ejecutores de las órdenes e instrucciones que impartían éstos. Recuerda a Felipe Cossio, Lavarou, Álvarez, Bravo y Soto, más no recuerda. Respecto de la víctima, señala que el joven nunca fue detenido. El acercamiento fue tan poco estratégico que cuando llegaron a la casa se tuvieron que tirar bajo los vehículos pues las personas salieron corriendo en distintas direcciones, y en ese momento, la bala de un conscripto alcanzó al muchacho. Respecto del armamento que portaba, señala adicionalmente que

utilizaba una pistola Styre calibre 45. La bala que mató al joven es calibre 7.62 propia del fusil Mauser. Con posterioridad a los hechos, sus superiores nunca le pidieron informe escrito de lo sucedido y tampoco nunca supo en qué quedó la investigación de la causa.

En declaración judicial, de fecha 04 de julio de 2017, rolante de **fs. 686 a fs. 691 (Tomo III)**, distingue en lo pertinente a estos hechos que, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 361 a fs. 363, aunque respecto a la fecha de ingreso, viendo sus documentos el ingresó el año 1969 a la escuela de militares. Ratifica su declaración de fs. 409 a fs. 410 y a su declaración de fs. 485 a fs. 495. A la pregunta si el camuflaje era el uniforme habitual, responde que, no, si mal no recuerda no se usaba la tenida de mimetismo en esa ocasión, se usaba la verde oliva nada más, después salió la ordenanza que tenían que usar tenidas de mimetismo. A la pregunta cuándo existió el mimetismo, responde que tiene entendido que posteriormente, porque en esa fecha, tenía entendido que concurren con verde oliva. No sabe si el camuflaje en 1973, estaba como vestimenta, no está en sus recuerdos. Lo único que sabe es que las guardias las hacían con verde oliva, y no era habitual el otro que salió posteriormente, le parece que fue en ordenanzas posteriores la tenida de camuflaje. Se le pregunta por otras causas.

9º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **GUSTAVO EDUARDO SANTIBÁÑEZ MANGELSDORFF**, quien fue sometido a proceso a **fs. 505 a 507 (Tomo II)**, con fecha 03 de octubre de 2016. **Acusado** según el auto de **fs. 1.008 a fs. 1.010 (Tomo IV)**, con fecha 19 de marzo de 2021, como autor del delito de **Homicidio Simple**, en la persona de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo**, perpetrado en la ciudad de Osorno, **entre el 12 y 13 de septiembre de 1973**, en su carácter de lesa humanidad. Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES (18)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Dagoberto Moraga Rojas. | 10. Marianela Quiteria Rosas Asenjo. |
| 2. José Héctor Carmona Cárdenas. | 11. Luis Benecio Rosas Asenjo. |
| 3. José Agustín Mora Barrera. | 12. Juana Hortencia Asenjo Asenjo. |
| 4. O'Higgins Caupolicán Bravo Sandoval. | 13. Adrián Moisés Soto Alarcón. |
| 5. Ramiro Labayru Martínez. | 14. Nibaldo Cumican Cuicui. |
| 6. Mario Enrique Arias Coronado. | 15. Delicia Del Carmen Rauque Arcos. |
| 7. Fernando Díaz Balboa. | 16. Ana Del Carmen Hidalgo Hidalgo. |
| 8. Alejandra Carola Rosas Asenjo. | 17. Osvaldo Rogel Andrade. |
| 9. Carmen Gloria Rosas Asenjo. | 18. Juan Mario Arancibia López. |

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

a.1. DAGOBERTO MORAGA ROJAS

En declaración judicial, de fecha 24 de mayo de 2017, que rola a **fs. 671 a fs. 672 (Tomo II)**, en lo pertinente indica que nunca tuvo que realizar detención durante todo el tiempo que presto servicios en el regimiento de Arauco. Que a la unidad de ingenieros sí le correspondía salir a hacer patrullajes y detenciones, pero no le consta ello. Se le lee en lo pertinente declaración de fs. 36 y señala que no conoce los hechos.

a.2. JOSÉ HÉCTOR CARMONA CÁRDENAS

En declaración extrajudicial de fecha 29 de abril de 2016, que rola a **fs. 464 a fs. 465 (Tomo II)**, soslaya en lo pertinente que cumplió funciones en el regimiento de Ingenieros N°4 Arauco de Osorno hasta mediados de septiembre de 1973, con el grado de cabo segundo, dentro de las funciones estaban las de patrullar en el día y guardia de noche en la población militar de Osorno, la cual quedaba en Bellavista, otra en Rahue Alto y la ultima en Rahue 2. Cuando le tocaba salir a patrullar, su función era de conductor de la patrulla, la cual estaba a cargo por lo general de un suboficial o un oficial, estos no eran los mismos siempre, ya que como era conductor, le cambiaban de vehículo según la disponibilidad, pero dentro de los que recuerda está el suboficial Romero, el capitán José Labra Roja, quien era comandante de compañía, siendo estos con los que trabajó, ya que en ocasiones salió solo, a cargo de dos o tres soldados, quienes lo acompañaban más que nada como guardaespaldas.

a.3. JOSÉ AGUSTÍN MORA BARRERA

En declaración extrajudicial, de fecha 02 de enero de 2018, que rola a **fs. 743 a fs. 744 (Tomo III)**, decanta en lo pertinente que para septiembre de 1973, se encontraba prestando funciones en el regimiento Arauco, con el grado de cabo primero como instructor. Luego del golpe de Estado debieron salir a realizar patrullajes por las poblaciones. En esa época tuvo que desempeñarse como conductor de un vehículo, el

cual iba a cargo de un oficial y otro soldado, los cuales iban rotando. Que al interior del regimiento hubo personas detenidas, pero no permanecían en las dependencias, sino estas personas, según escuchó eran enviados al cuartel de la Policía de Investigaciones. Respecto a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, dice que era un oficial de material de guerra. Desconociendo si esta persona realizó trabajo operativo o no, pero en esa época todos debían salir a patrullar. Respecto a la víctima de autos no tiene antecedentes.

a.4. O'HIGGINS CAUPOLICAN BRAVO SANDOVAL

En declaración extrajudicial, de fecha 03 de noviembre de 2018, que rola a **fs. 745 a fs. 746 (Tomo III)**, (copia de la cual se encuentra a fs. 905 a fs. 906 Tomo III), conjetura que en febrero de 1973 fue trasladado al regimiento Arauco, en la ciudad de Osorno, en lo que respecta a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, dice que era compañero de promoción, llegaron en el mismo periodo, era oficial de servicio de material de guerra y cumplía idénticas labores en control de toque de queda que él. Respecto a los hechos investigados supo que Gustavo se había visto involucrado en problemas, luego de leer el informe Rettig. En la época solo tomo conocimiento que la patrulla comandada por Gustavo, había tenido problemas, no sabían de qué tipo, pero puede decir que él estaba muy afectado. Que Gustavo no era instructor de armas, era de servicios, se le asignó una patrulla, por lo que no conocía al personal bajo su mando. En relación a la víctima no tiene antecedentes.

En declaración judicial, de fecha 13 de enero de 2020, que **rola a fs. 908 a fs. 910 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola a fs. 745 (copia de la cual se encuentra a fs. 905 a fs. 906 Tomo III), para septiembre de 1973, se encontraba cumpliendo funciones en el regimiento Arauco. Detalla en lo atinente la organización del mismo. Recordando en lo pertinente a su compañero de curso Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, Jorge Schmit Gumusio, Hugo Díaz Valverde, Teniente Cossio, teniente Fernández, teniente Álvarez, teniente Pérez, subteniente Labayru y el ayudante de regimiento Walker. Participó en patrullajes de control de toque de queda. Que nunca tuvo una detención en donde tuviese que disparar a alguna persona para lograr su detención. Sostiene que conoce a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, quien es su compañero de promoción de la escuela militar y llegaron juntos al regimiento Arauco, a fines de enero o los primeros días de febrero del año 1973, y de José Héctor Carmona Cárdenas, a quien conoció en el regimiento Arauco, en su función de operador de equipos de ingenieros. Reitera que no posee antecedentes de la víctima Reinaldo Rosas Asenjo.

a.5. RAMIRO LABAYRU MARTINEZ

En declaración extrajudicial, de fecha 26 de enero de 2018, que rola a **fs. 766 a fs. 767 (Tomo III)**, adopta en lo pertinente que, el 11 de septiembre de 1973, se encontraba trabajando en el regimiento Arauco N°4 de Osorno, se desempeñaba como instructor de la especialidad de ingenieros y soldados conscriptos, a cargo de la segunda compañía. En relación a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, solo lo recuerda, ya que

pertenecía a la dotación de unidad de servicios, la que mayormente le correspondió salir a terreno.

a.6. MARIO ENRIQUE ARIAS CORONADO

En declaración extrajudicial, de fecha 08 de enero de 2017, que rola a **fs. 747 a fs. 748 (Tomo III)**, difunde en lo atinente que en septiembre de 1973, tenía el grado de cabo segundo, se mantenía en la cuarta sección. Posterior al golpe de Estado, cambiaron sus funciones, les correspondió realizar patrullajes, guardias y custodia de infraestructura de la ciudad. Que los miembros de las patrullas iban rotando. Los patrullajes los organizaban en la oficina de vice comandante. No recuerda que haya salido algo anormal durante las veces que salió a patrullar. Respecto a Gustavo Santibáñez, era un oficial joven, desconociendo a que sección pertenecía.

En declaración judicial, de fecha 04 de julio de 2018, que rola de **fs. 798 a fs. 799 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fecha 08 de enero de 2018 (la cual se encuentra a fs. 747 a fs. 748 Tomo III), delibera en lo adecuado que respecto de la víctima Reinaldo Rosas Asenjo, no recuerda este caso. Reitera que en septiembre de 1973 se encontraba en el regimiento Arauco, que era conductor y operador de maquina pesada. El nombre del ex oficial del regimiento Arauco Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, no lo recuerda. En cuanto a la cantidad de personas que salían en los patrullajes esto dependía si salían en un camión o en una camioneta $\frac{3}{4}$ si salían en camión eran unos 12 más o menos, también salían cabos segundos quienes tenían que ver con los soldados. Estos patrullaje siempre salían a cargo de un oficial. Los grupos eran rotativos. Usaban dos tipos de armamento, el fusil americano, eran unos largos y otro corto. Los oficiales usaban pistola y ellos como conductores usaban fusiles. Se le consulta por otras cosas.

a.7. FERNANDO DÍAZ BALBOA

En declaración extrajudicial, de fecha 05 de agosto de 2013, que rola de **fs. 224 a fs. 225 (Tomo I)**, adopta que el 12 de septiembre de 1973, vivía en su casa ubicada en calle Oruro N°1773, población Carlos Ibáñez del Campo, en Rahue Alto, comuna de Osorno, propiedad en la que habían dos casas, la principal estaba adelante donde él vivía con su esposa María Teresa Baez Mancilla y sus tres hijos menores de edad, mientras en la segunda vivienda ubicada en la parte posterior del mismo terreno vivía su madre Ida Elisa Balboa (fallecida). Que él estaba en su casa acostado cuando escuchó que llegó gente a la casa de su madre, esto como a las nueve de la noche de ese día y al cabo de dos horas, entre las diez treinta y las once horas de la noche, entraron destruyendo las puertas un grupo de carabineros y militares, entre los que recuerda al sargento Montiel y otro de apellido Meneses, no recuerda sus nombres, pero uno de ellos el de apellido Montiel era del destacamento de Rahue Alto, mientras que Meneses, por comentarios supo que era del destacamento del

sector de Ovejería. Recuerda que los militares lo sacaron de la cama e inmediatamente lo subieron al jeep de los militares y luego lo trasladaron al regimiento Arauco de Osorno donde estuvo dos días detenido. Al momento que llegaron los militares escuchó varios disparos y supo que había un grupo de jóvenes que arrancaron, entre ellos fue detenido su hermano Nibaldo Cumican Cuicui, éste fue detenido, pero en calle Cochabamba fue muerto Reinaldo Rosas, quien era uno de los jóvenes que había arrancado desde la casa de su mamá. Desconoce la identidad de las otras personas que estaban en la casa de su mamá, lo único que sabía es que eran jóvenes y conocido de su hermano. Que al conversar con Nibaldo, supo que este había llegado a la casa de su madre acompañado de un grupo de amigos, pero desconoce cuál fue el motivo, si andaban arrancando o si estaban haciendo alguna reunión, sólo que al llegar los militares los jóvenes huyeron hacia la parte posterior de la casa, saliendo a calle Cochabamba donde fue ultimado uno de ellos, es decir, Reinaldo Rosas. Respecto a las identidades de los carabineros solo recuerda los apellidos Montiel y Meneses, al primero lo conocía de vista, pero desconoce mayores antecedentes de sus identidades.

En declaración judicial, de fecha 25 de octubre de 2013, rolante de **fs. 247 a fs. 248 (Tomo I)**, ratifica declaración extrajudicial que rola a fs. 220 (que consta a fs. 224 a fs. 225), y en lo pertinente dice que escuchó un disparo. Preguntado dice que había luz eléctrica. Que después de ocurrido los hechos se comentaba que a cargo de la patrulla andaba un militar de apellido Uribe. Aclara que no identifica el apellido Uribe con el apodo “El chokolito”.

a.8. ALEJANDRA CAROLA ROSAS ASENJO

En declaración judicial, de fecha 29 de julio de 2020, rolante de **fs. 939 a fs. 940 (Tomo III)**, adosa en lo oportuno que a la fecha de los hechos ella no había nacido, pero recuerda que su mamá vestía siempre de negro. En cuanto a cómo acontecieron los hechos, dice, a él lo asesinaron de un forma cobarde, por la espalda, estaba en una reunión, no sabe si sería dentro del toque de queda, pero una reunión como a las 8 o 9 de la noche, cree que al terminar la reunión, al salir para irse a su casa lo pilló una patrulla, él arranco, donde huyo le dispararon, cree que ahí falleció.

a.9. CARMEN GLORIA ROSAS ASENJO

En declaración judicial, de fecha 29 de julio de 2020, que rola a **fs. 941 a fs. 942 (Tomo III)**, espeta que ella tenía 12 años, recuerda en lo pertinente que su hermano el 11 de septiembre salió de la casa, cree que alrededor de las 6

o 7 de la tarde a juntarse con amigos para tener una reunión. Empezó a atardecer, oscurecer, sus papas hablaban y estaban desesperados porque su hermano no llegaba. Hasta muy tarde estuvieron en vigilia, que nadie durmió porque él no llegaba. Al día siguiente según les contó su tía, que llegó un joven, un niño, porque su hermano tenía 17 años al hospital. Su tía, paramédico en ese entonces, le avisaron que había llevado un joven mal herido supuestamente, ella lo fue a reconocer y él ya estaba fallecido. Le dispararon en Rahue Alto en un sector, como a un par de kilómetros de su residencia, él estaba en una reunión. Supone que un vecino dio aviso que habían unos jóvenes que harían desorden y por eso llegó una patrulla militar, él se asustó y saltó una pandereta según lo que le relatan los vecinos del sector y le dispararon por la espalda con salida de proyectil. Todos los años, el 12 de septiembre se conmemora en el sector de Rahue Alto donde fue ejecutado. Afirma que su hermano era presidente del Partido Socialista de Osorno.

a.10. MARIANELA QUITERIA ROSAS ASENJO

En declaración judicial, de fecha 29 de julio de 2020, que rola **de fs. 943 a fs. 944 (Tomo III)**, barbulla en lo pertinente que el 11 de septiembre de 1973, tenía 13 años de edad, estaba en la casa con su hermano Reinaldo, y toda la familia reunida. Que durante ese día Reinaldo se puso nervioso, él era presidente por segundo año del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres, que salió de la casa, durante la tarde y no llegó, sus papás y ellos inquieto porque no aparecía, ya que se veían las patrullas militares. El 13 en la mañana, unos amigos de él fueron a la casa a preguntar por Reinaldo, ellos pensaron que estos ya sabían que su hermano estaba muerto. Hasta que después llega Flor Ángel Varas, quien les trae la noticia a la casa, que le habían disparado a su hermano por la espalda y estaba muerto. Comenta que tenían una tía que trabajaba en el hospital y el 11 de septiembre se encontraba haciendo turno de noche y según les comentó llegaron con un niño, crespito, moreno, que llegó fallecido al hospital y entonces les dijo que lo fue a reconocer y era su sobrino. La tía se llama Ana María Rosas. Sus padres fueron a reconocerlo, llegó su cadáver a la casa, se veló en la casa y de ahí empezó la complicación, sobre todo de su madre que cayó en depresión, desde ese día vistió un luto casi por cinco o seis años. Desde el día que murió Reinaldo, se apagó la radio, la televisión y lo único para lo que tenían permiso era para ir al colegio, en el día estaban atemorizados porque rondaban los camiones militares, algunos vehículos extraños que recuerda miraban por la ventana asustados. Consultada relata que ese día su hermano salió a reunirse con unos compañeros en una casa de García Hurtado, que un sector de Rahue Alto, y ahí se daba un tema que los vecinos se veían con todo el mundo casi como

enemigos, cree que alguien denunció, supone que llamaron a carabineros o militares, que había una reunión de subversivos o algo así y ahí es donde llegaron las patrullas, su hermano se asustó, arrancó y le dispararon por la espalda. Eso es lo que lograron construir de lo que sucedió ese día.

a.11. LUIS BENECIO ROSAS ASENJO

En declaración judicial, de fecha 11 de diciembre de 2014, que rola a **fs. 326 a fs. 327 (Tomo I)**, alega en lo atinente que es hermano de la víctima Reinaldo Patricio Rosas Asenjo a la fecha de los hechos tenía 10 años de edad. Recuerda que su hermano era presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres y presidente de la juventud socialista. En esa época vivían con sus padres en la ciudad de Osorno. El día 11 de septiembre y luego del golpe militar, su hermano llegó alterado a la casa. Al día siguiente su hermano quiso salir, pues deseaba organizar a sus compañeros y hacer frente a lo que él consideraba una situación anormal causada por los militares. Reinaldo salió de la casa, sin regresar. Al día siguiente, junto a sus padres fueron a la casa de sus abuelos maternos Enrique Asenjo Márquez, quien les dijo que había visto a Reinaldo, pero solo había pasado a saludar. Por ello continuaron la búsqueda, hasta finalmente llegar a una comisaría, donde le recomendaron ir al hospital, porque sabían que ahí había algunos occisos. Al llegar, efectivamente encontraron el cadáver de Reinaldo a quien vio personalmente impactándose el estado en que se encontraba, pues tenía una herida en la espalda producto de un balazo que le atravesó el cuerpo y, además, sus rodilla y ropa rotas que impresionaban como si lo hubieran arrastrado por terrenos duros y por un largo trecho. El cuerpo de su hermano les fue entregado al día siguiente, es decir, el 13 de septiembre de 1973, fueron sus funerales en el cementerio general de Osorno. Aclara que durante estos años ha logrado recabar que Reinaldo fue herido por una bala disparada por un militar.

a.12. JUANA HORTENCIA ASENJO ASENJO

En declaración extrajudicial, de fecha 04 de septiembre de 1990, que rola a **fs.10 (Tomo I)**, ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación soslaya que su hijo salió de su casa, siendo aproximadamente las dieciocho horas, con destino a una reunión del Partido Socialista. Estando en la reunión, por conversaciones que ha tenido con un compañero de su hijo, de nombre Adrián Soto, llegaron los militares e ingresan violentamente al lugar. Una vez que ingresan su hijo sale del lugar, pero no alcanza a dar unos cuantos pasos cuando los militares le disparan, queda gravemente herido. Los militares lo llevan en el

furgón en que se movilizaban al hospital de Osorno, centro asistencial en donde muere el mismo día. En cuanto a la identidad de los involucrados la desconoce. Indica que el certificado de defunción no señala la causal de su muerte, sin embargo, tanto ella como su marido, vieron el cuerpo y les consta que la bala ingreso por la espalda y salió en el pecho.

En declaración extrajudicial, sin indicación de fecha rolante a **fs. 36 (Tomo I)**, (cuya copia se encuentra a fs. 151 Tomo I), decanta que el día 11 de septiembre de 1973, entre las 17:30 a las 18 horas, Reinaldo salió de su hogar en dirección desconocida, ya que no informó a sus padres donde se dirigía, solo dijo “que tenía que hacer unas diligencias”. Como no llegó ese día, el padre don Luis Rosas, fue donde sus suegros en Rahue Alto a preguntar por él, ahí le informaron que había pasado a saludarlos el día 11 en la tarde. Posteriormente, el padre fue hacer averiguaciones a la Primera Comisaría de Osorno, al Hospital de Osorno, donde trabajaba una hermana del Padre, quien le informó que Reinaldo estaba en la morgue, no lo podía creer y fue a ver, lo reconoció, hizo los tramites y se lo entregaron. El padre le dice que tenía un proyectil en la espalda y salió por el pecho. Fue enterrado en el cementerio de Osorno. Por indagaciones posteriores supieron que Reinaldo estaba en una reunión y una vecina del lugar dio aviso a los militares, quienes rodearon el lugar, el niño arrancó y al saltar un cerco recibió las balas. Sostiene que la persona que habría “matado” a Reinaldo, es un militar de la población Bellavista de Rahue, Osorno, a quien le apodan “El Chocolito”. Que hay un testigo, Adrián Soto, que actualmente se encuentra fuera del país.

En declaración extrajudicial, de fecha mayo del 2011, que rola a **fs. 28 (Tomo I)**, soflama que Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, era su hijo, quien tenía 17 años de edad al momento de fallecer. Que Reinaldo Patricio era presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombre de Osorno. El día 12 de septiembre de 1973, en horas de la mañana. Reinaldo salió de su casa, indicando que participaría en una reunión convocada por el Partido Socialista, la que se realizaría en una casa ubicada en el sector de Rahue Alto, de la misma ciudad, desconociendo la dirección exacta. Esa noche Reinaldo Patricio, no regresó a dormir a casa, por lo que al día siguiente, en horas de la mañana tanto ella como su esposo Luis Rosas Ruiz, actualmente fallecido, comenzaron a buscarlo en distintos lugares, sin resultados. Finalmente, el cuerpo sin vida de su hijo fue encontrado en la morgue del hospital de Osorno; haciendo presente que al reconocer el cadáver de su hijo, pudo constatar que el cuerpo tenía una herida en la espalda, dándole la impresión que dicha lesión era una bala que salió por el pecho. Agregando haberse enterado que su hijo Reinaldo, efectivamente había sido herido de bala por los militares, cuando intentaba huir del lugar del lugar,

donde se encontraba participando en la reunión del Partido Socialista, junto a otras personas, de las cuales desconoce sus identidades; no obstante Reinaldo no se encontraba armado. Que no realizó gestiones para determinar las identidades de los militares que “mataron a su hijo”.

En declaración judicial, de fecha 29 de junio de 2020, que rola de **fs. 945 Bis a fs. 946 (Tomo III)**, en lo pertinente ratificando su declaraciones de fs. 10 y de fs. 25. Consultada si fue al hospital con su marido y vio el cuerpo, responde que su marido fue, ella no y que una cuñada que trabajaba en el hospital, se juntó con su marido y pudo ver el cuerpo y el proyectil. Se le lee declaración de fs. 151, el cual ratifica, suma que ese año su hijo iba a licenciarse de cuarto medio. Que la autoridad no dio ninguna justificación.

a.13. ADRIAN MOISÉS SOTO ALARCÓN

En declaración judicial, de fecha 10 de julio de 2018, rolante de **fs. 790 a fs. 791 (Tomo III)**, ratifica declaración extrajudicial de 11 de julio de 2018 (la cual consta a fs. 792 a fs. 793 Tomo III), aduce que en lo pertinente que él era secretario regional de la juventud y Reinaldo era vicesecretario. Que la hora en que ocurrieron los hechos fue a las 20:30 horas, lo recuerda muy nítidamente, había alumbrado eléctrico pero tenue, no dificultaba en ningún caso la posibilidad de distinguir a los militares con su casco de guerra y su fusil en la mano derecha. Que cuando dio la alerta de aviso, Reinaldo quedo un poco atrapado en el rincón del lugar donde estaban sentados. Refiere que el únicamente vio militares integrando la patrulla, no puede precisar si había patrullaje mixto, con carabineros. Observó dos vehículos militares en el callejón, pero al parecer había más, esto lo presume por los ruidos de los motores. No vio cuando le dispararon a Reinaldo, pero escuchó las dos detonaciones muy cerca, y eso fueron los únicos dos disparos que se escucharon. El militar que él vio, no podría decir si era de piel morena o no, pero si era un hombre maduro, no era un conscripto. Sostiene que es efectivo que pudieran haberle disparado a Reinaldo cuando estaba saltando el cerco o cuando corría hacia el cerco. Recalca que ellos no tenían armas, y el objetivo era contactar con la dirección provincial del partido para ver que se podía hacer.

En declaración extrajudicial, sin fecha, rolante de **fs. 792 a fs. 793 (Tomo III)**, precisa que la noche del 13 de septiembre de 1973, a eso de las 19:00 horas, con toque de queda vigente se escabulló a la casa de seguridad ubicada en cercanías de la escuela Canadá, en Rahue Alto. Los dueños de casa eran una pareja joven. Que eran dirigentes de la juventud socialistas. Que a la cita llegaron sólo Reinaldo Rosas y él. Que alrededor de las 20:30 horas mientras escuchaban

la radio y los bandos militares el silencio se vio interrumpido por el ruido de vehículos motorizados que avanzaban en el vecindario. Que en su caso estaba sentado más cerca de la puerta salió a ver, y al mirar por sobre la tapia trasera pudo apreciar dos jeep del ejército. Dio la voz de alarma presintiendo lo peor, escucharon como se detenían en la boca de la calle del callejón que daba al frontis de la casa. Salió a dar otra mirada, esta vez por el frontis. La iluminación era débil, pero pudo ver a un soldado de mediana estatura y de complexión corpulenta, que avanzaba en su dirección. Más tarde llegó a la conclusión que tenía que ser un oficial o suboficial. Portaba un casco de guerra y botas de campaña sobre el pantalón del uniforme. Llevaba el fusil en su mano derecha. Relata que él corrió hacia la puerta de la cocina, a dar la voz de alarma. “Nos vamos chico que viene por nosotros, dije desde la puerta”. Comunica que Reinaldo estaba sentado en el rincón supone que se demoró una fracción de segundos en alcanzar la puerta de salida. Que ambos estaba desarmados, corrieron hacia la tapia trasera, cuando estaba sobre la tapia escuchó dos disparos de fusil que cortaron la vida de Reinaldo, que no escucho la caída del cuerpo ni lamento.

a.14.NIBALDO CUMICAN CUICUI

En declaración extrajudicial, de fecha 05 de agosto de 2013, que rola de **fs. 226 a fs. 227 (Tomo I)**, adosa en lo adecuado que después del golpe militar él se encontraba viviendo con su madre en el domicilio ubicado en la población Carlos Ibáñez, en calle Oruro, no recuerda la numeración exacta, tampoco recuerda la fecha, pero ese día se reunieron en casa de su madre un grupo de jóvenes, la mayoría socialistas, en total eran 12 jóvenes, los cuales empezaron a llegar a eso de las seis de la tarde, pero a eso de las diez u once de la noche llegaron los militares en un camión y se fueron directamente para su casa. Ahí él alcanzó avisarles a los compañeros, los cuales arrancaron en diferentes direcciones, pero lamentablemente Reinaldo no alcanzó a arrancar, ya que su chaqueta se le enredo en los alambres de un cerco. A él se lo llevaron detenido, lo subieron al camión donde también echaron el cuerpo de Reinaldo, los trasladaron al regimiento Arauco de Osorno, donde permaneció un momento porque después lo llevaron a la primera Comisaría de Carabineros de Osorno. Recordando que esa noche junto a los militares llegó un carabinero de apellido Meneses, era sargento a este lo conocía porque le había hecho unas pegas de carpintería en la Comisaría de Rahue Alto. Respecto a los militares no conocía a ninguno, en su mayoría eran jóvenes y solo tres eran de más edad y tenían grado.

En declaración judicial, de fecha 25 de octubre de 2013, que rola de **fs. 245 a fs. 246 (Tomo I)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial rolante de fs. 221 a fs. 221 (que consta a fs. 226 a fs. 227) e invoca que debe aclarar que el día de los hechos a eso de las 22:30 horas en circunstancias que se encontraba en la casa de su madre acompañado de un grupo de compañeros del Partido Socialista, salió al portón a fumar un cigarrillo, en ese momento vio acercarse un camión blindado que colocó en frente del portón de la casa, cerró el portón con candado por dentro y avisó a sus compañeros que se fueran, en ese momento ingresaron los militares y carabineros quienes saltaron el portón, estaba acordonada la manzana completa. Todos sus compañeros arrancaron y escuchó un balazo cuando mataron a su compañero Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. El balazo vino de la calle de atrás. El disparo vino de un soldado, no de carabineros. En cuanto a las edades de los militares y carabineros puede decir que todos eran jóvenes, el de más edad era el sargento de carabineros Meneses. Sostiene que había militares al interior de su casa, que él también estaba en el lugar cuando escuchó un solo disparo. Preguntado dice que había luz eléctrica cuando ocurrieron los hechos. Agrega que a él lo subieron al camión detenido y luego pasaron a buscar el cuerpo del “finado” Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, que no hubo otros detenidos, ya que todos los demás lograron escapar. Precisa que la patrulla estaba integrada por los militares y un solo carabinero que era el sargento Meneses, que actualmente se encuentra fallecido.

a.15. DELICIA DEL CARMEN RAUQUE ARCOS

En declaración extrajudicial, de fecha 15 de febrero de 2015, que rola de **fs. 172 a fs. 173 (Tomo I)**, funda que recuerda bien el caso, pero no recuerda fecha exacta, pero fue un día en la tarde, después del golpe de militar, ella se encontraba afuera de su casa a eso de las 18:30 horas más o menos, cuando a unos 20 metros vio a un joven que estaba parado en la calle, se notaba que venía arrancando y justo frente a la casa paró un camión de los militares, donde se bajaron “dos milicos”, los cuales le dispararon a este joven, fueron como cuatro disparos, pudiendo ver que el chico dio como una vuelta y cayó al suelo, quedando tirado justo donde está ahora el portón del templo Mormón. Después de que le dispararon lo subieron al mismo camión que se estacionó frente a la casa, pero ahí ya estaban como siete militares. Por comentarios supo después que un vecino de apellido Hurtado, conocido como “Chamel Hurtado”, quien era dueño de un negocio que estaba en la esquina de calle Cochabamba con Río Beni, había llamado a los militares. Además por comentarios supo que el joven muerto había salido por la parte de atrás de la casa de Díaz, saliendo por la casa colindante que

da a esta calle Cochabamba, pues la casa de Díaz queda ubicada por calle Oruro. Que no pudo reconocer a ninguno de los militares que le dispararon al joven, ya que andaban vestidos iguales.

a.16. ANA DEL CARMEN HIDALGO HIDALGO

En declaración extrajudicial, de fecha 15 de febrero de 2015, que rola a **fs. 170 a fs. 171 (Tomo I)**, esgrime que no recuerda fecha exacta de cuando sucedió, pero fue en 1973, después del golpe de Estado, un día en la tarde se encontraba en su casa cuando de pronto escuchó unos balazos, como ráfaga. Al ver por la ventana vio que unos dos o tres militares le dispararon a un joven desconocido, el cual quedó tirado casi al frente de la casa, ya que ese joven venía arrancando desde las casas que están por el lado de atrás. Después supo que venía desde la casa de la familia Juan Barrera y su señora Socorro de quien no recuerda apellido (ambos fallecidos). La casa de la familia Barrera colinda por la parte de atrás con la de la familia Fernando Díaz. Este joven que mataron venía de la casa de don Fernando, saltó el cerco de la casa de don Juan Barrera y frente a esa casa lo mataron. Después de que le dispararon a este joven, llegó un camión de los militares y entre unos cuatro de ellos lo agarraron y lo echaron al camión. Por comentarios supo que eran dos los jóvenes que venían arrancando, pero uno logró hacerlo, mientras el otro “fue el chico que murió”. Desconoce quiénes eran los militares que mataron a este joven, tampoco se enteró después.

En declaración judicial, de 07 de noviembre de 2017, rolante de **fs. 708 a fs. 709 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 165 a fs. 166 (la que consta a fs. 170 a fs. 171), prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile. Decantando que no conocía al joven que falleció. Ese día sintió una ráfaga de balazos, pero no recuerda con precisión el número de militares que le dispararon, pero deben haber sido cerca de dos. Que vio el cuerpo caer, “deben haberle disparado por la espalda”. Sabe que el joven venía escapando en compañía de otro joven, desconoce a ciencia cierta desde que casa venían corriendo, asume que deben haber estado en una reunión en la casa de Díaz, saltando el cerco para escapar. Luego que el cuerpo cae lo recogieron entre al menos cuatro y lo subieron de vuelta al camión. Que solo vio militares en el lugar. Afirma que el regimiento N°4 de Arauco era el único que existía en Osorno en esa época, por lo que el camión que estaba en la población debe haber salido de ahí.

a.17. OSVALDO ROGEL ANDRADE

En declaración extrajudicial de fecha 15 de febrero del 2013, que rola a **fs. 168 a fs. 169 (Tomo I)**, explana que no recuerda fecha exacta fue en el

año 1973 días después del golpe de Estado, vio por la ventana del living de su casa, en horas de la tarde, a un joven a quien no conocía, que venía arrancando por calle Oruro por calle Río Beni, siendo perseguido por tres militares, doblando por calle Cochabamba hacia El Salvador y en la esquina le dieron alcance los militares y le dispararon, pues escuchó, al parecer dos disparos; luego llegó una camioneta del ejército, lo subieron muerto y se lo llevaron. Al cabo de unas horas, él y algunos vecinos fueron al lugar donde había sido muerto el joven, donde aún había un charco de sangre. Desconociendo quienes eran los militares que mataron al joven. Reitera que no conocía al joven, pero por comentarios, al parecer estaba en una reunión en una casa y de allí había arrancado.

a.18. JUAN MARIO ARANCIBIA LÓPEZ

En declaración judicial, de fecha 27 de abril de 2012, que rola de **fs. 59 a fs. 60 (Tomo I)**, proclama que en el año 1973 en el mes de septiembre se desempeñaba como cabo segundo y le correspondía realizar funciones en el regimiento reforzado Arauco, con asiento en la ciudad de Osorno, que a la fecha tenía 23 años de edad. En lo pertinente aduce que él era conductor del vehículo militar, patrulla militar compuesta por un oficial y seis soldados, y se dirigieron al sector de Rahue Alto, porque habían recibido información que en el lugar se desarrollaba una reunión del MIR, le parece que esto ocurrió entre el 11 y 12 de septiembre de 1973. En estas circunstancias, cuando llegaron al lugar, se bajaron los soldados con el oficial y él se quedó cuidando el vehículo, esto ocurrió entre las 8 y 10 de la noche, ellos ingresaron a un pasaje que estaba muy oscuro y al parecer quienes estaban reunidos supieron que había llegado un patrulla militar y huyen del lugar, el deponente dice que se encontraba a aproximadamente a 80 metros de distancia, la luz estaba cortada, que no los alcanzaban a ver. En ese momento escuchó un solo disparo, al rato después llega la patrulla con el herido, como esta oscuro no miró a la persona y enseguida recibió la orden de dirigirse de inmediato al hospital. Un soldado hizo el disparo cuando las personas huían del lugar, se disparó un arma que identificó como un fusil, no sabe quién disparó nunca preguntó. A cargo de esa patrulla estaba un subteniente de apellido italiano, pero no recuerda ni el nombre ni el apellido. En cuanto a los miembros de la patrulla, a los soldados, los conocía sólo de vista, no puede decir algún nombre específico de quienes iban en la patrulla, llegaron al regimiento y después las patrullas eran formadas por otros integrantes, pero él siempre fue conductor. Aduce que él no le disparó a Reinaldo Rosas, que no portaba fusil, portaba pistola.

En declaración judicial, de fecha 12 de diciembre de 2014, rolante de **fs. 329 a fs. 330 (Tomo I)**, aquilata que ratifica la declaración prestada ante el

Tribunal. Exhibida la nómina de las personas que integraban el Regimiento de Ingenieros Reforzados Arauco de la ciudad Osorno el año 1973, señala que cuando declaró el año 2012 hizo referencia a un señor de apellido raro o italiano que no recordaba, sin embargo, ahora al ver el listado piensa que el único que podría ser es el subteniente Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, quien se desempeñaba en material de guerra, por lo que no se relacionaba con ellos- el resto de la tropa- directamente sino en otro lugar. Por lo señalado, asegura que este señor Santibáñez era quien iba como jefe de la patrulla y fue él fue quien se bajó con los soldados y entró al pasaje donde se reunían los adherentes al MIR. A la pregunta cómo traían al detenido que había sido herido, responde que dos personas lo traían por los brazos y otro dos por los pies. Sostiene que solo lo vio cuando llegó el personal con el detenido a dejarlo en la camioneta militar (un vehículo americano del ejército), pero dice que es posible que éste haya sido arrastrado momentos antes. Afirmando que en grupo que integraba la patrulla que trasladó en ese operativo, que eran todos militares para él eran desconocidos, por lo cual no puede aportar apodos. Que las órdenes de disparar se daban en el cuartel, en forma previa a los operativos. Todos salían sabiendo que podrían disparar y también que podrían ser atacados. Que a todo el personal se le entregó munición de guerra y era para ser utilizado.

En declaración judicial, de fecha 30 de agosto de 2004, que rola a **fs. 352 a fs. 356 (Tomo I)**, decanta su carrera funcionaria y en lo pertinente sostiene que el 11 de septiembre estaba asignado a la primera compañía, a cargo de un camión para transporte de personas, un jeep y una camioneta tres cuartos. En lo referente a la muerte de un joven que era dirigente del liceo de hombres de Osorno, dice que una noche, entre las 20:00 y las 21:00 horas, al parecer el mismo día 11 de septiembre, un subteniente que había llegado al parecer a principios de 1973, de apellido italiano o alemán, de pelo rubio, recibió la orden de la comandancia en el sentido de allanar un domicilio en Rahue Alto, en el cual se habían reunido presumiblemente extremistas, por lo que junto a cuatro soldados rasos se embarcaron en una camioneta que personalmente condujo, guiado por los mismos soldados. Al llegar al lugar, el subteniente y los cuatro soldados se adentraron a la población mientras él se quedó al cuidado del vehículo y al cabo de unos cinco minutos escuchó un disparo de fusil. De ahí pasaron unos quince minutos más y llegaron los soldados con el cadáver de una persona de sexo masculino, un joven de unos 20 años más o menos, al parecer moreno, a quien le vio sangre y un hoyo en el pecho. Escuchó de los soldados que las personas de la casa habían arrancado y que el joven muerto había caído herido de muerte en un sitio aledaño a la casa. Que él no se metió a la casa, pero los soldados no llegaron

con armamento que no fuera el que portaban sino que solamente con el cadáver. El cuerpo tenía un solo disparo. Se explicó la muerte de la persona porque supone que al llegar a la casa éste arrancó y ante eso alguno de los soldados le disparó. No recuerda que el subteniente hubiera hecho algún comentario y enseguida se dirigieron al hospital ubicado en calle Los Carrera, donde fue recibido por los médicos, dice que él pensaba que esa persona estaba fallecida.

b. DOCUMENTOS (10)

- | | |
|---|--|
| 1. Certificado de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. | 6. Informe individual del caso para la Comisión. |
| 2. Informe del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. | 7. Informe de autopsia proceso s/n, Reinaldo Rosas Asenjo. |
| 3. Informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. | 8. Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. |
| 4. Reservado del Estados Mayor General del Ejército. | 9. Reservado del Estado Mayor General del Ejército. |
| 5. Copia del acta de inscripción de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. | 10. Informe policial N°190/702 |

b.1). A fs. 5 y fs. 43 (Tomo I), certificado de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, consigan causa de muerte “hemorragia aguda por rotula visceral”.

b.2). A fs. 8 a fs. 14 (Tomo I), informe del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que contiene:

- a.** A fs. 10 (Tomo I), declaración de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, de fecha 4 de septiembre de 1990, quien sucintamente dice que su hijo salió de la casa, siendo aproximadamente las 18:00 horas, con destino a una reunión del Partido Socialista. Estando en la reunión, por conversaciones que ha tenido con Adrián Soto, llegaron los militares e ingresaron violentamente al lugar. Una vez que los militares ingresan, su hijo sale del lugar, pero no alcanza a dar unos pasos cuando los militares le disparan, queda gravemente herido. Los militares lo llevan en el furgón en que se movilizaban al hospital de Osorno, donde muere. Desconoce las identidades de los militares involucrados. Agrega que tanto ella como su marido vieron el cuerpo y les consta que la bala ingreso por la espalda y salió por el pecho.

b. A **fs. 12 fs. 14 (Tomo I)**, informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a fs. 13 soslaya “Osorno. El 13 de septiembre de 1973 es muerto Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, 17 años, militante socialista, presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno. La víctima se encontraba en una reunión el día señalado en una casa de la ciudad de Osorno, cuando irrumpió una patrulla militar con la intención de detener a los participantes. Reinaldo Rosas intentó huir y los militares le dispararon, dejándolo herido de muerte. Trasladado al hospital de Osorno, falleció el mismo día 13. La Comisión se formó la convicción de que Reinaldo Rosas fue víctima de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado (...) que es un hecho comprobado que se le disparó cuando intentó eludir su detención. Que está comprobado que no existió una resistencia armada a la acción militar. Que no aparece que la fuerza ejercida por los miembros de la patrulla al disparar a matar a un menor desarmado, haya sido la adecuada frente a la situación, y que parece razonable pensar que la fuga del afectado pudo ser evitada sin necesidad de recurrir a la vía que se utilizó”.

b.3). A **fs. 36 a fs. 37 (Tomo I)**, informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el que a fs. 36 se acompaña declaración extrajudicial de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, detallada en la letra A).

b.4). A **fs. 250 a fs. 251 (Tomo I)**, reservado del Estado Mayor General del Ejército N°1595/36, en el cual se remite la nómina de oficiales, sub oficiales y clases, al mes de septiembre de 1973. En el cual en su hoja N°1 se señala dotación del Regimiento de Ingenieros N°4 Arauco, a septiembre de 1973 se consigna **subteniente Santibáñez Mangelsdorff, Gustavo**.

b.5). A **fs. 45 (Tomo I)**, copia fiel del acta de inscripción de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, prescribe causa de la defunción hemorragia aguda por rotura viseral. En el apartado de comprobación de la defunción a través de certificado médico resolución del Juzgado Militar de Osorno.

b.6). A **fs. 109 a fs. 118 (Tomo I)**, informe individual del caso para la Comisión, que se detalla:

- a) A. fs. 109 certificado de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo.
- b) A fs. 110 a fs. 111, declaración ante la Comisión de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, de fecha 04 de septiembre de 1990.

- c) A fs. 112, identificación y antecedentes de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, fecha de nacimiento 04 de agosto de 1956, 17 años de edad, soltero, militancia política Partido Socialista, Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombre de Osorno, estudiante. Detenido el día 12 de septiembre de 1973, organismo responsable militares, lugar de los hechos Osorno, fecha de la muerte 13 de septiembre de 1973.
- d) A fs. 113 a fs. 114, en cuanto a la descripción pormenorizada de los hechos se concluye que: “La víctima era presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno. El día 13 de septiembre de 1973, alrededor de las 18:00 sale de su domicilio para asistir a una reunión. En esa reunión habrían sido detenidos por militares y se le habría disparado, causándole la muerte. El cadáver es entregado a los familiares quienes tiene oportunidad de constatar que fue herido de bala y el proyectil entró por la espalda y salió por el pecho”. En antecedente relevante: “Eliana Amelia Paredes Fonseca, declara en el juicio seguido por presunta desgracia de Mario Fernández Acum, lo siguiente: que es esposa de militar...que tenía un pensionista en ese momento, de nombre Mario Arancibia López, también militar... he sabido que Arancibia fue miembro de los organismos de seguridad y oriundo de Quillota. Mario Arancibia López tuvo participación en otros hechos, nos contó que había participado en el grupo que había dado muerte a Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, en todo caso él no lo había asesinado, sino que un militar cuyo nombre no dio”.

b.7). A fs. 136 a fs. 137 (Tomo I), ordinario 76/2013 del Servicio Médico Legal, en que se adjunta informe de autopsia proceso s/n, del 13 de septiembre de 1973, peritaje realizado por el médico legista Dr. Guido Poblete Poblete, el que señala: “De acuerdo a oficio s/n he procedido a practicar la autopsia a Reinaldo Rosas Asenjo, de 17 años de edad. Examen externo, en el dorso nivel de cuarta vertebra en el lado izquierdo se observa orificio de borde nítidos que corresponden a entrada de proyectil. En la región pectoral del lado izquierdo a nivel de la tercera espacio inter costal se observa un orificio de 5 cms., de diámetro con los bordes la... destrucción del cuarto artícolo y tegumentos. Examen interno, gran hemotorax izquierdo, se constata destrucción del segmento auricular y estallido del ventrículo izquierdo de vísceras cardíaca”. Concluye como causa de muerte la hemorragia aguda por rotura visceral. Acto de tercero: si; instrumento empleado: arma de fuego.

b.8). A fs. 153 a fs. 159 (Tomo I), informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el que consta:

- a) A fs. 155 a fs. 156, certificado de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo.
- b) A fs. 157 antecedentes: Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, estudiante, Partido Socialista, Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno, dirigente, ejecutado en fecha 12 de septiembre de 1973, 22-23 horas aproximadamente, lugar población García Hurtado... calle Cochabamba. Relato del caso: "salió de su casa a las 17 horas del día 11 de septiembre 1973, posteriormente los padres supieron que el cuerpo de Reinaldo estaba en la morgue del hospital, ahí supieron que el niño habría sido baleado".
- c) A fs. 158 a fs. 159, declaración ante la Comisión de Juana Hortencia Asenjo Asenjo.

b.9). A fs. 969 a fs.977 (Tomo III), reservado N° 1595/ 7319, del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, que contiene hoja de vida de fecha 01 de agosto de 1972 a 30 de junio de 1974 y fotografía (1972 -1975) del subteniente **Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff**.

b.10). A fs. 177 a fs. 186 (Tomo I), informe policial N°190/702, de fecha 22 de marzo de 2013, que identifica a los familiares de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, suscribe declaraciones extrajudicial de Osvaldo Rojel Andrade, Ana del Carmen Hidalgo Hidalgo y de Delicia del Carmen Reuque Arcos. Una macro localización del sitio del suceso, fotografía digital donde se indica la calle Cochabamba, fotografías de la vista de la calle Cochabamba desde el río Beni, vista general de la calle Cochabamba desde calle El Salvador, vista particular del lugar desde donde escapo la víctima, antes de ser interceptada y ultimada por militares (conforme al testimonio de vecinos del sector) y vista particular del lugar donde habría fallecido la víctima desde el Angulo contrario.

10°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos, documentos y pericias antes señalados. Como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 1.008 a fs. 1.010 (Tomo IV)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción: primero que ha existido el delito de **Homicidio Simple** en la persona de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de autor en los términos del artículo 15 N°2 del Código Penal al acusado **Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff**, ello sin perjuicio

de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

D. EN CUANTO A LA DEFENSA DEL ACUSADO GUSTAVO EDUARDO SANTIBÁÑEZ MANGELSDORFF:

11°) Que a **fs. 1.152 a fs. 1.157 (Tomo IV)**, el abogado Patricio Contreras Boero, en representación de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff, en lo principal de su escrito contesta la acusación. Al primer otrosí medios de prueba. Al segundo otrosí beneficio en el caso que señala.

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

A. Excepciones de fondo:

a. Prescripción de la acción penal

B. Solicitud de absolución.

a. No se encuentra acreditado que el señor Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff haya tenido participación en el hecho delictivo por el cual se le acusa.

C. Atenuantes. Invoca la prescripción gradual y Artículo 11 N°6 del Código Penal, las que serán analizadas en los considerandos posteriores.

A. Excepciones de fondo:

a. Prescripción de la acción penal: la defensa alega la prescripción de la acción penal en base a que en la acusación y sus adhesiones se indica que su representado, en calidad de autor, habría cometido el supuesto delito de homicidio simple en contra de la supuesta víctima de autos. Considerando el tiempo transcurrido desde su fallecimiento, desprende que ha transcurrido un tiempo superior al plazo requerido por la ley para la prescripción de la acción penal incoada, citando los artículos 93 N°6; 94 y 102 del Código Penal. Que existe una fuerte corriente doctrinaria en la Excma. Corte Suprema, que sostiene la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar, prescribirían al igual que los delitos comunes, entendiendo que la prescripción es una institución fundada en la necesidad de consolidar y poner fin a situaciones irregulares que se producen en el transcurso del tiempo entre la ocurrencia del hecho punible y el inicio de la persecución penal, produciéndose el fin de la potestad represiva del Estado. Refiere a la discusión si el supuesto delito cometido en la presente causa, el cual se habría realizado luego del pronunciamiento militar de septiembre de

1973, podría ser considerado delito de lesa humanidad, al cual le serían aplicables el Convenio de Ginebra de 1949, el II Protocolo adicional al convenio relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional, el cual de ser aplicable en este caso concreto volvería inutilizable el artículo 94 del Código Penal relativo a la prescripción de la presente acción. Que se ha señalado por notable juristas nacionales que los mencionados Convenios de Ginebra se aplican a conflictos armados entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por cualquiera de ellas. Arguye que excepcionalmente dichos convenios se aplicarían en caso de conflictos armados sin carácter de internacional, conforme al artículo 3 común para todos los Convenios de Ginebra. Menciona a Jean Pictet, jurista quien aduce da una lista de condiciones las que encuadrarían dentro de un conflicto armado no internacional, los que señala, y que de la lectura de tales condiciones desprende que éstas no se cumplieron en forma alguna durante el tiempo que se mantuvo régimen militar o dictadura producida en septiembre de 1973, por lo que no podría entenderse de ninguna forma que existió un conflicto armado no internacional en dicho periodo. A finca que es innegable que en el presente caso, si procede la prescripción de la acción penal, por lo que debería declararse de oficio por el Tribunal, absolviendo a su representado Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff de todos los cargos que se le acusan en calidad de autor del supuesto delito de homicidio simple en carácter de lesa humanidad considerando que han transcurrido 48 años hasta la fecha, por lo que operaría la institución de la prescripción.

B. Solicitud de absolución.

a. No se encuentra acreditado que el señor Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff haya tenido participación en el hecho delictivo por el cual se le acusa: la defensa sostiene que no existiría ningún testimonio que pueda establecer a ciencia cierta, quienes fueron los que cometieron el delito de homicidio simple, ni menos como se habría cometido, por lo que resulta sorprendente que se indique a su representado como autor mediato o inmediato del delito de homicidio sin tener un testigo que acredite esto conforme a los criterios probatorios necesarios para imponer una condena penal. Que la descripción de los hechos que se le imputan al procesado tiene un carácter garantista vinculado a la congruencia procesal que debe existir entre la acusación y la condena, no pudiendo esta última exceder de los términos de la acusación, lo que estaría ligado a la garantía del derecho de defensa del acusado. Que la resolución que acusa a su representado, no contenga una descripción lo

suficientemente precisa y clara de las conductas que se le imputan, imposibilitaría su defensa violentándose la garantía del debido proceso. Que la exigencia reclamada en la acusación no solo emana de las normas procedimentales antes señaladas, sí no también en el Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7.4 el que transcribe. Afirma la defensa que ninguna de las pruebas señaladas en la acusación de oficio, querella particular, ni adhesión, permite concluir que Gustavo Santibáñez Mangelsdorff tuvo participación alguna en el delito de homicidio simple que se le imputa. Cita el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, en cuanto al estándar para dictar sentencia, lo que aduce es congruente con un sistema de prueba legal reglada o tasada. En subsidio de lo anterior, para el improbable evento que se establezca la participación culpable de su representado, solicita una pena no superior a 300 días de presidio menor en su grado mínimo, por favorecerle la atenuante muy calificada del artículo 103 del Código Penal, la atenuante del número 6 del artículo 11 de mismo cuerpo legal. Finalmente solicita la absolución de su representado o en subsidio conceder una rebaja en la pena.

E. ANÁLISIS DE LA DEFENSA

12°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA:

Que previo al análisis de las defensas específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

A. Obligación de investigar:

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

a. Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra

Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

b. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

c. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

d. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

e. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

f. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...)el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios,

sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo 42 anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115 explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expone que (...) asimismo, en el cumplimiento

de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004.

Párrafo **159** acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo **83** añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo **145** anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el **137** (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. **233** (...) Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la

obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; **299 (...)** Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo **143** afínca que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117 (...)** Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el

proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129** (...) una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130** (...) Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111** (...) Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114** (...) Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo **387**. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo

razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156** (...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo **106** indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el

contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. **112** (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha

dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo 142 narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo 77 acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo 283 añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia

ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de los Cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de los Cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-,

complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos,

que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

g. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en **Eduardo Ferrer Mac-Gregor-** (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

- i. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.
- ii. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales,

arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

- iii. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.
- iv. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.
- v. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.
- vi. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.
- vii. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.
- viii. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.
- ix. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas

necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

- x. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.
- i. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación
- ii. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.
- iii. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.
- iv. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la

muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

h. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia y que la defensa nada expresa. Así del estudio de sus argumentos sucede que no hay un cotejo y ponderación adecuado de todos los testigos y documentos, sino que se refiere a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que esta defensa debe situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

B. Jurisprudencia Internacional Sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) Pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.

a. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisaría, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) y **Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de

los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

b. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado

dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas.** Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

c. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar

a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

d. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo.** De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

e. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente

vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas**. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

f. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal

objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana.** Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

g. Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz.** Sentencia del BGH y comentario de **Claus Roxin** (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

h. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de

las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

i. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado -mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el

acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

j. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

k. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por

acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

I. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

II. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

m. Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho**. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica”

no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

ñ. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

- i. **Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho.** Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.
- ii. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.
- iii. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.
- iv. **En este caso entonces las personas detenidas y llevadas al centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión,** como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

o. En este caso, el **homicidio simple** desde el inicio (como indica el mérito del proceso y el Auto Acusatorio de **fs. 1.008 a fs. 1.010 (Tomo IV)**, de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo**, fue al margen de todo derecho. Las múltiples pruebas, directa e indirecta generales y específicas que se han detallado y ponderado precedentemente, rebate cualquier argumento de la defensa, pues son alegaciones que no derriban el auto acusatorio. La realidad de las cosas demuestra que el acusado **Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff** actuó como autor en estos hechos descritos en el auto acusatorio de fs. 1.008 y siguientes (Tomo IV). Luego se dan todos los elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad para que el acusado tenga el grado de participación que se ha especificado, sin perjuicio de otras consideraciones que puedan realizarse más adelante.

C. Estado De Derecho:

a. **Estado Autoritario:** Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (**Oscar Vilhena Vieira** (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (**Dante Jaime Haro Reyes**: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos**. Es decir, permite

entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (**Pablo Marshall Barberán** (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

b. Origen: El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (**Luis Villar Borda** (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (**Haro**, p. 118).

c. Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo:** en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (**Marshall**, pp. 187-188).

d. Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre (**Haro**, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo

acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (**Haro**, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (**Haro**, p. 126).

e. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (**Marshall**, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra:** **a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (**Marshall**, p.191). Sobre lo anterior **Villar Borda** (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional.

f. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben

detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo.** Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el

Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias- separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (Vilhena, p.30).

13º) Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso frente a una actuación de los agentes del Estado estos deben actuar respetando los derechos de las personas con proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad. Teniendo en especial consideración que ellos andaban armados con un fusil de alto calibre como quedó demostrado con la herida que le causó el proyectil y la muerte posterior de Reinaldo Rosas Asenjo. El **homicidio simple** (como indica el mérito del proceso) de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo**, fue al margen de todo derecho. En consecuencia, es posible hacer el reproche penal al acusado indicado, sin perjuicio de otras reflexiones que pueden hacerse más adelante.

D. Convenio de Ginebra

Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol

2182-98 del ingreso de la ltima. Corte de Apelaciones de Santiago “**Caso Luis Almonacid Dúmenez**” de 29 de octubre de 2013, en su considerando 18, **párrafo 6**, señala que “**los Convenios de Ginebra**” consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder “auto exonerarse” a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *Ius Cogens*. En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: “en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios”. En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido. Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo “Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de *Ius Cogens* o Principios Generales de Derecho Internacional”.

F. ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA

14º) Que haciéndonos cargo de la defensa de **fs. 1.152 a fs. 1.157 (Tomo IV)**, del abogado **Patricio Contreras Boero** por el acusado Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff, el Tribunal estará a lo antes razonado respecto a la declaraciones indagatorias del acusado Santibáñez Mangelsdorff y todos los fundamentos pertinente que atingen a esta defensa en el análisis que se hizo precedentemente, precisando que:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: Que la defensa en sus alegaciones no presento excepciones de previo y especial pronunciamiento.

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que de la misma manera, la defensa pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De igual forma, no objetó ningún documento en particular. El tribunal puntualiza lo siguiente:

C. Excepción de fondo:

a). En cuanto a las excepciones de fondo referidas a la prescripción de la acción penal. Desde ese punto de vista para rechazar esas alegaciones el Tribunal razonará lo que a continuación se indica: a) Este tribunal se ha pronunciado precedentemente sobre esta materia en las causas indicadas en los considerandos anteriores de esta sentencia. Todos fallos condenatorios y ejecutoriados que han rechazado este tipo de excepciones de fondo alegadas. b) En este mismo sentido ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Almonacid Arellano y otros versus Chile”, de fecha 26 de septiembre de 2006, que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso “Barrios Altos versus Perú” de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid Arellano y otros versus Chile” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.3, 82.4, 82.6, 82.7, 108, 112 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados

en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad internacional del Estado, agregando que el decreto ley 2191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En el párrafo 112, aludiendo al caso Barrios Altos versus Perú, la Corte citada indicó: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables, reconocidos por el derecho internacional de los Derechos Humanos.”

b). Que además de los razonamientos expuestos precedentemente, el tribunal tendrá presente lo que en forma reiterada la Excma. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como el investigado en esta causa y por el cual se ha dictado acusación – que corresponde a homicidio simple– es un delito de tal magnitud que debe ser imprescriptible. A modo de ilustración, el máximo Tribunal así se ha pronunciado en las causas roles 31.030 – 1994; 469 – 1998; 517 – 2004; 288 – 2012 y 1.260 – 2013, 34.392-2016, 40.168-2017, 4080-2018, 4568-2018, entre otras. Y de la misma forma, como se ha fallado reiteradamente por este Tribunal en las causas roles 27.525, 27.526, 45.345, 113.990, 113.989, 18.780, 29.877, 45.344, 45.371, 29.869, 27.527 y rol 114.001, todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados. Asimismo, el ilícito materia del auto acusatorio es de aquellos que la doctrina reconoce como de lesa humanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Chile, tiene plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que es imprescriptible e inamnistiable. En consecuencia para la excepción de prescripción de la acción penal, este Tribunal tiene en consideración toda la jurisprudencia reciente citada y en especial, el fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, que en definitiva permite, **rechazar dicha excepción** y así se dirá en lo resolutivo.

D. Solicitud de absolución. No se encuentra acreditado que el señor Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff haya tenido participación en el hecho delictivo por el cual se le acusa. Que sobre lo pedido por la

defensa, no es posible dar lugar a ello, toda vez que el Tribunal estará a todo lo razonado y ponderado en los medios probatorios referidos en forma precedente, puntualizando lo siguiente:

a). El testigo **Nibaldo Cumican Cuicui, en declaración judicial de fs. 245 a fs. 246 (Tomo I)**, cuando estaba fumando un cigarrillo vio acercarse un camión blindado que se colocó frente al portón de la casa, cerro el portón con candando por dentro y aviso a sus compañeros que se fueran, en ese momento ingresaron los militares y carabineros quienes saltaron el portón, estaba acordonada la manzana completa. Todos sus compañeros arrancaron y escuchó un balazo cuando mataron a su compañero Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. El disparo vino de un soldado no de carabineros.

b). La testigo **Delicia del Carmen Reuque Arcos, en declaración extrajudicial fs. 172 a fs. 173 (Tomo I)**, el día de los hechos se encontraba fuera de la casa cuando a unos 20 metros vio a un joven que estaba parado en la calle, se notaba que venía arrancando y justo al frente a la casa se paró un camión de los militares, se bajaron dos milicos, los cuales le dispararon a este joven, fueron como cuatro disparos, pudiendo ver que el chico dio como una vuelta y cayó al suelo, quedando tirado junto donde está ahora el portón del templo Mormón.

c). La testigo **Ana Hidalgo Hidalgo, en declaración judicial de fs. 708 a fs. 709 (Tomo III)**, ese día sintió una ráfaga de balazos, no recuerda con precisión el número de militares que le dispararon, pero deben haber sido cerca de dos. Vio el cuerpo caer, sosteniendo que deben haberle disparo por la espalda.

d). El testigo **Oswaldo Rogel Andrade, en declaración extrajudicial de fs. 168 a fs. 169 (Tomo I)**, vio por la ventana del living de su casa a un joven que venía arrancando por calle Oruro por calle Rio Beni, siendo perseguido por tres militares, quien dobló por calle Cochabamba hacia calle El Salvador y en la esquina le dieron alcance los militares y le dispararon, escuchó dos disparos, luego llegó una camioneta del ejército, lo subieron muerto y se lo llevaron.

e). El testigo **Juan Mario Arancibia López, en declaración judicial de fs. 59 a fs. 60 (Tomo I)**, el día de los hechos cuando llegaron al lugar se bajaron los soldados con el oficial y él se quedó al cuidado del vehículo, ellos ingresaron a un pasaje muy oscuro y al parecer las personas que estaban reunidos sabían que había llegado una patrulla militar y huyen del lugar. En ese momento escuchó un solo disparo y al rato después llegó la patrulla con el herido recibiendo la orden de dirigirse al hospital. A cargo de la patrulla iba un subteniente de apellido italiano. **En declaración judicial de fs. 329 a fs. 330 (Tomo I)**, ratifica lo anterior y en lo referente al apellido italiano que mencionó podría ser el subteniente Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, este señor iba como jefe de patrulla y fue él quien se

bajo con los soldados e ingresó al pasaje donde se reunían los adherentes al MIR. **En declaración judicial de fs. 352 a fs. 356 (Tomo I)**, expresa que al llegar al lugar el subteniente y los cuatros soldados se adentraron a la población mientras él se quedó en el vehículo y al cabo de unos cinco minutos escuchó un disparo de fusil. De ahí llegaron unos quince minutos y llegaron los soldados con el cadáver de una persona de sexo masculino, un joven de unos 20 años más o menos, a quien le vio sangre y un hoyo en el pecho. Se explicó la muerte de esa persona porque supone que al llegar a la casa el joven arranco y ante eso un soldado le disparo.

f). Certificado de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, consigan causa de muerte “hemorragia aguda por rotula visceral” de **fs. 5 y fs. 43 (Tomo I)**.

g). Reservados del Estados Mayor General del Ejército N°1595/36, en el cual se remite la nómina de oficiales, sub oficiales y clases, al mes de septiembre de 1973. En el cual en su hoja N°1 se señala **dotación del Regimiento de Ingenieros N°4 Arauco, a septiembre de 1973** se consigna **subteniente Santibáñez Mangelsdorff, Gustavo**, de **fs. 250 a fs. 251 (Tomo I)**.

h). Ordinario 76/2013 del Servicio Médico Legal, en que se adjunta informe de **autopsia proceso s/n**, del 13 de septiembre de 1973, peritaje realizado por el médico legista Dr. Guido Poblete Poblete, el que señala: “De acuerdo a oficio s/n he procedido a practicar la **autopsia a Reinaldo Rosas Asenjo**, de 17 años de edad. Examen externo, en el dorso nivel de cuarta vertebra en el lado izquierdo se observa orificio de borde nítidos que corresponden a entrada de proyectil. En la región pectoral del lado izquierdo a nivel de la tercera espacio inter costal se observa un orificio de 5 cms., de diámetro con los bordes la... destrucción del cuarto artígallo y tegumentos. Examen interno, gran hemotorax izquierdo, se constata destrucción del segmento auricular y estallido del ventrículo izquierdo de vísceras cardíaca”. Concluye como causa de muerte la hemorragia aguda por rotura visceral. Acto de tercero: si; instrumento empleado: arma de fuego. **De fs. 136 a fs. 137 (Tomo I)**.

i). Para mayor ilustración y convencimiento de lo razonado por el Tribunal están los propios dichos acusado **Gustavo Santibáñez Mangelsdorff**, quien en su **declaración extrajudicial de fs. 365 a fs. 366 (Tomo II)**, que después del 11 de septiembre de 1973 le correspondió salir a patrullajes, fue así que en un turno de noche fue instruido de acudir junto a la patrulla militar que tenía a su cargo ese día, al sector de Rahue Alto, que se había puesto en alerta a la superioridad que había o se efectuaba una reunión clandestina de varias personas y como era de noche, y no se podía hacer reuniones en esa época, partió con la

patrulla militar a su cargo, la que correspondía a una camioneta con quince soldados conscriptos, todos armados con fusiles Mauser. Recuerda que como el vehículo en el que se transportaban en ese tiempo metía ruido, es que antes de bajarse en la casa donde se estaba efectuando la reunión, las personas los escucharon y salieron arrancando a sitios aledaños, uno de los cuales recuerda claramente que saltó la cerca, entonces estando en ese momento como a treinta metros de esta persona, unos cinco o seis soldados conscriptos le dispararon con fusiles Mauser que todos portaban. **En declaración extrajudicial de fs. 413 a fs. 414 (Tomo II)**, el día del fallecimiento de la víctima de autos, la orden inmediata era detenerlos sin inconveniente al momento de proceder, ya sea escape, resistencia de cualquier tipo o enfrentamiento, era proteger “nuestras vidas y defendernos por medio de la utilización de nuestras armas de servicio”. Una vez verificado el fallecimiento del individuo, dio aviso vía radial a la unidad, no recuerda quien recibió el comunicado, lo anterior tenía finalidad interiorizar de manera inmediata y oportuna de lo ocurrido al comandante de guarnición y este su vez diera cuenta a las autoridades competentes. **En declaración judicial de fs. 485 a fs. 495 (Tomo II)**, que los hechos fue un aviso de emergencia en la noche. Que él estaba a cargo de una patrulla, tenían que salir en esos instantes y se produjo un tiroteo en una casa en Rahue Alto. Les avisan, que se estaba desarrollando una reunión en Rahue. Se fueron en una camioneta americana. Interrogado con cuánta gente fue, dice que si mal no recuerda se fue con 15, que estaba con tenida de combate y fusil de guerra. Que los vehículos no eran muy apropiados para movimiento estratégico y menos en la noche. Antes que llegaran se había dispersado la mayor parte de los concurrentes a la reunión, que supuestamente era donde se dirigían ellos a detener esas personas y ahí se produjo un tiroteo por los soldados de la patrulla y los tipos que iban huyendo. No hubo disparos cruzados. Consultado si vio gente que salió de esa reunión o presume, aduce que, no, “nosotros vimos, precisamente por eso uno de los soldados alcanzó a este muchacho” que acaba de mencionar y fue el único que falleció esa noche. Examinado si ellos llegan y se estacionan, acota que, no, que no alcanzaron a estacionarse. La patrulla se bajó sobre marcha porque los tipos salieron huyendo. Que las personas salieron corriendo hacia los patios posteriores y saltando las cercas. Justamente lo alcanzó el disparo cuando estaba saltando las cercas. Aclarado si el conductor también se baja, afirma que no, para eso iban los soldados con el oficial que iba a cargo, en este caso él. Interrogado el por qué le dispararon a esta persona, manifiesta que la orden era esa, supuestamente estaban en reuniones de confabulación. Que él iba a cargo del personal y al mando de la patrulla, mando jerárquico. Examinado, por sus subalternos sabían

que tenían que disparar por instrucción, dice “yo no era el que disponía esas órdenes”. Preguntado, si como jefe de patrulla ratificó esas instrucciones, afirma que obviamente. Indagado que hacen sus soldados cuando salen arrancando las personas, corren detrás ellos, se ponen en fila para disparar, qué hacen, sostiene que no, los soldados salen de la camioneta, se dispersaron tratando de cerrarle el paso, haciendo el acercamiento y fue ahí que se produjeron los disparos cuando empezaron a huir. A la pregunta a quienes detuvieron, responde: en esa oportunidad no se detuvo a nadie, fue el único joven que cayó saltando arriba de la cerca y le alcanzó un tiro de un soldado. Que él estaba con la patrulla. A la pregunta, con los subalternos, responde precisamente y concurriendo hacia la casa, que llevaban fusiles Mauser, con bala de guerra calibre 7.62. Que el cuerpo no quedó herido, quedó traspasado por la bala. Que ésta tiene un alcance de 3.000 metros y fue alcanzado a unos 50 metros, “así que imagínese”. Que la bala paso de lado a lado. No tenía signos vitales, “lo despachó inmediatamente”. Fue justo en el corazón, que “le salió por el corazón”, que ya estaba fallecido cuando lo vio. La bala lo traspasó y más encima le paso por encima del sistema circulatorio, “le voló el corazón, lo tenía fuera, se lo saco de cuajo”. A finca que el boquerón es tan grande, es tan impresionante que para qué iban a estar examinándolo, estaba “totalmente liquidado”. **En declaración judicial de fs.539 (Tomo II)**, ratifica la declaración que rola a fs. 585 y siguientes (la que consta a fs. 485 y siguientes). El acercamiento fue tan poco estratégico que cuando llegaron a la casa se tuvieron que tirar bajo los vehículos pues las personas salieron corriendo en distintas direcciones, y en ese momento, la bala de un conscripto alcanzó al muchacho. La bala que mató al joven es calibre 7.62 propia del fusil Mauser. **En declaración judicial de fs. 686 a fs. 691 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 361 a fs. 363, ratifica su declaración de fs. 409 a fs. 410 y su declaración de fs. 485 a fs. 495.

En consecuencia **no es posible dar lugar a la absolución** pedida por la defensa, por lo antes razonado, toda vez que existen los medios de prueba suficiente para comprobar que el delito de homicidio existió. Ahora bien, ponderando adecuadamente lo aquilatado con anterioridad lo cierto es que el Tribunal recalifica la calidad de autor del acusado, puesto que no corresponde al artículo 15 N° 2 sino que corresponde a la figura del mismo artículo N°1 ambos del Código Penal, este último señala: Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. En consecuencia le ha cabido responsabilidad en este hecho en calidad de autor de acuerdo al artículo **15 N°1** del código citado al acusado Gustavo Santibáñez Mangelsdorff.

G. ACUSACIONES PARTICULARES

15°) A fs. 1.027 a fs. 1.031 (Tomo IV), la abogada Catalina Ross Fredes, en representación por la Unidad del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del ramo, formula acusación particular en contra de Gustavo Santibáñez Mangelsdorff solicitando se le condene como autor del delito de homicidio simple, en carácter de lesa humanidad, previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en perjuicio de Reinaldo Rosas Asenjo, delito perpetrado en la comuna de Osorno, en septiembre de 1973.

Fundando su presentación en los siguientes antecedentes, los cuales para un mejor entendimiento se estructuran de la siguiente forma:

A. Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular: la querellante da por reproducidos los hechos señalados en la letra A) a la C), numerales 2° y 3°) de la acusación fiscal.

B. Calificación jurídica del ilícito: comparte lo razonado por el Tribunal en el auto acusatorio, en cuanto se desprenden cargos fundados para considerar a Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, autor del delito de homicidio simple, en carácter de lesa humanidad, previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal en perjuicio de Reinaldo Rosas Asenjo.

C. Circunstancias que deben influir en la aplicación de la pena: considera que concurre la circunstancia de la agravante 8ª del artículo 12 del Código Penal, respecto de la participación que le cabe en la comisión del ilícito al acusado por el Tribunal como autor de homicidio simple, en su carácter de lesa humanidad en perjuicio de la víctima, toda vez que plantea que se desprende de lo obrado que quien llevó adelante la comisión de los hechos ostentaba la calidad de funcionario público. Reproduce el artículo 12 circunstancia 8ª del texto penal y se apoya en lo planteado en esta circunstancia por el profesor Enrique Cury. Que el artículo 260 del Código Penal define el carácter de funcionario público, en materia penal. En lo concreto sostiene que el acusado como autor, en la ejecución del delito de la presente causa, lo ejecuta prevaleciéndose, o en el uso de su calidad de funcionario público, al ser parte de una institución estatal, como el ejército de Chile, ejecutando una política de persecución y amedrentamiento contra la población civil de la región de Los Lagos, específicamente la ciudad de Osorno. Para fundar la concurrencia de la agravante señalada, en perjuicio del acusado, solicita tener por reproducidos todos los medios de prueba considerados en el basamento primero del auto acusatorio de fs. 1.008 y siguientes.

D. Solicitud de imposición de pena al acusado: estima que considerando la pena asignada al delito por el que se le acusa, su grado de

ejecución, la participación, las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrente en la especie y lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del Código Penal, requiere se le aplique al acusado Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, 15 años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales del artículo 28 y 38 del mismo cuerpo legal, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Solicita en caso de resolver e imponer una pena significativamente menor, tener presente en cuanto a los beneficios de la Ley 18.216 los estándares normativos en materia de derechos humanos, cita el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

16°) Que, haciéndonos cargo de la acusación particular de **fs. 1.027 a fs. 1.031 (Tomo IV)**, presentada por la abogada Catalina Ross Fredes, respecto de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff, mantiene la misma calificación de los hechos y participación y solo discute las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal 12 N°8, del Código Penal. Las que serán analizadas con posterioridad.

H. ADHESIÓN A LA ACUSACIÓN

17°) A **fs. 1.077 a fs. 1.097 (Tomo IV)** el abogado **Vladimir Alberto Riesco Bahamondes**, en representación de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, Marianela Quiteria Rosas Asenjo, Carmen Gloria Rosas Asenjo, Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benecio Rosas Asenjo, en lo principal de su escrito adhiera a la acusación fiscal, dictada en contra de Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, por su responsabilidad penal en el delito de homicidio cometido en perjuicio de Reinaldo Rosas Asenjo. Agregando que al momento de fallar se aplique al acusado la pena el delito de homicidio considerando que atendida su calidad de funcionario público, oficial de ejército, y por lo mismo agente del Estado, la circunstancia 8° de artículo 12 del Código Penal.

18°) Que haciéndonos cargo de la adhesión a la acusación, el Tribunal sobre este materia nada tiene que reflexionar, y sobre la alegación de la circunstancia agravante será ponderada en los considerandos posteriores.

I. REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD

19°) Para mayor ilustración y atendido además que se ha alegado la prescripción gradual que se analizará más adelante, es necesario reflexionar sobre el delito de lesa humanidad.

Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.**

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

A. Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excma. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a **Homicidio simple**, es un delito de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

B. Que a modo de ilustración, el máximo Tribunal así se ha pronunciado en las causas roles 31.030 – 1994; 469 – 1998; 517 – 2004; 288 – 2012 y 1.260 – 2013, 40.168-2017, 4.080-2018, entre muchas otras. Y de la misma forma, como se ha fallado reiteradamente por este Tribunal en las causas roles: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305.

C. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni

para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

a. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”**, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso **“Barrios Altos versus Perú”** de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid Arellano y otros versus Chile” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excm. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta

„conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

b. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y

averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

c. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

- i. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.
- ii. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.
- iii. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.
- iv. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.
- v. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.
- vi. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.
- vii. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

d. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

e. Cabe puntualizar que en el caso de “**Hilario Barrios Varas**” (**causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema**), en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la

Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

J. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

20°) Atenuante de Responsabilidad Penal: el abogado Patricio Contreras Boero, en representación de Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff de **fs. 1.152 a fs. 1.157 (Tomo IV)**, alega como atenuantes de responsabilidad penal, la prevista en el **artículo 11 N°6** del Código Penal y la del **artículo 103** del mismo cuerpo legal.

A. Que en relación a la minorante del **artículo 11 N°6** del Código Penal. El Tribunal **dará lugar** a esta minorante, en **calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**. Al acusado le favorece esta circunstancia minorante, toda vez que de sus extractos de filiación y antecedentes de **fs. 504 (Tomo II), a fs. 588 (Tomo II)** (copia a fs. 1.119 Tomo IV). Todo a la época de los hechos, esto es, entre el 12 y 13 de septiembre de 1973 no tenía antecedentes penales pretéritos. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia.

21°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual:

En relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe precisar:

a. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse

dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

b. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karina Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192)

quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

c. Recientemente la Iltrma. **Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019**, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

d. Del mismo modo, **Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidio calificado en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz,**

Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”. En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y **se rechaza** la petición realizada por el abogado Patricio Contreras Boero, en representación Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff de fs. 1.152 a fs. 1.157 (Tomo IV).

22°) Agravantes de Responsabilidad Penal.

A). La abogada **Catalina Ross Fredes**, en su escrito de **fs. 1.027 y siguiente (Tomo IV)**, invocó como circunstancia agravante la prevista en el **artículo 12 N°8** del Código Penal.

B). El abogado **Vladimir Riesco Bahamondes**, en su presentación de **fs. 1.077 y siguientes (Tomo IV)**, solicitó la circunstancia agravante establecida en el numeral **8 del artículo 12** del Código Penal. Que habiéndose adherido a la acusación fiscal y no habiendo presentado acusación particular no es posible dar lugar a la agravante pedida por el querellante Vladimir Riesco Bahamondes.

23°) Que en relación a la agravante del artículo **12 N°8** del Código Penal, tal como este Tribunal lo ha dicho en la causa 114.000, homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotzqui, en causa rol 44.305, homicidios calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, con un mayor estudio de los antecedentes y así lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas este Tribunal acogerá la agravante pedida del artículo 12 N°8 del

texto punitivo para el acusado **Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff**. En este punto hay que hacer una distinción importante. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se comentan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad, también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, por ejemplo en la causa rol N° 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si el acusado no hubiera sido agente del Estado, no habrían tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, como lo hizo, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionario público no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes públicos. Además, el artículo 63 no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, podría haber aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de calidad de ser funcionario público. Teniendo además en consideración que se estaba bajo un régimen militar, el que con mayor razón el acusado aprovecha la calidad de funcionario público para cometer el delito. El delito de homicidio simple no tiene en el tipo el factor funcionario público, otros delitos tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el caso. Si no hubiera existido el régimen militar, si la persona no fuera oficial del ejército no habría sido posible que esa patrulla hubiera ido al lugar de los hechos. **Por ello es que debe acogerse la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal.**

24°) Determinación de la Pena. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, todo lo anterior debe combinarse con la posibilidad cierta que los encartados acceda a cumplir parcialmente alguna pena en libertad según los beneficios de la **Ley 18.216** (salvo que exista una prohibición legal o no esté de acuerdo con los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos en la materia).

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente), jugando un rol fundamental que en la determinación de la pena exista la posibilidad que los acusados cumplan una parte de la pena en libertad. Pues debe preferirse aquello a que cumpla una parte de la pena privados de libertad (salvo que exista prohibición legal o esté en contra de los estándares normativos e interpretativos, sobre derechos humanos en la materia).

25°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica del delito de: **Homicidio Simple** de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo**, perpetrado en la comuna de Osorno, entre el 12 y 13 de septiembre de 1973. Delito previsto y sancionado en el **artículos 391 N°2 del Código Penal**, vigente a la época de los hechos, que tiene una pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio en cualquier otro caso.

26°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 1.008 a fs. 1.010 (Tomo IV)**, de 19 de marzo de 2021, el encartado **Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff**, está acusado en calidad de autor por el delito de **Homicidio Simple** en la persona de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo**, delito perpetrado entre el 12 y 13 de septiembre de 1973, en la comuna de Osorno. Ahora bien, es necesario razonar lo siguiente:

En cuanto a la pena a imponer para el acusado **Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff**, a este le beneficia una atenuante, esto es, la contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal en calidad de simple y le perjudica la agravante del artículo 12 N°8 del texto citado. Haciendo la compensación racional de las circunstancias modificatorias en conformidad al artículo 68 del texto legal, el Tribunal puede recorrer al aplicar la pena toda su extensión. En este caso por el **delito de homicidio simple de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo**, se aplicará la pena de **DOCE AÑOS de PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO** más las accesorias legales.

27°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus Modificaciones Posteriores.

Respecto al acusado **GUSTAVO EDUARDO SANTIBÁÑEZ MANGELSDORFF**, atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado**. En este caso se tiene en consideración, el informe pericial psiquiátrico N°1528-2018 del Servicio Médico Legal, Departamento de Salud Metal Santiago, de fecha 08 de enero de 2019 que rola a **fs. 825 bis a fs. 828 (Tomo III)**, el cual concluye que el examinado no presenta manifestaciones psicopatológicas de importancia médico legal y sus facultades mentales se encuentran dentro de rangos clínicos normales.

28°) Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente el acusado tuvieran una pena inferior de igual forma **no puede acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en causa rol causa rol 2-2013-V de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa ro 2-2012 del Juzgado de Letras de Pucón, causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt.

a) Un **estándar** en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos

fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

b) Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

c) Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de

acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357).

d) Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

e) Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

i. **Caso Barrios Altos versus Perú**, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

ii. **Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile**, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables

reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

iii. Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.

iv. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de

facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

v. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

vi. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas

efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

f) Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

g) Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

h) En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de

Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **Homicidio simple**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (**Nogueira, Humberto** (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

29°) En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarle algún beneficio de la ley 18.216 al acusado** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (**Núñez, Constanza** (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la **II^{ta}. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de**

2020, en causa rol 1.052-2019, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). En consecuencia **no es posible otorgarle al acusado ningún beneficio y deberá cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

VIII. EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

30°) Que a **fs. 1.077 a fs. 1.097 (Tomo IV)**, en el primer otrosí de su presentación, el abogado **Vladimir Alberto Riesco Bahamondes**, en representación de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, de Marianela Quiteria Rosas Asenjo, de Carmen Gloria Rosas Asenjo, de Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benicio Rosas Asenjo, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Álvaro Saez Willer, abogado Procurador Fiscal de Temuco, por la suma total de **\$2.000.000.000** (dos mil millones de pesos), o lo que el Tribunal determine de acuerdo al mérito del proceso, por concepto de daño moral, con los reajuste e intereses, desde la fecha de notificación de la demanda y las costas del juicio. El demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. Hechos: el demandante civil refiere al informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en el cual se señala que Reinaldo Rosas Asenjo, hijo y hermano de sus representados, es muerto el día 13 de septiembre de 1973, que la víctima se encontraba en una reunión el día señalado en una casa de la ciudad de Osorno, cuando una patrulla militar irrumpió con la intención de detener a los participantes, Reinaldo Rosas intentó huir y los militares le dispararon, dejándolo herido de muerte. Que los hechos son reproducidos por el sitio web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en los mismos términos. Asimismo en la acusación de oficio los que reproduce, que de ellos se puede concluir que el homicidio fue ejecutado por agentes del Estado, los que se desplazaron al lugar de los hechos en vehículos del ejército y por lo mismo de propiedad del Estado, y cuyo armamento también era fiscal, por lo que el rol del Estado de Chile como tercero responsable de este crimen contra la humanidad, es evidente e indesmentible. Que el daño sufrido por los querellantes consta en informes extendidos por el Programa PRAIS de Osorno, siendo un órgano del Estado quien ratifica la existencia del daño moral respecto de sus representados.

B. El derecho: que el homicidio de Reinaldo Rosas Asenjo, se encuentra establecido por diversos medios de pruebas y que fue por agentes del Estado, lo cual lo lleva a demandar al Fisco de Chile como tercero responsable de

las acciones desplegadas por sus agentes en el marco de la dictadura militar, tal como ha prescrito previamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Excma. Corte Suprema en otros casos similares al de autos. Refiere al Decreto Supremo N°355 que crea la Comisión de Verdad y Reconciliación e informe Rettig, al artículo 38 de la Constitución Política de la República, la Ley 18.575 artículo 4; que el delito también constituye una infracción al Convenio de Ginebra sobre el tratamiento a los prisioneros de guerra y a las personas civiles en tiempo de guerra, reproduce el artículo 3 del mismo, que la aplicación de dicho Convenio obedece a actuaciones y manifestaciones tanto expresa como tácita de la Junta de Gobierno, quienes son contestes en que en septiembre de 1973 y 1976 existía en Chile una situación de guerra interna, por lo que el homicidio de autos constituye una infracción grave a los citados convenios y su persecución se funda en principios de derecho internacional general que forma parte del derecho internacional positivo, fundamenta con doctrina lo precedente. Plantea la defensa que la imprescriptibilidad de estos crímenes tiene en cuenta además el especial contexto histórico en que se cometieron, toda vez que fueron ejecutados por agentes de un régimen de facto. Sostiene que Chile al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos y asumir entre otros los deberes que le impone su artículo 1, ha contraído la obligación general de proteger, respetar y garantizar cada uno de los derechos del pacto.

Prescripción de la acción civil: que una eventual declaración de prescripción de la acción civil en autos, no sería acorde con el deber asumido por el Estado, se apoya en el artículo 148 del Convenio de Ginebra y jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que desde los años 2005 y 2006 han dictados diversos fallos que se inclinan por la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como en este caso refiera los roles 559-04 y 266-04 de la Excma. Corte Suprema. Sostiene que la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de las acciones civiles en estas materias, constituye una discusión de larga data que se ha visto superada por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. Cita fallos que recogen el criterio de imprescriptibilidad de las acciones civiles en contra del Fisco por hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos. Que pretender el empleo de las normas del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad como un derecho común supletorio a todo el régimen jurídico resulta improcedente. Acota el demandante civil que la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el Estado. Hace presente el caso Almonacid Arellano y otros contra el Fisco de Chile y caso

Ordenes y otros contra Estado de Chile. Soslaya que la víctima Reinaldo Rosas Asenjo, al momento de su asesinato era un menor de 17 años de edad, que vivía con sus padres y hermanos, por lo que su muerte rompió en forma violenta y repentina la vida de su familia, generando marcas emocionales imborrables que se mantienen hasta el día de hoy y que deben ser reparadas.

Daño Moral y el monto de la indemnización: entiende este como el dolor y sufrimiento generado en los demandantes a partir del homicidio de Reinaldo Rosas Asenjo, hijo y hermanos de los actores, resulta enorme, por cuanto está presente en su vida el vacío provocado a partir de este crimen cometido por los agentes del Estado liderados por el ex teniente del ejército Gustavo Santibáñez Mangelsdorff, todos agentes públicos que actuaron en el ejercicio de sus funciones, por lo cual actuaban bajo dependencia del Fisco de Chile, demandado en autos. Se afirma en jurisprudencia y doctrina concerniente al daño moral y la prueba del mismo. Por todo lo anterior, demanda indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de Derecho Público, representado por Álvaro Saez Willer, abogado Procurador Fiscal de Temuco, atendida la calidad de tercero civilmente responsable del daño moral causado a sus representados, condenándolo a pagar la suma total de **\$2.000.000.000.- (dos mil millones de pesos)** lo que se detalla en: \$400.000.000.- (cuatrocientos millones de pesos) para doña Juana Hortencia Asenjo Asenjo; \$400.000.000.- (cuatrocientos millones de pesos) para doña Marianela Quiteria Rosas Asenjo; \$400.000.000.- (cuatrocientos millones de pesos) para doña Carmen Gloria Rosas Asenjo; \$400.000.000.- (cuatrocientos millones de pesos) para doña Alejandra Carola Rosas Asenjo y \$400.000.000.- (cuatrocientos millones de pesos) para don Luis Benecio Rosas Asenjo, o lo que el Tribunal determine en justicia, de acuerdo al mérito del proceso, con reajustes e intereses desde la fecha de notificación de esta demanda, con costas.

31°) Que de **fs. 1.115 a fs. 1.143 (Tomo IV)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco, por el **Consejo de Defensa del Estado, Álvaro Saez Willer**, contesta la demanda civil entablada por el abogado Vladimir Riesco Bahamondes, en representación de Juana Hortencia Asenjo Asenjo; Marianela Quiteria Rosas Asenjo; Carmen Gloria Rosas Asenjo; Alejandra Carola Rosas Asenjo y Luis Benecio Rosas Asenjo, quienes invocan la calidad de madre la primera y hermanos de la víctima los restantes. Solicitando acoger las excepciones y defensas opuestas y negar lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar sustancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización de perjuicios, además de

acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su cómputo e improcedencia en costas.

A. Para el caso de acreditarse el vínculo de parentesco, excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los actores, y por haber sido ya reparados en la forma que se expresara: proclama el demandando civil que para el caso de los actores que invocan la calidad de hermanos de la víctima y para el caso que acrediten dicho vínculo de parentesco, opone la excepción de improcedencia de la indemnización reclamada, por haber sido ellos preteridos legalmente, en cuanto afirman ser hermanos de la víctima. Que la indemnización reclamada se desenvuelve en el marco de infracciones a los derechos humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional. Que se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que estos no se repitan en el futuro, como la necesidad de decidir qué proporción de recursos económicos públicos deberá ser destinado a reparar víctimas. Refiere a la ley 19.123 la que hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero- preferentemente en cuotas mensuales. Lo que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnización ha significado, a diciembre de 2019, las que detalla y cuya suma de desembolso total es de \$992.084.910.400.-. Que para que ello fuera viable se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo más cercano, esto es padres, hijos y cónyuge, pretiriendo el resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos. A referencia al derecho comparado aludiendo al concepto de “loss of consortium”, esto es el derecho a la reparación por perder al cónyuge o hijo, reduciéndolo a personas determinadas. Trae a colación el artículo 43 de la ley 16.744. Adiciona que la pretensión económica demandada es improcedente, porque existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los hermanos de causantes víctimas de violación a los derechos humanos, como beneficiarios de las leyes de reparación. Sin perjuicio alega que los actores han obtenido reparación satisfactiva, que su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras prestaciones, que vienen a satisfacer el daño moral sufrido. Cita a Fueyo Posteriormente señala que las reparaciones simbólicas realizadas. Aduciendo que los actores son titulares por ley del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), por lo que el cúmulo de reparaciones ha producido satisfacción de los mismos daños y cuya reparación se persigue en el presente

juicio, por lo que no pueden ser exigidos nuevamente. Refiere a jurisprudencia y doctrina atinente. Finalmente sostiene que en mérito de lo expuesto opone a la acción indemnizatoria deducida las excepciones de preterición en lo económico, en la calidad de hermanos de la víctima, y de reparación satisfactiva.

B. Excepción de prescripción extintiva:

a. Normas de prescripción aplicables: opone la excepción de prescripción de las acción de indemnización de perjuicios deducida por el mencionado actor, con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; solicitando que, por encontrarse prescrita la demanda, se rechace en todas sus partes. Apunta que, según lo expuesto en la demanda, el homicidio de Reinaldo Rosas Asenjo, se produjo entre los días 12 y 13 de septiembre de 1973. Es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **03 de enero de 2022**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

b. Generalidades sobre la prescripción: Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, citando jurisprudencia nacional al efecto. Advierte que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I,

se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Adopta que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Insiste en que la prescripción es una institución de aplicación general en todo ámbito jurídico y de orden público. Adopta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

c. Fundamento de la prescripción: comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que, los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permite concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

d. Jurisprudencia sobre la materia: Cita la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013. Reflexionando en los diferentes considerando citados, 1). Que el principio general que rige la materia es de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva. Agrega que, 2). Los Tratados Internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los

Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establece se refiere solo a la responsabilidad penal. 3). Que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos el derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. 4). Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. 5°) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde ese momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la personas desaparecida. Adiciona fallo de la Excma. Corte Suprema.

e. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Arguye que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial. En efecto basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos e disposición, tales como renuncia o transacción, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tacita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

f. Normas contenidas en el Derecho Internacional: funda que, en relación con las alegaciones expuestas por el actor en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se

hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Reseña a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Convenio de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 60/147 de 21 de marzo de 2006, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Acota que, el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al efecto el caso "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile" y "Martínez Rodríguez v otra con Fisco de Chile". No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se rechazase la demanda de autos, por encontrarse prescrita la acción civil deducida.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: vislumbra que sin perjuicio de estar ya negada la obligación misma de indemnizar con respecto a los hechos a los que se refiere la demanda de autos, opone además las alegaciones en cuanto a la existencia del daño reclamado, naturaleza de la indemnización solicitada y el monto pretendido. Aduce que la acción indemnizatoria por daño moral y que se solicita por este concepto la exorbitante suma \$2.000.000.000.- a razón de \$ 400.000.000.- para cada uno de los demandantes, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda , y costas. Que se alega que los actores demandan indemnización por el daño moral que, por repercusión, les habría causado la muerte de don Reinaldo Rosas Asenjo, invocando para ello una pretendida calidad de madre y hermanos en sus respectivos casos, sin embargo, no existe antecedentes alguno que acredite legalmente tener la calidad, en los términos de los artículos 305 y siguientes del Código Civil. Que la ley determina en forma imperativa cuales son los medios para acreditar el parentesco y los vínculos familiares, impidiendo que se haga por una vía distinta. El que los demandantes no demuestren la calidad que han invocado para impetrar indemnización por daño moral, conduce a que no ostenten la calidad

de víctimas por repercusión y por tal carecen de legitimación activa en la acción resarcitoria que han ejercitado, por lo que debe ser rechazada-.

a. Fijación de la indemnización por daño moral: Alega que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando la definición que ha realizado la Excma. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral. Anexa que en esa perspectiva la cifra total de \$2.000.000.000.- a razón de \$400.000.000.- para cada uno de los demandantes, resulta excesiva, teniendo especialmente en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de justicia.

b. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales: en subsidio de las excepciones precedentes opuestas que trae como consecuencia enervar la acción deducida, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos el Tribunal debe considerar todo los pagos recibidos a través de los años por lo actor, y sus familiares, de parte del Estado conforme a las leyes de reparación y también a los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. Además es pertinente hacer presente que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los Tribunales en esta materia.

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada: hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Que a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Realiza argumentos en esa línea citando jurisprudencia de los tribunales superiores.

Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger la acción deducida en autos y se condene a su representado al pago de indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoria y su representado incurra en mora.

E. Respecto de las costas de la causa: que atendido el compromiso del Estado democrático con los Derechos Humanos, yendo más allá de lo que en derecho le era exigible, asumiendo los costos no solo de la reparación de las víctimas, sino que también de la promoción y conmemoración de los Derechos Humanos como eje estructurante de la vida en sociedad, resulta improcedente que se le condene en costas, siendo, además, evidente que a todo evento, tiene motivo plausible para litigar.

32°) Que haciéndonos cargo de la **contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile**, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

- A.** Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los actores, y por haber sido ya indemnizado los demandantes.
- B.** Excepción de prescripción extintiva.
- C.** En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas.

A. Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los actores, y por haber sido ya indemnizado los demandantes. *(respecto de la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado Vladimir Riesco Bahamondes, en representación de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, de Marianela Quiteria Rosas Asenjo, de Carmen Gloria Rosas Asenjo, Alejandra Carola Rosas Asenjo y de Luis Benecio Rosas Asenjo).* Se estará a lo ya razonado en las siguientes causas: **Causa rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014; **Causa rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014; **Causa rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014; **Causa rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de

Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015; **Causa rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016; **Causa rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015; **Causa rol 29.877**, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016; **Causa rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016; **Causa rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016, **Causa rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015; **Causa rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016; **Causa rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016; **Causa rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016; **Causa rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016; **Causa rol 63.541**, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016; **Causa rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017; **Causa rol 114.048**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017; **Causa rol 10.868**, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017; **Causa rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017; **Causa rol 10.851**, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016; **Causa rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por

el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017; **Causa rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017, **Causa rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018; **Causa rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020; **Causa rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020; **Causa rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020; **Causa rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018; **Causa rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018; **Causa rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018; y **Causa rol 114.042**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.

b.1) Sobre lo anterior, **esta excepción debe ser rechazada**. En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de

los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excma. Corte Suprema**, en especial:

b.2) El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, **roles 2918-13, 3841-12 y 5436-10**. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos, *la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile*. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que los demandantes hayan sido favorecidos por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También **será rechazada**. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo **rol 1424-2013** de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los

familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excm. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excm. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excm. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención

Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma , lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I , artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio Pedrals: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo**. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

d.1) Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un

marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls**. *Una Teoría de la Justicia*. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

d.2) Que en la misma línea, el autor citado en su obra *Liberalismo Político*, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

d.3) Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo *La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile*, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro *“Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007”* (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro *“Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena”* (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos

Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer una análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

d.4) Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son

las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia **procede rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.**

d.5) Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

- i. **Causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros,** sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.
- ii. **El fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021,** sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:...“Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “**falta de servicio**”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la

responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive “se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

d.6) Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre la indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un Delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia aparece justo y razonable que se otorgue un monto de: **\$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos)**, para la madre la víctima doña Juana Hortencia Asenjo Asenjo; y la suma de **\$100.000.000.- (cien millones de pesos)** para cada uno de los hermanos de la víctima esto es: doña Marianela Quiteria, doña Carmen Gloria, doña Alejandra Carola y don Luis Benecio todos de apellidos Rosas Asenjo, por lo razonado anteriormente, y así se dirá en lo resolutive del fallo. Lo que equivale a una suma total de \$550.000.000.- (quinientos cincuenta millones de pesos).

E. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, éste pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.

33°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia del delito de homicidio simple de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo**, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. De fs. 1.036 (Tomo IV) Certificado de nacimiento de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, padres Luis Venicio Rosas Ruiz y Juana Hortencia Asenjo Asenjo.

B. De fs. 1.037 (Tomo IV) Certificado de nacimiento de Juana Hortencia Asenjo Asenjo.

C. De fs. 1.038 (Tomo IV) Certificado de defunción de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo.

D. De fs. 1.039 (Tomo IV) Certificado de nacimiento de Alejandra Carola Rosas Asenjo, padres Luis Venicio Rosas Ruiz y Juana Hortencia Asenjo Asenjo.

E. De fs. 1.040 (Tomo IV) Certificado de nacimiento de Carmen Gloria Rosas Asenjo, padres Luis Venicio Rosas Ruiz y Juana Hortencia Asenjo Asenjo.

F. De fs. 1.041 (Tomo IV) Certificado de nacimiento de Marianela Quiteria Rosas Asenjo, padres Luis Venicio Rosas Ruiz y Juana Hortencia Asenjo Asenjo.

G. De fs. 1.042 (Tomo IV) Certificado de nacimiento de Luis Benecio Rosas Asenjo, padres Luis Venicio Rosas Ruiz y Juana Hortencia Asenjo Asenjo.

H. De fs. 1.043 a fs. 1.050 (Tomo IV), informe de daños emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), de fecha julio de 2021, respecto de doña Alejandra Rosas Asenjo, el cual concluye que la suscrita muestra consecuencias emocionales ligada al impacto que generan en ella como en su familia, la muerte traumática de su hermano a manos de agentes del Estado, principalmente por el deterioro familiar causado por este hecho represivo. La falta de justicia e impunidad, hacen que permanezca un sentimiento de frustración y rencor por la injusticia a la cual como familia han sido sometidos.

I. De fs. 1.051 a fs. 1.059 (Tomo IV), informe de daños emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), de fecha julio de

2021, respecto de doña Carmen Gloria Rosas Asenjo, el cual concluye las circunstancias familiares en torno al secuestro y asesinato de su hermano marcan y originan inevitablemente daños irreversibles en su estructura de personalidad con un daño expansivo al grupo familiar. El carácter traumático, originado por el asesinato y posterior ausencia de su hermano, en términos afectivos y sociales, sumando a la observación directa de un cambio profundo y doloroso de su madre.

J. De fs. 1.060 a fs. 1.067 (Tomo IV), informe de daños emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), de fecha julio de 2021, respecto de doña Marianela Rosas Asenjo, el que concluye que la rigidización de los límites de la familia producto del asesinato de su hermano, tiene consecuencias significativas que debe cumplir en su sistema familiar; como es la interrupción de las tareas asignadas a cada etapa de su desarrollo, situación que se observa en las labores que debió desarrollar como los cuidados de sus hermanos menores, labores de hogar además de presenciar el deterioro traumático de la personalidad de su madre. La persecución posterior al grupo familiar generó la carga traumática.

K. De fs. 1.068 a fs. 1.076 (Tomo IV), informe de daños emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), de fecha julio de 2021, respecto de doña Juana Hortencia Asenjo Asenjo, el cual concluye que el asesinato de Reinaldo Rosas Asenjo de 17 años de edad, en manos de agentes del Estado en dictadura cívico militar, constituye una experiencia de carácter traumático que afecta gravemente la salud psicosocial de los familiares sobrevivientes; el daño provocado circunscribe a todo el grupo, tanto en las dinámicas individuales como familiares de cada integrante. Es así como la vida de la familia Rosas Asenjo se encuentra marcada por hechos de vulneración de los Derechos Humanos, siendo privada de la existencia de hijo/hermano a temprana edad, comenzando así una interminable búsqueda de consuelo y justicia. Dicha situación marca y origina inevitablemente daño irreversible en su madre, prevalecen en ella emociones de melancolía y dolor vivenciados intensamente en tiempo presente (...).

L. De fs. 1.100 a fs. 1.006 (Tomo IV), informe de daños emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), de fecha noviembre de 2021, respecto de don Luis Benecio Rosas Asenjo, que concluye en lo pertinente que las circunstancias familiares en torno al asesinato de su hermano marcan y originan inevitablemente daños irreversibles en su estructura de personalidad. El carácter traumático, originado en la muerte sorpresiva y ausencia

de su hermano, en términos afectivos, sociales y económicos determina efectos emocionales y estructurales en la personalidad de Luis y su familia.

M. Testimonios sin tachas y legalmente examinados de Angélica Gallegos Toledo de **fs. 1.171 a fs. 1.172 (Tomo IV)** y de Inés del Carmen Barría Bassay, **de fs. 1.173 a fs. 1.174 (Tomo IV)**, quienes son conteste y en síntesis en declaran que conocen y han escuchado el testimonio de los demandantes quienes son madre y hermana respectivamente quienes sufrieron un trauma psicológico y social por el asesinato Reinaldo Rosas Asenjo.

34°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por el delito de Homicidio Simple de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, está plenamente acreditado.** Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedente la indemnización que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por el demandante; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por el actor y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para el actor, por el delito de Homicidio Simple de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, cometido por los Agentes del Estado, la suma que ante se ha detallado, esto es la suma de \$150.000.000.-** (ciento cuentas millones de pesos) para Juana Hortencia Asenjo Asenjo, madre la víctima; de **\$ 100.000.000.-** (cien millones de pesos) para cada uno de los hermanos de la víctima Reinaldo Patricio Rosas Asenjo a saber: doña Marianela Quiteria Rosas Asenjo, Carmen Gloria Rosas Asenjo, Alejandra Carola Rosas Asenjo y don Luis Benecio Rosas Asenjo. Lo que da una **suma total de: \$550.000.000 (quinientos cincuenta millones de pesos).**

35°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior que quede

ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

IX. ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N°6, 12 N°8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 56, 61, 68, 69 y 391 N°2 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Ley 20.357**, **Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

I.- **QUE NO HA LUGAR** a la excepción de fondo, esto es la **prescripción de la acción penal** interpuesta por el abogado Patricio Contreras Boero, en representación del acusado Gustavo Eduardo Santibáñez Mangelsdorff a fs. 1.152 y siguientes (Tomo IV).

II. **QUE SE CONDENA** a **GUSTAVO EDUARDO SANTIBÁÑEZ MANGELSDORFF**, R.U.N. 6.394.573-0, ya individualizado, en calidad de **AUTOR** a la pena de **12 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, MÁS LAS ACCESORIAS LEGALES** correspondientes a la inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por el delito de homicidio simple de Reinaldo Patricio Rosas Asenjo. Perpetrado entre el 12 y 13 de septiembre de 1973, en la comuna de Osorno. Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos, en su carácter de lesa humanidad.

III.- Que respecto al acusado **GUSTAVO EDUARDO SANTIBÁÑEZ MANGELSDORFF**, según se expresó, **no se le concederá algún beneficio de la**

ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberán cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de **abono** los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

a). PRISIÓN PREVENTIVA: Desde el 27 de diciembre de 2016, como consta de fs. 546 (Tomo II), cuando es notificado del auto de procesamiento y la prisión preventiva; **hasta el 30 de diciembre de 2016** donde le fue otorgado la libertad bajo fianza según consta a fs. 561 (Tomo III).

IV.- La pena impuesta al condenado comenzará a regir desde que **se presente o sea habido en la presente causa.**

V.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas a al acusado, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

VI.- QUE NO HA LUGAR a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Saez Willer, en representación del Fisco de Chile de fs.1.115 a fs. 1.141 (Tomo IV), esto es:

A. Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los actores, y por haber sido ya indemnizado los demandantes.

B. Excepción de prescripción extintiva.

Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

VII.- Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por el abogado **Vladimir Riesco Bahamondes**, en representación de Juana Hortencia Asenjo Asenjo, de Marianela Quiteria Rosas Asenjo, de Carmen Gloria Rosas Asenjo, de Alejandra Carola Rosas Asenjo y de Luis Benecio Rosas Asenjo, de **fs. 1.077 a fs. 1.097 (Tomo IV)**, en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del delito de homicidio simple en su carácter de lesa humanidad en la persona de **Reinaldo Patricio Rosas Asenjo**, la suma:

a). De **\$150.000.000.-** (ciento cincuenta millones de pesos) para la madre la víctima doña Juana Hortencia Asenjo Asenjo;

b). De **\$100.000.000.- (cien millones de pesos)** para Marianela Quiteria Rosas Asenjo hermana de la víctima;

c). De **\$100.000.000.- (cien millones de pesos)** para Carmen Gloria Rosas Asenjo hermana de víctima;

d). De **\$100.000.000.- (cien millones de pesos)** para Alejandra Carola Rosas Asenjo hermana de víctima y

e). De **\$100.000.000.- (cien millones de pesos)** para Luis Benecio Rosas Asenjo hermano de la víctima.

Lo que da una **suma total de \$550.000.000.- (quinientos cincuenta millones de pesos).**

VIII.- La suma anterior deberán ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Que se condena en costas, al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente al sentenciado, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarles sobre las decisiones del presente fallo y **en su oportunidad, archívese.**

Consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 25-2011.-

Dictada por don **ÁLVARO CLAUDIO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (YST).